CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISIÓN PRIMERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2026
CPR-CS-0336-2026

COMISIÓN CUARTA
CAMARA DE REPRESENTANTES
Recibido Por: Natalia V.
Fecha: 01/10/2026
Hora: 5:51
Número de Radicado: 861

Doctores:
Néstor Eduardo Imbett
Secretario Comisión Tercera
Cámara de Representantes

Raúl Fernando Rodríguez Rincón
Secretario Comisión Cuarta
Cámara de Representantes

Rafael Oyola Ordosgoitia
Secretario Comisión Tercera
Senado de la República

Alfredo Enrique Rocha Rojas
Secretario Comisión Cuarta
Senado de la República

Asunto: Remisión del Informe de la Comisión Accidental de Presupuesto de la Comisión Primera del Senado sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN).

Respetados Señores Secretarios:

Por instrucciones de la Mesa Directiva de esta Comisión y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º de la Ley 3.ª de 1992, los artículos 169 (numeral 1) y 214 de la Ley 5.ª de 1992, y los artículos 349 y 351 de la Constitución Política de Colombia, nos permitimos hacer entrega formal del Informe Final elaborado por la Comisión Accidental de Presupuesto de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, para su respectivo trámite.

Cordialmente,

Emiliano Rivera Bravo
Secretario General
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República

Adjunto documento en 81 folios.

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026

Senador
ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad

Asunto: Informe de la comisión accidental designada Proyecto de Ley No 152 de 2026 Cámara, 111 de 2026 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto General de Rentas y recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, sobre los temas de conocimiento de la Comisión Primera del Senado.

Señor presidente,

De manera atenta, nos permitimos remitir a su Despacho, el Informe de la comisión accidental designada para presentar las observaciones y recomendaciones al Proyecto de Ley No 152 de 2026 Cámara, 111 de 2026 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto General de Rentas y recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027" en lo relacionado a los temas de conocimiento de la Comisión Primera de Senado.

Esta Comisión, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 3 de 1992 y los artículos 342 y 346 de la Constitución Política de Colombia, los cuales estipulan que "*cada comisión rendirá informes y recomendaciones sobre los temas de su conocimiento a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas*", presenta este informe con relación a lo dispuesto en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de las entidades de la Comisión Primera cuyos temas competen a la comisión.

Este informe se presenta a la Comisión Primera Constitucional Permanente, con el objeto de que las observaciones y las recomendaciones formuladas por los Honorables Senadores y Entidades, sean atendidas por el ministro de Hacienda y Crédito Público y por las Comisiones Económicas del Congreso de Colombia.

Cordialmente,

SANTIAGO BARRETO TRIANA
Senador de la República **(Coordinador)**

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Senador de la República **(Coordinador)**

CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA
Senador de la República

ALFREDO RAFAEL DELUQUE
Senador de la República

HÉCTOR QUIMPO ESPINOSA
Senador de la República

JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA
Senador de la República

RAFAEL NIETO LOAIZA
Senador de la República

MANUEL VIRGÜEZ PIRAQUIVE
Senador de la República

JONATHAN FERNEY PULIDO
Senador de la República

INFORME DE LA COMISIÓN PRIMERA AL PROYECTO DE LEY SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y LEY DE APROPIACIONES

I. PRESENTACIÓN

Los integrantes designados por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado para elaborar el informe y las recomendaciones sobre los temas de conocimiento de la Comisión Primera a considerase en el marco del Proyecto de Ley No 152 de 2026 Cámara, 111 de 2026 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto General de Rentas y recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027", conformada por los Honorables Senadores, Carlos Alberto Benavides, Alfredo Rafael Deluque, Hector Olimpo Espinosa, José Nicolás Gómez, Rafael Nieto Loaiza, Manuel Virguez Piraquive, Jonathan Ferney Pulido, como coordinadores de la misma Santiago Barreto Triana y Fabio Raul Amin Saleme, presentamos el resultado de las actividades que se adelantaron para dar cumplimiento a la labor encomendada, de recoger las observaciones y recomendaciones en torno a los temas de conocimiento que trata la Comisión Primera, las cuales fueron escuchadas en audiencia pública celebrada los días 15 y 16 de septiembre de 2026, con el fin de ser expuestas ante las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas.

Lo anterior en el marco del **Artículo 4º Ley 3ra de 1992**. Que establece que *"Para los efectos previstos en los artículos 342 y 346 de la Constitución Nacional serán de asuntos económicos las Comisiones Tercera y Cuarta. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de los proyectos de presupuestos, de rentas y apropiaciones, plan nacional de desarrollo y plan de inversiones, cada comisión rendirá informes y recomendaciones sobre los temas de su conocimiento a las Comisiones Económicas Tercera y Cuarta.*

En concordancia, lo relacionado a la Comisión Primera Constitucional como se establece en el Artículo 2, Ley 3 de 1992, está, conocerá de: *Reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos* ***(...)***.

Para la elaboración de este informe, los firmantes tuvimos en consideración la Ley 2059 del 22 de diciembre de 2025 ¨Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026 y texto propuesto para el Proyecto de Ley No 152 de 2026 Cámara, 111 de 2026 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto General de Rentas y recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027"

De igual forma, se realiza una evaluación de impacto socioeconómico frente a la incidencia que tiene la asignación presupuestal para las entidades en cumplimiento de su misionalidad, dejando sentadas unas observaciones que podrían advertir dificultades en el funcionamiento de algunas entidades y

que además afectarán sus proyectos de inversión, redundando en posibles consecuencias negativas para el normal desarrollo de las actividades de cada una de estas.

II. PRESUPUESTO DE RENTAS – VIGENCIA 2025

Del total del presupuesto previsto para la vigencia 2027 que corresponde a $**634,9 billones**, frente al presupuesto aprobado en el año 2026 $**546,9 billones**. Se incrementa respecto a 2026 en 88 billones de pesos en comparación con el presupuesto de la vigencia 2026. Pretende tener un ahorro por austeridad de $17,4 billones.

El servicio de la deuda pública se consolidó como uno de los rubros de mayor crecimiento de las cuentas nacionales, en 155 billones. Se considera que absorbe aproximadamente una cuarta parte del presupuesto.

Funcionamiento $392.560 billones

- $72.28 billones (3.4 %) corresponden a gastos de personal
- $17,88 billones (0.8 %) a adquisición de bienes y servicios
- $297,5 billones (14,0 %) a transferencias de ley
- $2,3 billones (0,1 %) a gastos de comercialización y producción
- $1,3 billones (0.1%) a gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

Inversión $86,9 billones

- $86,9 billones (4,1 %) a inversión

Pago del servicio de la deuda $155,4 billones (7,3 %)

- $111.0 billones al pago de deuda principal
- $94,2 billones al pago de intereses

Cuadro 1.6.1. Presupuesto General de la Nación 2026-2027

Miles de millones de pesos

Concepto	2026*	2027 Proyecto	Variación porcentual	Porcentaje del PIB	
			27/26	2026	2027
	(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)	(5)
FUNCIONAMIENTO	**365.897**	**392.560**	**7,3**	**18,2**	**18,5**
Gastos de personal	66.803	72.289	8,2	3,3	3,4
Adquisición de Bienes y Servicios	20.756	17.882	(13,8)	1,0	0,8
Transferencias	273.662	297.565	8,7	13,6	14,0
Gastos de Comercialización y Producción	2.206	2.302	4,3	0,1	0,1
Adquisición de Activos Financieros	760	807	6,3	0,0	0,0
Disminución de Pasivos	378	360	(4,8)	0,0	0,0
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	1.332	1.354	1,7	0,1	0,1
SERVICIO DE LA DEUDA	**100.450**	**155.432**	**54,7**	**5,0**	**7,3**
Principal	**27.616**	**58.272**	**111,0**	**1,4**	**2,7**
Acuerdos Marco de Retribución	534	990	85,2	0,0	0,0
Resto de gasto del Principal de la Deuda	27.082	57.282	111,5	1,3	2,7
Intereses	**68.765**	**94.421**	**37,3**	**3,4**	**4,4**
Comisiones y otros gastos	**1.404**	**311**	**(77,8)**	**0,1**	**0,0**
Fondo de Contingencias	**2.665**	**2.429**	**(8,9)**	**0,1**	**0,1**
INVERSIÓN	**89.472**	**86.960**	**(2,8)**	**4,4**	**4,1**
TOTAL	555.818	634.952	14,2	27,6	29,9
TOTAL SIN DEUDA	455.369	479.520	5,3	22,6	22,6

*Apropiación vigente a 30 de junio

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2027

El Proyecto presenta un aumento en el presupuesto de inversión del 9.6% con respecto al presupuesto asignado para la vigencia 2025. Pero se evidencia un aumento en el pago del servicio de la deuda pasando de 100, 4 a 115, 4 un 54.8% de la variación nominal, disminuyendo los gastos de inversión en un -1.7 %.

El gobierno anunció un recorte de $21,9 billones en el gasto público para sincerar las cuentas fiscales y propuso que en el mes de octubre presentará una Ley de rescate, que combinará estímulos, alivios tributarios y austeridad estatal.

IV. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2026 Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2027

Con el objetivo de hacer un análisis comparativo frente a la variación presupuestal que se presenta en cada una de las carteras ministeriales y en las entidades que conoce esta comisión, se presenta un análisis a partir de la elaboración de unos cuadros comparativos con las apropiaciones proyectadas para el 2027 frente a las asignadas en 2026. Esto para observar el comportamiento de aumento o disminución en cada una.

Además, se esboza el comportamiento de la ejecución en lo que va corrido hasta agosto de 2026, las modificaciones que hubo en cada entidad y un análisis general sobre los siguientes sectores contenidos en el Presupuesto General de La Nación:

Ministerio del Interior y sus entidades adscritas, Ministerio de Justicia y sus entidades adscritas, Contraloría General de la República, Defensoría Nacional del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, fiscalía general de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Notariado y Registro, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Jurisdicción Especial para la Paz

Así las cosas y de acuerdo a lo anterior, se presenta uno a uno el análisis realizado detallado a cada una de las entidades, así:

1. MINISTERIO DEL INTERIOR

Para la vigencia 2027 se reduce el presupuesto de inversión en el -34% y disminuye el presupuesto de funcionamiento en el -4%, debido a la austeridad presentada por el gobierno para la mayoría de entidades, Corte 31 de agosto 2026, comprometido $4.170 con el 39% y obligado $2.718 con el 26%

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	**TIPO DE GASTO**	**PRESUPUESTO 2026**	**AJUSTES (adición o reducción)**	**PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026**	**PROYECTO DE LEY**	**PRESUPUESTO 2026**	**AJUSTES (adición o reducción)**
Ministerio de interior	Funcionamiento	$1.114.964	-$89.891	$1.025.073	$1.075.496	-$39.468	-4%
Ministerio de interior	Inversión	$314.007	-$66.310	$247.697	$206.782	-$107.224	-34%
Total		**$1.428.970**	-$156.200	**$1.272.770**	**$1.282.278**	-$146.692	-10%

2. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Para la vigencia 2027 se realiza un incremento del presupuesto de funcionamiento del 9% y una reducción del presupuesto de inversión del -4%.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	**TIPO DE GASTO**	**PRESUPUESTO 2026**	**PROYECTO DE LEY**	**DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027**	**% DE VARIACION**
UNP	Funcionamiento	$ 2.713.303	$ 2.959.847	$ 246.544	9%
UNP	Inversión	$ 4.000	$ 3.859	-$ 141	-4%
Total		**$ 2.717.303**	**$ 2.963.706**	**$ 246.402**	**9,1%**

3. DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Para la vigencia 2027 se realiza un incremento del presupuesto de inversión del 97% y del 4% en el presupuesto de funcionamiento. Se observa que a corte del 31 de agosto del 2026, se tienen compromisos por $79.651 es decir el 63.5% y obligaciones por $64.045 es decir el 51%.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	Funcionamiento	$ 9.055	$ 9.444	$ 389	4%
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	Inversión	$ 85.606	$ 168.973	$ 83.367	97%
Total		**$ 94.661**	**$ 178.417**	**$ 83.756**	**88,5%**

4. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Para la vigencia 2027 se realiza una disminución del presupuesto de funcionamiento del -25% y del 14% del presupuesto de inversión. Sin embargo, se observa que a corte 31 de agosto 2026, comprometido 123.883 millones 54,5% y obligado 80.604 es decir 34,8%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026-2027	% DE VARIACION
Ministerio de Justicia	Funcionamiento	$166.399	$4.779.794	$4.946.193	$124.059	-$42.341	-25%
Ministerio de Justicia	Inversión	$64.975	$640.328	$705.304	$55.707	-$9.269	-14%
Total		**$231.375**	**$5.420.122**	**$5.651.497**	**$179.765**	-$51.609	-22%

5. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

El presupuesto asignado para la supernotariado tiene un incremento en inversión de 96%, al igual que aumentó en un 7% en el funcionamiento, se observa que a Corte 31 agosto 2026, comprometido $404.066 es decir el 44.7% y obligado $302.605 es decir el 33.5%.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
SNR	Funcionamiento	$ 709.752	$ 759.759	$ 50.007	7%
SNR	Inversión	$ 194.474	$ 380.602	$ 186.127	96%
Total		**$ 904.227**	**$ 1.140.361**	**$ 236.134**	**26,1%**

6. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Para la vigencia 2027 se realiza un incremento en el presupuesto de inversión del 62% y para funcionamiento del 16%. Se observa que a corte 31 de agosto 2026,se tiene comprometido $1.464.892 es decir el 66.3% y obligado 1.348.671 es decir el 61%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
INPEC	Funcionamiento	$ 2.202.168	$ -	$ 2.202.168	$ 2.556.550	$ 354.382	16%
INPEC	Inversión	$ 6.433	$ -	$ 6.433	$10.410	$ 3.977	62%
Total		**$ 2.208.601**	**$ -**	**$ 2.208.601**	**$ 2.566.960**	**$ 358.359**	16%

7. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Para la vigencia 2027 se incrementa el presupuesto de funcionamiento en el 9% y el de inversión tiene una reducción del -11%, se observa que a corte de 31 de agosto del 2026 se tienen unos compromisos por $330.563 es decir un 60% y unas obligaciones por $261.047.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
MEDICINA LEGAL	Funcionamiento	$ 411.553	$ -	$ 411.553	$ 450.616	$ 39.063	9%
MEDICINA LEGAL	Inversión	$ 136.871	$ -	$ 136.871	$ 121.284	-$ 15.586	-11%
Total		**$ 548.424**	**$ -**	**$ 548.424**	**$ 571.900**	**$ 23.477**	4%

8. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Para la vigencia 2027 se realiza un aumento del presupuesto de funcionamiento del 178% y no se presenta aumento en la inversión. Se observa que a Corte a 31 de agosto del 2026, compromiso de $160.383 es decir el 61.2% y obligado 92.630 es decir el 35.9%.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSORIA JURIDICA DEL ESTADO	Funcionamiento	$ 86.850	$ 241.540	$ 154.690	178%
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSORIA JURIDICA DEL ESTADO	Inversión	$ 22.266	$ 22.266	$ -	0%
Total		**$ 109.116**	**$ 263.806**	**$ 154.690**	142%

9. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Para la vigencia 2027 tiene una pequeña reducción en el presupuesto de funcionamiento en el -0.4%, para inversión aumenta el 20%. Se observa que a corte a 31 de agosto del 2026, comprometido $1.591.068 es decir el 77.6% y obligado $835.757 es decir el 40.78%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
USPEC	Funcionamiento	$ 1.632.154	$ -	$ 1.632.154	$ 1.626.224	-$ 5.930	- 0,4%
USPEC	Inversión	$ 417.155	$ -	$ 417.155	$ 500.000	$ 82.845	20%
Total		**$ 2.049.309**	**$ -**	**$ 2.049.309**	**$ 2.126.224**	**$ 76.915**	4%

10. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Se presenta una reducción en el presupuesto de funcionamiento del -39% y de inversión del - 52%. Se observa que a corte del 31 de agosto del 2026 se tienen compromisos por $790.820 es decir un 65.5% y obligaciones por $465.442 es decir un 38.6%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
MINISTERIO DE AGRICULTURA	Funcionamiento	$ 820.270	$ 97.284	$ 917.554	$ 499.150	-$ 321.120	-39%
MINISTERIO DE AGRICULTURA	Inversión	$ 820.270	$ 2.393.291	$ 3.213.561	$ 392.761	-$ 427.510	-52%
Total		**$ 1.640.541**	**$ 2.490.574**	**$ 4.131.115**	**$ 891.911**	**-$ 748.630**	**-45,6%**

11. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

Es preocupante que para el 2026, el presupuesto se reduzca en el -60%. El presupuesto de funcionamiento tiene un leve aumento del 1%, se observa que a corte de 31 de julio del 2026 se tienen compromisos por $920.839 y obligaciones por $413.126.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
ANT	Funcionamiento	$ 77.712	$ 78.514	$ 803	1%
ANT	Inversión	$ 1.187.088	$ 478.253	-$ 708.835	-60%
Total		**$ 1.264.800**	**$ 556.767**	**-$ 708.032**	**-56,0%**

12. AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR

El presupuesto de la Agencia de desarrollo Rural tiene una disminución en la inversión del -46% y en funcionamiento tuvo un leve incremento en 4%, se observa que a corte de 31 de mayo del 2026, se tienen compromisos por $231.606 y obligaciones por $82.974.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
ADR	Funcionamiento	$ 51.718	$ 53.606	$ 1.888	4%
ADR	Inversión	$ 495.277	$ 267.490	-$ 227.787	-46%
Total		**$ 546.995**	**$ 321.096**	-$ 225.899	-41,3%

13. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

El presupuesto del Departamento de Planeación tiene una reducción del 55 % y un aumento en 11% de funcionamiento. La diferencia entre la vigencia 2026 y 2027 es de -505.745 millones en el presupuesto de inversión. Se observa que a corte de 31 de agosto del 2026 se tiene compromisos por $487.074 es decir el 49% y obligaciones por $153.444 es decir el 15%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
DNP	Funcionamiento	$ 109.292	$ -	$ 109.292	$ 121.374	$ 12.083	11%
DNP	Inversión	$ 925.504	$ -	$ 925.504	$ 419.759	-$ 505.745	-55%
Total		**$ 1.034.795**	**$-**	**$ 1.034.795**	**$ 541.133**	-$ 493.662	-48%

14. RAMA JUDICIAL

Para la rama judicial se le asigna un presupuesto de $11.4 billones. en inversión 1.5 billones y en funcionamiento 9.9, tuvo un incremento del 4.6% con respecto a la vigencia 2026. Para las entidades que forman parte de la rama judicial no se detalla de manera individual el presupuesto para la vigencia 2027, ya que se encuentra englobado. Sin embargo, lo asignado no corresponde a las necesidades que presenta el sector justicia y de lo que habían solicitado inicialmente, se les disminuye 6.1% lo cual es preocupante. Se observa que a corte del 31 de agosto del 2026, se tienen compromisos por $6.388.661 y obligaciones por $5.839.028.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
RAMA JUDICIAL	Funcionamiento	$ 9.459.483	$ 9.912.542	$ 453.059	5%
RAMA JUDICIAL	Inversión	$ 1.449.611	$ 1.500.000	$ 50.389	3%
Total		**$ 10.909.094**	**$ 11.412.542**	**$ 503.448**	**4,6%**

15. JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

El presupuesto tuvo un incremento del 17% en funcionamiento y una reducción en inversión del -8%. La variación porcentual del 2026 a 2027 es del 10%, se observa que a corte a 31 de agosto del 2026, se tienen compromisos por $602.056 es decir el 77% y con una obligación de $484.292 es decir el 62%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
JEP	Funcionamiento	$ 555.138	$ 35.124	$ 590.262	$ 647.684	$ 92.546	17%
JEP	Inversión	$ 189.521	$ 214.956	$ 404.477	$ 174.119	-$ 15.402	-8%
Total		**$ 744.659**	**$ 250.080**	**$ 994.739**	**$ 821.803**	**$ 77.144**	10%

16. UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

La unidad de Restitución de tierras tuvo un incremento del 9% en Inversión y 6% en Funcionamiento, su variación entre 2026 y 2027 fue de 8.8%. Se observa que a corte del 31 de junio del 2026, se tienen compromisos $331.637 y obligaciones por $181.981.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
URT	Funcionamiento	$ 81.764	$ 86.676	$ 4.912	6%
URT	Inversión	$ 390.926	$ 27.796	$ 36.869	9%
Total		**$ 472.690**	**$ 514.471**	**$ 41.781**	**8,8%**

17. AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

La Agencia de renovación del territorio tuvo una disminución en el presupuesto de inversión del –16% y en funcionamiento se aumentó en el 9%, se observa que a corte del 31 de agosto del 2026 se tienen unos compromisos por $106.454 es decir un 76.3% y unas obligaciones por $53.523 es decir un 38.3%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
ART	Funcionamiento	$ 74.970	-$ 3.777	$ 71.193	$ 81.395	$ 6.425	9%
ART	Inversión	$ 118.309	-$ 50.000	$ 68.309	$ 98.939	-$ 19.370	-16%
Total		**$ 193.279**	-$ 53.777	**$ 139.502**	**$ 180.334**	-$ 12.945	-7%

18. UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO –UBPD

La UBPD, tuvo un aumento del 10% en funcionamiento y una disminución del -22% en inversión, variación fue muy mínima respecto del presupuesto de 2026 de -2.6%.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
UNIDAD DE BUSQUEDA	Funcionamiento	$ 120.019	$ 131.574	$ 11.555	10%
UNIDAD DE BUSQUEDA	Inversión	$ 76.273	$ 59.637	-$ 16.637	-22%
Total		**$ 196.292**	**$ 191.211**	-$ 5.081	-2,6%

19. SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

La superintendencia de Vigilancia y seguridad privada presenta un aumento en funcionamiento del 34% y una reducción en la inversión del -3%, se observa que a corte de 31 de agosto del 2026 se tienen compromisos por $23.656 y obligaciones por $18.814.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
SUPERVIGILANCIA	Funcionamiento	$ 32.635	$ -	$ 32.635	$ 43.649	$ 11.014	34%
SUPERVIGILANCIA	Inversión	$ 5.032	$ -	$ 5.032	$ 4.901	-$ 131	-3%
Total		**$ 37.667**	**$ -**	**$ 37.667**	**$ 48.550**	**$ 10.883**	29%

20. UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Para la vigencia 2027 se incrementa el presupuesto de funcionamiento en el 9% y aumenta el presupuesto de inversión en 10%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS	Funcionamiento	$ 1.690.731	$ -	$ 1.690.731	$ 1.846.676	$ 155.945	9%
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS	Inversión	$ 2.715.655	$ 3.500	$ 2.719.155	$ 2.982.615	$ 266.960	10%
Total		**$ 4.406.386**	**$ 3.500**	**$ 4.409.885**	**$ 4.829.291**	**$ 422.905**	**10%**

21. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo un incremento del -1% en funcionamiento y un -46% de inversión. Se observa que a corte del 31 de agosto del 2026, se tienen unos compromisos de $176.740 es decir el 56.7% y unas obligaciones de $126.493 es decir el 40%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
SIC	Funcionamiento	$ 234.207	$ -	$ 234.207	$ 232.680	-$ 1.527	-1%
SIC	Inversión	$ 234.207	-$ 156.917	$ 77.291	$ 125.318	-$ 108.889	-46%
Total		**$ 468.415**	**-$ 156.917**	**$ 311.498**	**$ 357.998**	**-$ 110.416**	**-24%**

22. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Para la vigencia 2027 se aumenta el presupuesto de funcionamiento en un 10%, su inversión decrece en un 52%. Se observa que a corte del 30 de abril del 2026 se tienen unos compromisos por $205.271 es decir un 48.9% y unas obligaciones por $70.454 es decir un $16.8%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
AGUSTIN CODAZZI	Funcionamiento	$ 126.372	$ -	**$ 126.372**	$ 138.605	$ 12.233	10%
AGUSTIN CODAZZI	Inversión	$ 293.530	$ -	**$ 293.530**	$ 139.691	-$ 153.840	-52%
Total		**$ 419.902**	**$ -**	**$ 419.902**	**$ 278.296**	**-$ 141.606**	**-34%**

23. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Para la vigencia 2027 se reduce el presupuesto de inversión en el 80% y se aumenta su funcionamiento en 21%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
PROCURADURIA	Funcionamiento	$ 1.440.892	-$ 744	$ 1.440.148	$ 1.736.457	$ 295.565	21%
PROCURADURIA	Inversión	$ 661.498	$ -	$ 661.498	$ 134.744	-$ 526.754	-80%
Total		$ 1.587.002	$ -	$ 1.587.002	$ 554.503	-$ 1.032.499	-65%

24. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Para la vigencia 2027 tiene un incremento en el presupuesto de inversión del 33%, y en el presupuesto de funcionamiento en el 10%. Se observa que a corte a 31 de agosto del 2026, se tienen compromisos de $884.233 y con obligaciones de $673.803.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
DEFENSORIA DEL PUEBLO	Funcionamiento	$ 1.107.600	-$ 1.107.600	$ -	$ 1.214.700	$ 107.101	10%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	Inversión	$ 85.610	-$ 85.610	$ -	$ 114.200	$ 28.590	33%
Total		$ 171.220	-$ 171.220	$ -	$ 228.400	$ 57.180	33%

25. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para la vigencia 2027 se reduce el presupuesto de inversión en el 37%. Y aumenta levemente en un 9% en Funcionamiento. Se observa que a corte del 31 de julio del 2026, se tienen unos compromisos de $866.141 y unas obligaciones de $776.673.

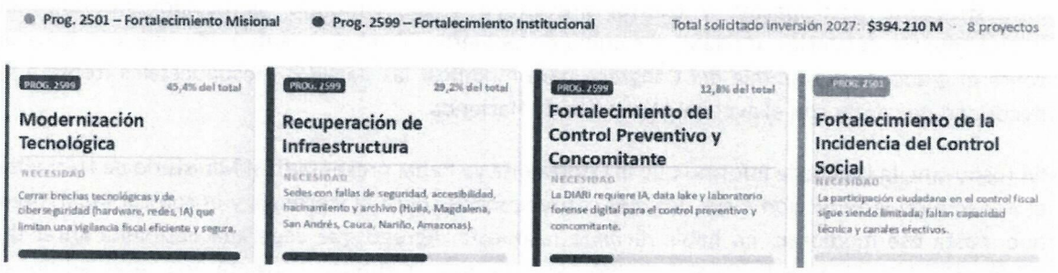
		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
CONTRALORIA	Funcionamiento	$ 1.367.874	$ -	$ 1.367.874	$ 1.486.946	$ 119.072	9%
CONTRALORIA	Inversión	$ 130.691	$ -	$ 130.691	$ 82.345	-$ 48.346	-37%
Total		$ 1.498.565	$ -	$ 1.498.565	$ 1.569.291	$ 70.726	4,7%

Presupuesto Contraloría General de la República:

Rubro	Anteproyecto	Anteproyecto PGN MHCP	Proyecto de ley PGN (Original)	Proyecto de ley PGN (Enmienda)
Funcionamiento	$ 1.466.366.273.772	$ 1.466.366.273.772	$ 1.477.869.226.000	$ 1.486.946.459.000
Deuda	$ 44.409.739.387	$ 44.409.739.387	$ 0	$ 0
Inversión	$ 394.210.116.997	$ 394.210.116.997	$ 140.000.000.000	$ 82.344.500.000
Total	$ 1.904.986.130.156	$ 1.904.986.130.156	$ 1.617.869.226.000	$ 1.569.290.959.000

*** Nota:** De no aprobarse recursos adicionales que permitan reducir la brecha presupuestal identificada, la Entidad se vería obligada a priorizar, aplazar o reducir el alcance de actividades e inversiones estratégicas programadas para la vigencia 2027.

Necesidades de Inversión por Proyecto - 2027:



La delegada de la Contraloría General de la República, la Dra. Jenny Lindo quien ocupa el cargo de Delegada para Economía y Finanzas del Estado presentó las principales consideraciones de la entidad frente al proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027. Indicó que intervenía por delegación del Contralor General y señaló que la preocupación central de la entidad se concentra en la reducción del presupuesto de inversión, por considerar que puede afectar la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal durante 2027.

Explicó que la Contraloría había solicitado aproximadamente $394 mil millones para inversión, cifra que, según manifestó, correspondía al mismo nivel de la vigencia anterior. En el primer proyecto de presupuesto presentado en agosto, este rubro habría sido reducido a aproximadamente $140 mil millones y, en la nueva propuesta, a cerca de $82 mil millones. La entidad aclaró que su solicitud no pretende aumentar los recursos destinados a funcionamiento o deuda, sino preservar los recursos necesarios para inversión.

La Delegada señaló que la reducción afectaría ocho proyectos de inversión, de los cuales destacó cuatro como prioritarios. El primero corresponde a la modernización tecnológica, orientada a digitalizar los procesos de auditoría y mejorar el seguimiento de los recursos públicos a lo largo de la cadena presupuestal. El segundo se relaciona con la recuperación y mantenimiento de la infraestructura física de la entidad. El tercero corresponde al fortalecimiento del control preventivo y concomitante, particularmente mediante la DIARI, que permite realizar monitoreo de asuntos estratégicos, analizar información contractual, identificar patrones societarios y apoyar las labores de vigilancia. El cuarto busca fortalecer el control social y la presencia territorial, mediante una mayor articulación con la ciudadanía y el fortalecimiento de las gerencias territoriales en los departamentos.

Asimismo, la representante de la Contraloría manifestó que, mientras el Presupuesto General de la Nación ha presentado incrementos, el presupuesto de la entidad muestra una tendencia decreciente y señaló que, con la propuesta presentada, la Contraloría enfrentaría una reducción presupuestal que estimó en 36%. Con fundamento en estas consideraciones, solicitó a los integrantes de la Comisión tener en cuenta la situación durante el trámite presupuestal.

Una vez finalizada la intervención por parte de la Delegada de la Contraloría intervienen el Senador Héctor Olimpo Espinosa y la Senadora María Clara Posada. Primero, el Senador Héctor Olimpo Espinosa manifestó preocupación por la magnitud de la reducción del presupuesto de inversión y preguntó si había existido diálogo previo entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda para explicar o concertar el ajuste. Señaló que la entidad requiere capacidades suficientes en materia tecnológica, infraestructura, participación y control preventivo y concomitante, particularmente ante el incremento de denuncias asociado al cambio de Gobierno. También planteó una reflexión general sobre el grado de autonomía del Congreso para modificar las partidas presupuestales frente a la necesidad de contar con el aval del Ministerio de Hacienda.

En respuesta, la Delegada informó que la Contraloría ya había presentado al Ministerio de Hacienda el impacto de la reducción y sus posibles consecuencias sobre la vigilancia y el control fiscal, pero que, hasta ese momento, no había recibido respuesta. Agregó que esperaba obtenerla antes de culminar el trámite presupuestal. Informó, además, que la entidad enfrenta una carga adicional porque el grupo encargado de investigar recursos de regalías quedó desfinanciado y la planta ordinaria está asumiendo más de 400 procesos relacionados con regalías.

Posteriormente, la Senadora María Clara Posada señaló que, mientras el presupuesto de funcionamiento pasaría de aproximadamente $1,3 billones a $1,4 billones, los recursos de inversión se reducirían a cerca de $80 mil millones. Preguntó de qué manera una mayor inversión tecnológica podría contribuir a disminuir costos de funcionamiento y solicitó información sobre los recursos recuperados por la Contraloría durante los últimos cuatro años, así como sobre el número y estado de las investigaciones fiscales en curso.

La Delegada explicó que el anteproyecto contempla aproximadamente $1,4 billones para funcionamiento en 2027 y sostuvo que la entidad no está solicitando una adición sobre ese componente. Frente a la inversión tecnológica, explicó que actualmente buena parte de las auditorías se desarrollan presencialmente y que la primera fase de un proceso auditor puede tomar entre cuatro y seis meses. Según la entidad, la transformación digital permitiría reducir significativamente estos tiempos, fortalecer el seguimiento de la cadena presupuestal y avanzar hacia un control fiscal más preventivo, rápido y oportuno.

Finalmente, la Contraloría reiteró que reconoce las restricciones económicas y fiscales del país y su deber de utilizar eficientemente los recursos públicos, pero considera que la reducción propuesta para inversión es particularmente significativa y puede comprometer proyectos estratégicos para el ejercicio del control fiscal. En consecuencia, solicitó a los miembros de la Comisión considerar esta situación durante la definición del presupuesto definitivo para 2027.

26. AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para la vigencia 2027 se incrementa el presupuesto de funcionamiento en el 37% y se reduce el presupuesto de inversión en el 13%.

ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACIÓN
AUDITORÍA GENERAL	Funcionamiento	$ 51.920	$ 70.887	$ 18.967	37%
AUDITORÍA GENERAL	Inversión	$ 11.188	$ 9.750	-$ 1.438	-13%
Total		**$ 63.108**	**$ 80.637**	**$ 17.529**	**27,8%**

27. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Para la vigencia 2027 se incrementa el presupuesto de inversión en el 5%, y el de funcionamiento en un 4% se observa que A corte de 31 de agosto del 2026, se tienen compromisos por $4.304.694 y obligaciones por $3.877.737.

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
FISCALIA	Funcionamiento	$ 6.358.289	$ 6.618.841	$ 260.552	4%
FISCALIA	Inversión	$ 254.108	$ 267.728	$ 13.620	5%
Total		**$ 6.612.397**	**$ 6.886.569**	**$ 274.172**	**4,1%**

28. FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

		VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA	Funcionamiento	$ 23.304	$ 24.127	$ 823	4%
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA	Inversión	$ 16.072	$ 76.248	$ 60.176	374%
Total		**$ 39.376**	**$ 100.375**	**$ 60.999**	**154,9%**

29. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Para la vigencia 2027 se incrementa el presupuesto de funcionamiento aumenta en el 3% y se reduce la inversión en 14%. Se observa que a corte a 31 de agosto del 2026, se tienen unos compromisos de $3.864.883 es decir el 69.2% y unas obligaciones de $2.618.016 es decir el 46.8%.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
REGISTRADURIA	Funcionamiento	$ 5.370.848	$ -	$ 5.370.848	$ 5.542.267	$ 171.420	3%
REGISTRADURIA	Inversión	$ 215.312	$ -	$ 215.312	$ 185.000	-$ 30.312	-14%
Total		**$ 5.586.160**	**$ -**	**$ 5.586.160**	**$ 5.727.267**	**$ 141.108**	3%

30. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

El Consejo Nacional Electoral presenta una reducción del 87% en la inversión, e incrementa el presupuesto de funcionamiento en un 79%.

ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACIÓN
CNE	Funcionamiento	$ 1.231.356	$ 2.201.295	$ 969.939	79%
CNE	Inversión	$ 8.000	$ 1.052	-$ 6.948	-87%
Total		**$ 63.108**	**$ 80.637**	**$ 17.529**	**27,8%**

31. SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

El presupuesto de inversión tiene una reducción en 3% y un aumento en el funcionamiento de 34%, se observa que a corte de 31 de agosto del 2026 se tienen compromisos por $23.656 y obligaciones por $18.814.

		VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2027		
ENTIDAD	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2026	AJUSTES (adición o reducción)	PRESUPUESTO FINAL A 31 DE AGOSTO 2026	PROYECTO DE LEY	DIFERENCIA VIGENCIA 2026 - 2027	% DE VARIACION
SUPERVIGILANCIA	Funcionamiento	$ 32.635	$ -	$ 32.635	$ 43.649	$ 11.014	34%
SUPERVIGILANCIA	Inversión	$ 5.032	$ -	$ 5.032	$ 4.901	-$ 131	-3%
Total		**$ 37.667**	**$ -**	**$ 37.667**	**$ 48.550**	**$ 10.883**	29%

V. CITACIÓN E INVITACIÓN A LOS MINISTROS Y ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO QUE ESTÁN A CARGO DE LAS ENTIDADES QUE CONOCE LA COMISIÓN PRIMERA

En sesión ordinaria presencial de la Comisión Primera Constitucional, se citó a funcionarios y ministros para que presentaran sus observaciones y propuestas sobre el Proyecto de Ley de

Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 en el marco de la proposición No 03 de la legislatura 2026-2027.

En el marco de esta citación que quedó consignada en el orden del día del 15 y 16 de septiembre de 2026 convocada a las 9:00 de la mañana, se esbozaron las inquietudes de los congresistas frente a ejecución presupuestal y sobre las asignaciones proyectadas.

De igual forma los funcionarios que representan a las instituciones dejaron ver sus necesidades y observaciones ante los miembros de la comisión para que las mismas haga conocer a las comisiones terceras y cuartas y eventualmente estas sean tenidas en cuenta en el Proyecto de Presupuesto que entrará en vigencia el próximo año.

El presidente de la Comisión Primera, H.S Enrique Gómez, una vez realizado el llamado a lista y verificado el quórum, inicia la comisión dando la palabra a los funcionarios en orden de llegada, y luego señala que dará la palabra a los Senadores que quieran intervenir.

1. **Doctor Alejandro Ramelli Arteaga, Presidente Jurisdicción Especial para la Paz**

Se dirigió a la comisión y señaló que aprovecha la oportunidad para tratar dos temas en concreto. El primero sobre los resultados de la jurisdicción, los 8 años y medio de la JEP y el segundo relacionado con el presupuesto. En cuanto al tema de los resultados, señala que el mandato es esclarecer los peores crímenes cometidos en la guerra de Colombia cometidos durante 60 años, para ello se habla de 220 mil delitos, para ello habla de un corte de cuentas de delitos tangibles e intangibles, de lo que se puede contar y lo que no se puede contabilizar. Señala que actualmente tienen 15.634 comparecientes lo que significa 3 veces más de lo de justicia y paz. Tienen acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que suman más de 300 mil personas. Han practicado 2.607 versiones voluntarias. Hace la aclaración que siempre les cuentan los macro casos que son importantes, que por ahora tienen 4 y a final de año tendrían 7. De las verdades intangibles señala que las clasifica en verdades para la sociedad, para la historia colombiana y las verdades de los casos individuales. Las verdades de la sociedad colombiana contrastadas en un proceso con documentos, con pruebas, con debido proceso, allí tienen las investigaciones de macro investigaciones de los 11 macro casos que les han arrojado patrones sobre la violencia sexual, sobre la masividad del reclutamiento de menores, sobre quienes están imputados sobre el genocidio de la Unión Patriótica, el tema de los desaparecidos de la escombrera. En el tema de violencia sexual han participado más de 11 mil víctimas entre otros señalamientos que hizo en la comisión.

Con relación al presupuesto señaló que no se puede comparar la JEP con las altas Cortes porque ellos únicamente fallan y la JEP cumple con 6 funciones, por lo cual se tiene que ver el presupuesto de 6 entidades, defensoría pública, la SAT tanto para comparecientes, como para fuerza pública, Protección, que aunque ellos no lo hacen directamente sino la Unidad de protección, pero se utiliza el presupuesto que se asigna a la JEP, investigan y acusan como lo hace la fiscalía, juzgan y sancionan como lo hace la justicia ordinaria, brindan atención psicosocial a víctimas y comparecientes y supervisan el cumplimiento de las sanciones y tienen 15 equipos territoriales.

Señala finalmente que comparando el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, con el que ellos presentaron se evidencia un déficit de 125 mil millones , el cual afecta principalmente a representación de víctimas, comparecientes, temas de seguridad y señala que están en una etapa crítica que es el cierre de las investigaciones, que ellos no piden que les amplíen el periodo, que ellos

están cumpliendo estrictamente con el cronograma y lo que está en la Constitución y la Ley , pide que se mire el tema de la reducción y los impactos que pueden tener.

El presidente de la JEP señaló que para el año 2026 se aprobó un presupuesto de $744.658 millones y a la fecha llevan un 63% ejecutado. En el año 2025 cerraron con una ejecución del 88% y presentaron para el año 2027 un presupuesto de $947.648 millones. El gobierno presentó en el proyecto de presupuesto para la JEP $821.803 millones, lo que significa que habría un faltante de $125.839 millones, un 13% menos. Dentro del presupuesto hicieron una propuesta de comprar una sede para la JEP, para evitar el arriendo y que a futuro el bien inmueble quedará al Estado. Sin embargo, no tendrían problema de bajar esos $41.176 millones, dadas las restricciones presupuestales. Sin embargo, les queda un déficit real de 84 mil millones, les preocupa que $35.662 millones están destinados a víctimas, comparecientes, audiencias, actuaciones judiciales. $27.502 millones para protección de víctimas y $20.478 millones para licencias de funcionamiento tecnológico. Estos rubros los consideran fundamentales debido a que se está cerrando las investigaciones y se afectaría la labor de la investigación y acusación.

2. Doctora Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta Consejo Superior de la Judicatura.

Inicia dando agradecimiento a todos los integrantes de la Comisión por la invitación que se hiciera a la misma. Comienza diciendo que estuvieron el miércoles anterior en la Comisión primera de la Cámara sustentando la solicitud del presupuesto para la siguiente vigencia fiscal. Inicia que se va a concretar a las cifras tal como lo han solicitado. El total de presupuesto solicitado para el año 2027 es de $17.5 billones de pesos y les fue asignado $11.4 billones con una diferencia de $6.1 billones de pesos. Se refiere a la cifra más importante, la que sostiene a la rama judicial que es los gastos de funcionamiento.

Dentro de esos tres grandes componentes que son funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. El gran rubro de funcionamiento solicitado es de $14.6 billones de pesos y les asignaron $9.9 billones de pesos y señala que casi el 10% corresponde al pago de nómina de planta de personal de jueces, magistrados, empleados de la rama judicial. Es una diferencia abultada de $4.7 billones de pesos. Da un ejemplo a manera de ilustración. Desde el año 2022, pese a que la demanda de justicia se disparó en un 23%, la asignación de recursos se ha desacelerado generando para cada vigencia una diferencia mayor entre el presupuesto que necesitan y el que se asigna. Pasan de un 20% en el año 2022 a un 32% para el año 2026, lo que equivale a una deuda histórica de 12.34 billones en los últimos 4 años. El crecimiento más acelerado se presenta en las acciones de tutela que aumentó de un 30% en el año 2022 a un 42% en el año 2026 sobre toda la demanda de justicia. En el año 2025 recibieron 1.218.887 tutelas, un crecimiento del 162%, a agosto de 2026 se reciben 5.771 tutelas diarias, generando una congestión estructural en la rama judicial impactando negativamente en el tiempo de resolución de los procesos.

Una demanda en el año 2022 se resolvía 24.9 meses, mientras que en el año 2026 el tiempo promedio de respuesta es de 28.2 meses. La falta de respuesta oportuna en la demanda de justicia de los ciudadanos, genera morosidad, morosidad que se convierte en impunidad y esta se convierte en justicia tardía, que en últimas es injusticia. Teniendo en cuenta la expedición de Ley 2430 de 2024 que modificó la Ley 270 de 1996, se le asignó a la rama judicial un porcentaje del 3% del presupuesto General de la Nación, norma que fue revisada por la corte constitucional en sentencia C -134 de 2023

y que dispuso que ese aumento debería ser gradual e incremental, no obstante, han pasado 3 años sin darse cumplimiento a ese mandato. El proyecto 2027 contempla un presupuesto de $11.4 billones, que si bien implica un incremento nominal del 4.6% en comparación al presupuesto de 2026, es inferior al aumento inclusive del IPC fijado para este año que es del 5.1%. En consecuencia, el presupuesto se reduciría en un 0.5% pese a que la Ley 2430 de 2024, estableció que el presupuesto apropiado para cada vigencia fiscal no podría ser inferior en términos reales al del año anterior.

Reiteró que el presupuesto para la vigencia 2027, se ha soportado y sustentado la asignación total de un presupuesto de 17.5 billones de pesos, Señala que ella va a explicar el por qué han solicitado los $14.4 billones de pesos para gastos de funcionamiento y les han asignado 9.9 billones de pesos, lo que significa una diferencia de $4.7 billones, los cuales se desagregan en 5 grandes componentes y menciona solo hará alusión a 3 correspondientes a los que presentan diferencias muy notables frente a lo solicitado. En los gastos de personal han solicitado 11. 4 y les han asignado 9.2 billones con una diferencia de 2.2 billones que corresponde al 79% del presupuesto asignado a la rama judicial y esta cuenta es desagregada en costos de la planta actual para cerca de 40.362 servidores judiciales de los cuales permanentes son 38.730 por un valor de 8.2 billones de pesos y 1.632 servidores en descongestión que coadyuvan a apalancar la demanda de justicia.

Solicita que se mantenga el presupuesto solicitado para poder mantener la planta de personal de los servidores judiciales. Así mismo invoca el artículo 113 de la Constitución, que habla de la colaboración armónica entre las ramas del poder público con la independencia y autonomía de cada una y para ello señala que se debe hacer una articulación interinstitucional de las 3 ramas del poder público para revisar los problemas de las políticas públicas, para evitar que se presenten respuestas tardías de los compromisos del Estado, sobre todo en temas de seguridad social, salud y pensiones donde se concentra el mayor número de tutelas y demandas, unido a los derechos de petición que se presentan a las diferentes instituciones del Estado porque no son respondidos oportunamente y que generan una demanda creciente de justicia.

Señala que, si se hacen unas mesas de trabajo interinstitucionales articuladas con las 3 ramas del poder público, se pueden mirar los problemas de raíz de las políticas públicas del Estado y cómo se pueden hacer mejor y materializar los derechos de los ciudadanos para evitar la congestión judicial. Asimismo, solicita los recursos para pagar la bonificación judicial que es un mandato legal y que demanda $865 mil millones para su cumplimiento, una deuda histórica para los servidores de la rama judicial. También tiene una necesidad grande de pagar las sentencias judiciales que piden un valor enorme de recursos judiciales para su pago. Son esas tres componentes que solicitan al Senado de la República y a la Comisión primera constitucional permanente les pueda coadyuvar en corresponder a esa necesidad imperiosa de financiación para las necesidades más recurrentes para el funcionamiento adecuado de la Rama Judicial.

Contesta la presidente algunas inquietudes de los Honorables Senadores:

El Senador Alfredo Deluque hace una pregunta con relación al proceso de transformación digital de la rama judicial, y saber cuánto se podría ahorrar en términos económicos y de tiempo para ahorrarle al Estado, señala igualmente que tiene entendido que el BID, hizo un préstamo para ese tema.

La Presidenta del Consejo responde que el BID hizo un préstamo de 95 millones de dólares para el componente de tecnología y transformación digital de la rama judicial y el crédito se cerró hace dos

meses con una ejecución del 98%, que es lo que se llama el sistema de gestión de expedientes, de gestión de procesos.

La Senadora Isabel Zuleta pregunta que si el cálculo que está presentando la presidenta del CSJ, tiene el análisis de la pérdida de la capacidad que puede ser mayor por los efectos de la inflación, por cuanto el cálculo que se ha presentado es en cifras cerradas en comparación con el IPC, puede presentarse una distorsión la cual es muy preocupante.

El Senador Fabio Amín interviene para señalar que acompaña la presentación de la presidenta de la CSJ, diciendo que la situación es gravísima, y no puede aceptar que se incremente su presupuesto en términos nominales en el 4.1 % cuando solo por concepto de inflación en el IPC para el valor adquisitivo de los salarios de los más de 40 mil servidores judiciales se requiere hacer un incremento que si se utiliza el IPC corrido del mes de agosto de 2026 ya debe ser del 6.24% y si se quiere que el incremento tenga no una condición nominal, sino real tiene que estar por encima de lo que cambia IPC, en ese sentido, hoy la rama no tendría con que pagar los incrementos de la nómina de los servidores judiciales de la vigencia 2026 - 2027. Así mismo argumenta que hoy con lo que tiene asignada la rama solamente le alcanza para pagar la nómina y no se sabe si con el incremento a la anualidad del 2027, no habrá recursos para pagar arriendos, servicios públicos, papelería, sin pensar en descongestión judicial con lo que anotaba el Senador Deluque en términos de la modernización que tanto se le ha apostado.

La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura responde a las preguntas hechas por los Senadores.

A la Senadora Zuleta le responde diciendo que efectivamente no se tuvo en cuenta la pérdida por inflación que pasaría del 11.6 al 12.4%. Y al Senador Amín que el porcentaje del IPC del 5.1 que él ha evidenciado, que ha subido hoy es superior. Y que el presupuesto que se les ha asignado no alcanzaría sino escasamente para el pago de la nómina sin tener en cuenta de pronto, los cargos en descongestión que se requieren para la creciente demanda de justicia y para los gastos de bienes, servicios, mantenimiento que son recurrentes para el funcionamiento de las estructuras físicas, arrendamientos donde funcionan las sedes judiciales. Esto agravado con la tragedia del terremoto donde se tiene cerca de 120 sedes judiciales averiadas de las cuales muchas amenazan ruina y se requiere un esfuerzo grande y se han hecho unos traslados presupuestales de infraestructura para atender las necesidades más urgentes de los cerca de 1.500 servidores afectados por esta tragedia. Son conscientes del déficit fiscal del Estado Colombiano y agravado con la tragedia del 10 de agosto y con los incendios del departamento del Tolima y saben que también hay que ajustarse, pero en lo básico en lo de funcionamiento se hace necesario la solicitud que hacen del incremento correspondiente.

El Senador Rafael Nieto le pregunta cuáles serían los costos de no pagar las sentencias, y comparte la preocupación que tiene el Senador Amín sobre el presupuesto. Es verdaderamente inaceptable que este termine por debajo del aumento de la inflación, lo que se está haciendo es decreciendo el presupuesto incluso con relación a la inflación y hay que buscar la solución a eso y trabajar en esa dirección a la hora de aprobar el presupuesto.

El Senador Nieto señala que queda la propuesta de hacer mesas de trabajo para tratar 3 temas:

1. La identificación clara de las causas del comportamiento estatal que están generando las conductas que la presidenta describió y buscar los mecanismos de solución.
2. Hacer un ejercicio de revisión procedimental para que tengamos procedimientos más cortos, más rápidos, más efectivos y menos costosos.
3. La posibilidad de tener indicadores de productividad en la rama.

3. Doctora Maria Naime Varon, Auditora General de la República

La Auditora da un saludo a los presentes de la comisión y da los agradecimientos de haber sido invitada para hacer las consideraciones al presupuesto del año 2027. Señala que es la encargada de hacerle la vigilancia y la gestión fiscal a las 68 contralorías territoriales y de la Contraloría General de la República y de sus 15 fondos de bienestar.

El presupuesto de la auditoría representa el 0.013% del presupuesto General de la Nación, los proyectos están encaminados a cumplir el plan institucional 2024 2027. Manifiesta que la entidad ha sido altamente eficiente en su ejecución presupuestal. En el año 2024 ejecutó el 99.5 %, en el año 2025 el 81.8%, porque el 12 % del presupuesto de inversión lo congeló el gobierno pasado en octubre y en lo corrido del año vamos en la ejecución del 68.6%. Señala que quiere referirse a la disminución del presupuesto para la esta vigencia.

La auditoría requiere para sus recursos de inversión $22.281 millones y este presupuesto en el proyecto inicial pasó a $13 mil millones y ahora en el monto que ha sido aprobado esta apenas en $9.750 millones, es decir una disminución del 20.1% en el total general del presupuesto y en el 57.3% de los recursos de inversión y en el 9.2% de los gastos de funcionamiento, lo que les genera preocupación y restricciones en la operación del pago de la nómina, en el mantenimiento de infraestructura, cumplimiento del plan estratégico institucional, en la eficiencia de los recursos afectando la función constitucional de la certificación y evaluación de las contralorías territoriales, así incumplimiento como el plan auditor, la conectividad que tiene planteada la auditoría, así como los proyectos de ciberseguridad y protección de datos.

4. Doctora Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación.

Saluda a la mesa directiva y a los senadores de la Comisión y agradeció la invitación que se les ha cursado para hablar de los problemas que enfrentan con el proyecto de presupuesto y que esperan pueda ser ajustado por el Congreso de la República. Manifiesta que ellos tuvieron un presupuesto aprobado el año pasado de $6.6 billones de pesos. Señala que quiere empezar haciendo una claridad importante, que a la fiscalía se le entiende como una entidad que hace parte de los órganos de control y la fiscalía hace parte de la rama judicial con un presupuesto independiente, autónomo, hace parte de las necesidades que se cubren con las partidas asignadas a la rama judicial. El de la fiscalía que hace parte de la jurisdicción ordinaria, tiene un presupuesto destinado a los titulares de la acción penal del Estado.

En el año 2025 la fiscalía atendió 262.164 actos urgentes, y de lo corrido del año 2026 han atendido 194.860 actos urgentes. ¿Qué son los actos urgentes? Son los casos que llegan vía flagrancias a las unidades de reacción inmediata o que llegan a través de sistemas especiales de atención al ciudadano donde activan una acción judicial e investigativa. ¿Qué casos son esos por ejemplo?, los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia sexual, los casos de homicidio. En una muy poca

capacidad de reacción, los casos de hurtos, porque infortunadamente tienen una infraestructura muy precaria en esta puesta de actos urgentes. Para 2025 recibieron 879.829 denuncias y en lo que va corrido del año 2026 han recibido 595.868 denuncias, y por querellas tuvieron 520.507 para el año 2025 y 339.082 en lo que va del 2026.

El presupuesto tiene una partida aprobada en el año 2025 de $6.7 billones de pesos y para el año 2026 hicieron una proyección de $8.7 billones. Aclara que ellos venían con un presupuesto deficitario desde el año 2025, presupuesto diferente al que habían solicitado. Tienen una presencia territorial que no alcanza a 500 municipios cuando deberían estar al menos y de acuerdo con los cálculos en 780 municipios y esa es la aspiración. Ellos han optado por un modelo de centros de atención de fiscalía y por hacer una articulación con otras entidades estatales como medicina legal, bienestar familiar, y las comisarías de familia y eso les permite de alguna manera hacer también una contención respecto a las competencias.

Lo anterior explica porque los cálculos de ese crecimiento oscilan entre el 6.6% que tenían y el 8.7% del que en realidad se pidió. En el presupuesto se recorta la solicitud en todos los componentes principales, y el que más les preocupa es el del funcionamiento. Habían pedido para gastos de funcionamiento $7.7 billones de pesos y quedaron $6.6, es un recorte de $1.2 billones, de esos $6.2 billones se van en gastos de personal tienen 24.754 servidores. Significa que la fiscalía tiene que funcionar el año entrante con 415 millones de pesos para servicios públicos, combustible, gastos reservados y en este último se mantiene el programa de protección de víctimas, testigos e intervinientes del proceso penal, que es el tercer programa más antiguo del mundo y es el primero de la región que tiene alrededor de 370 personas protegidas que implica una población de unas 1.200 personas incluidos sus núcleos familiares.

También tienen gastos en viáticos, arrendamientos y seguros. Ellos entienden que hay gastos que no debieran ser tan altos, por ejemplo, los viáticos, esto se debe porque es una fiscalía centralizada, han hecho un esfuerzo por descentralizar para que esté en todo el país. Desafortunadamente esto es un proceso retrasado porque el personal es insuficiente. La estructura del crimen organizado, solo se encuentra en Bogotá, porque está totalmente centralizada. Han creado 6 regiones en todo el país que cubren todo el territorio y están en el proceso de enviar fiscales a ciudades capitales. Los gastos de funcionamiento diferentes a nómina son de $976 millones, eso lo que requieren para pasar el año 2027. La plata que se les está asignando alcanzaría para la mitad del año entrante y esa es una gran preocupación. Gastos como los que tiene que ver con los servicios de seguridad y los servicios de aseo se ven impactados por el aumento del salario mínimo y que hacen que estos contratos hayan subido de una manera importante y son gastos que no son posible eliminar.

Han hecho esfuerzos por tener sedes propias, pero siguen con sedes en arrendamiento, pero estos son gastos inflexibles. Para el pago de sentencias que tenían presupuestado $547 mil millones no se les asigna ninguna partida, Entienden los problemas de déficit presupuestal. Quiere poner a consideración dos temas. El primero, toda la mora que tengan en el pago de sentencias le cuesta mucho al Estado, se termina pagando 3,4 o 5 veces el valor de una creencia por sentencias. Estas decisiones que se han tomado de excluir como factor salarial la bonificación de servicios que el Congreso aprobó como incluirla como factor salarial y los va a detener el pago de estas sentencias y hace la advertencia que este no quedó con techo. En gastos de inversión lo pedido fueron $396 mil millones y les dieron $267 mil. Señala que la fiscalía entiende la situación presupuestal del país y que

no están pidiendo que se cubra la petición que ellos habían hecho. ¿Por qué razón?, porque tienen de una parte unos recursos propios que administran a través de un fondo del FEAP, que es el fondo de administración de los bienes objeto de comiso, que bien administrado como se ha hecho, ha dado unos recursos propios importantes que se destinan a inversión y con eso pueden compensar. Tienen un buen componente de cooperación técnica internacional que les ayuda a compensar el déficit en gastos de inversión.

La fiscalía está absolutamente urgida, que revisen la partida que se les asignó en gastos de funcionamiento que como dice solo va a alcanzar para cubrir la nómina y gastos aproximadamente hasta julio del año entrante y revisar la partida para sentencias judiciales que tal vez vale la pena hacer el esfuerzo fiscal de pagar esas sentencias para evitar seguir pagando 2,3 o 4 veces lo que va a tener que pagar el Estado.

El Senador Amín pide la palabra para hacer una pregunta a la señora Fiscal. Agradece que en 8 años sea la primera en visitar la comisión primera Constitucional del Estado. Pregunta cuántos recursos se han recaudado por concepto de la comercialización y administración de bienes por concepto de extensión de dominio, el cumplimiento de la Ley 1708, que le corresponde el 25 %, como le corresponde al gobierno. de esos recursos y cómo se aplicó esta norma en las decisiones que tomó el gobierno anterior, cuando entregó tierras que estaban o que están en proceso de extensión de dominio. Les devolvió a los demás beneficiarios de la norma el porcentaje del avalúo, se utilizó la plata de la Agencia Nacional para hacer un giro y compensar entonces el cumplimiento de la misma a la Fiscalía o a la Policía o al sistema penitenciario que me queda esa duda que aunque no hace parte del debate.

La Senadora Posada le pide a la señora Fiscal que se repita el valor de las sentencias

La Fiscal responde al Senador Amín diciendo que ella quiere recordar que los recursos y la monetización corresponde a la SAE , que es administrada y no tiene el dato exacto de cuanto monetizo y quiere recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo pasado se cambió la distribución de cómo se participa en los recursos obtenidos a través de los bienes objeto de extensión de dominio, donde tienen muchas dificultades y que seguramente los van a molestar porque se va a presentar un proyecto de Ley que tiene que ver con el trámite de la extensión de dominio que enfrenta procesos de 15 y 20 años que no tienen ningún sentido. La modificación que se hizo fue en un principio, el FRISCO, que es el fondo donde llegan los recursos, que son objeto de extensión tiene una distribución que tiene el 25% para la Rama Judicial, 25% para la fiscalía, otro tanto para la policía, la Defensoría del pueblo, pero en la Ley del Plan del gobierno pasado se estableció que previo lo que cuesta la operación de la SAE, y se incluyeron unas partidas que se irían a cubrir partidas de carácter social, para vivienda, programas contra la drogadicción, para temas sociales. En SAE se monetizó en 2025 1.1 billones. Ellos recibieron de esos recursos 23 mil millones. Ella cree que es bueno que se invierta en temas sociales, pero que la forma en que se hizo el cálculo es totalmente desproporcionada porque lo que les quedó a los que soportan la operación, a quienes soportan la operación de la extinción lo que queda después de hacer el gasto social que es muy importante y la operación de la SAE, entonces el 25 es probablemente el 25 del 5 o el 4% de lo que recupera este fondo. Tienen destinados 250 fiscales para la extinción de dominio. En cuanto lo que tiene que ver con el FEAP que, aunque no lo está preguntando estuvieron en 100 mil millones en lo que pudieron recuperar en los bienes objeto de decomiso y por eso dice que ellos están dispuestos a hacer esa compensación con

esos gastos de inversión porque entendemos que una buena gestión de administración de los recursos es incautada vía decomiso que son lo que ellos administran puede hacer la diferencia en materia de su inversión.

La Senadora Isabel Zuleta pregunta a la fiscal que se está en la misma situación de la Rama Judicial es decir la grave reducción en funcionamiento, no se tiene el aumento en inversión, por la afectación que se está teniendo en el presupuesto para la Fiscalía en funcionamiento. Entiende que el efecto que la Fiscalía está entregando es mucho más grave precisamente por las aspiraciones de llegar a muchos más municipios por las aspiraciones de esa demanda de justicia. Quisiera que le dijera cómo se afectaría la aspiración específicamente en cuanto se está hoy y a qué municipios no se pudiera llegar con el presupuesto si se dejará tal cual como lo presenta el gobierno.

Responde la Fiscal, que ellos tienen la aspiración de crecer en los próximos 2 años a 47 municipios, de esos proyectan llegar a 24 más el año entrante y ella dice que ellos no llegan a cualquier municipio. Ellos han llegado a la Macarena, San Martín de loba, Pizarro, Jurado en Chocó. Buscan municipios que tienen un componente de ausencia de justicia histórica donde definitivamente es absolutamente fundamental llegar.

Este proyecto tiene recursos prometidos no asignados de cooperación técnica internacional. Tienen una oferta para poder realizar el proyecto, pero lo grave es que con cooperación técnica internacional pueden hacer sedes alianzas con gobernaciones y alcaldías, pero lo que no se puede con cooperación técnica es pagar salarios. Y por eso solicita volver e insiste en la necesidad de revisar las cifras de funcionamiento, esos son gastos que tiene que asumir el Estado. Se ha hecho un ejercicio muy serio en el último año en la fiscalía para que las solicitudes de crecimiento en la planta de personal estén directamente asociadas a las necesidades que tienen que cubrir. Muchas veces el déficit no es de fiscales que son los empleados más costosos, el déficit es en analistas criminales y financieros, el déficit es investigadores, el déficit es en personal administrativo que soporta la operación, un déficit histórico en peritos en especialistas. El CTI de la fiscalía se pensó en la Constitución del 91 era que fuera policía judicial profesional, la que nos aporta arquitectos, contadores, ingenieros, físico antropólogos y el CTI en eso ha venido perdiendo importancia y ellos creen necesario darle ese relieve.

La Senadora María Clara Posada le pregunta a la fiscal de que repita el valor de las sentencias que no está cubierto en el presupuesto. La Fiscal responde que el valor que dio anteriormente de 547 mil millones, es un valor que se calcula con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre la litigiosidad del Estado en la que ellos piensan que la fiscalía va a perder. Señala que la parte de las sentencias está incluida en el valor que proyectaron en funcionamiento que son 540 mil de demandas ya perdidas, y 250 mil en el fondo de contingencia que la Defensa jurídica del Estado les pide que hagan.

Interviene el Senador Santiago Barreto donde solicita se hagan unas mesas de trabajo para hacer una evaluación detallada de los problemas de la Rama, le preocupa que el presupuesto quede desfinanciado en los temas de funcionamiento y los gastos de personal, porque de esa manera es que se hace la función misional de las entidades del sector, que es prestar la justicia, pero una de las funciones principales del Estado es ejercer la justicia. No es posible que esté financiado solo por 6 meses el funcionamiento de la entidad del sector justicia que se debe financiar por el año.

La Fiscal responde que ella se une a la solicitud de la doctora Mary Lucero, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Ella señala que quiere insistir en son conscientes de que se está en un periodo de apretarse el cinturón y ellos están dispuestos a hacerlo, pero también quiere que se entienda que buena parte de las expectativas nacionales tiene que ver con un mejor quehacer de la tarea a cargo de fiscalía y que son conscientes de que tienen la necesidad de mejorar.

5. Doctora Iris Marín, Defensora del Pueblo

Agradece a los senadores de la Comisión Primera la invitación y el interés por el presupuesto de la justicia y de la Defensoría del pueblo, en los puntos que creo pueden ser de su mayor interés. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional de control, es la institución nacional de derechos humanos tiene autonomía presupuestal y administrativa. Hay un aumento en el presupuesto del 2027, con respecto a la apropiación final con respecto al presupuesto del año 2026. Sin embargo, se puede observar que desde el año 2024 y dos años sucesivos hubo reducción del presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Por eso lo que le han pedido al gobierno y ahora al Congreso de la República es por lo menos mantener el valor nominal del presupuesto que tenía la Defensoría del pueblo en el año 2024 cuando ella llegó a la Institución. Para el año 2024 el presupuesto final fue de 1.3 billones de pesos. Actualmente el proyecto de presupuesto propone un billón 328 pesos, que trata aproximarse al que tenía en el 2024. Si se hace la revisión del IPC, no llega a ser justamente el valor constante de lo que tenían en el 2024. Sin embargo, se hizo un esfuerzo en aproximarse a eso.

El presupuesto les va a permitir retomar actividades que habían dejado de hacer debido al recorte presupuestal. En un documento adjunto se evidencia los programas que pueden retomar como es alertas tempranas, el despliegue territorial en la casa de los derechos y atender a las victimas del conflicto armado, así como retomar acciones de atención sicosocial colectiva para jóvenes en situación de riesgo y particularmente de reclutamiento y de riesgo de suicidio en 7 municipios , van a poder ampliar la posibilidad de capacitación, pedagogía y divulgación de los derechos humanos para varias instituciones que es una de las funciones centrales que, la Constitución da a la Defensoría del pueblo y van a hacer unas obras, de modernización de la infraestructura de la Defensoría del pueblo en aquellos lugares donde es una necesidad inmediata.

El presupuesto asignado no es suficiente para las necesidades que tiene la Defensoría del pueblo, por eso les pide que apoyen la solicitud que ha hecho para aumentar el presupuesto con 130 mil millones de pesos más y les explica para que lo requiere. 1. Es el ajuste a valor presente de los honorarios del sistema nacional de Defensoría pública, no hubo incremento del año 2018 al 2020 y se presenta incremento 20212 al 2024 y se suspende nuevamente el incremento en los años 2025 y 2026, los incrementos que hubo no fue el que establecía el IPC, En resumen debía haberse hecho un incremento desde el 2018 del 52% en los honorarios de los defensores públicos y en estos 8 años solo se ha hecho un incremento del 19.76% eso quiere decir que hay un rezago en el incremento de los honorarios de los defensores públicos del 32%.

Esta es una solicitud de un sindicato que más aboga por la defensa pública y es una solicitud que es justa porque efectivamente los defensores públicos vienen perdiendo la capacidad adquisitiva de sus ingresos. Para ponerse al día con los honorarios de acuerdo al IPC, se requiere de un presupuesto adicional de $57.521 millones de pesos. Los honorarios de los defensores públicos son muy modestos el que más rango tiene es el que representa a las víctimas o a los procesados ante las altas cortes

tiene un ingreso de $6.747.000 pesos en prestación de servicios esto quiere decir que en la práctica neto recibe $5.900.000 pesos, es la persona que participa en el proceso judicial que menos ingresos tiene, gana menos que el secretario del juzgado y tiene una carga procesal de alrededor de 120 procesos. Es una injusticia. Realmente hemos dicho siempre que la defensa pública es parte estructural del sistema de justicia, es un derecho fundamental de las personas tener una representación judicial si no tienen medios para pagar un abogado.

Adicionalmente quieren solicitar el apoyo en dos programas más. El primero es un programa que han iniciado de unidades especializadas para el litigio en las violencias basadas en género contra las mujeres y contra las personas LGBTIQ+. Se ha iniciado en 4 ciudades. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Quieren tener una unidad especializada de género en cada una de las 42 regionales. Ustedes saben que la violencia basada en género en Colombia es dramática. Los feminicidios no solo persisten, sino que han venido aumentando y es necesario fortalecer la representación judicial de las mujeres, en defensores especializados y extenderlo a las 42 regionales del país. Para ello se requiere de $4.166 millones más, lo que considera es poco para lo que se puede aportar en representación jurídica.

Y el otro gran aporte que les queremos pedir es el programa que han iniciado de defensores y defensoras públicas del buen futuro son jóvenes que deben tener menos de 28 años y tarjeta profesional y no se les exige los dos años de experiencia para la rama en la que van a prestar el servicio de defensa pública civil, penal laboral familia. Se plantea que puedan tener su primera experiencia profesional con la defensa pública sin haber cumplido esos dos años de experiencia es un programa costo eficiente permite ampliar el servicio de defensa pública de una parte y de otra parte permite dar oportunidades de una experiencia profesional a jóvenes que de otra manera muy difícilmente la tendrían. Cada defensor gana 3 millones de pesos en honorarios, es mucho menos de lo que gana un defensor con más experiencia, pero para este joven es una oportunidad importante que le va a permitir enrolarse, es como una Ley de primer empleo, pero en prestación de servicios en la defensa pública. Y la tercera gran solicitud que hace está relacionada con infraestructura de la defensoría del pueblo en temas que son importantes y que no se alcanza a cubrir con la asignación inicial.

El terremoto mostró que no se puede seguir aplazando este tema. La sede regional del Quibdó quedó con daños estructurales, la sede de Risaralda también tuvo unos daños muy importantes, tenemos que avanzar en los arreglos de la sede de Quibdó, que, si bien la cubre el seguro, no cubre todo lo que se requiere y es también necesario arreglar el tanque de agua y la red eléctrica. Adquirir una sede para la regional de Risaralda, construcción de la sede regional de Tumaco, adecuación de redes hidrosanitarias y eléctrica de las sedes de Cundinamarca y Bogotá.

La adecuación de varias sedes: Guainía, Bolívar, centro Caucasia, Montelíbano, Amazonas y Cúcuta, y la continuidad de los estudios técnicos para la sede de Mocoa que se encuentra en situación de riesgo. Esto implica una solicitud adicional de lo previsto en el proyecto de Ley de 130.810 millones de pesos. Para terminar y por las preguntas que habían hecho queremos contarles que la Defensoría del pueblo para finales del 31 agosto tiene una ejecución presupuestal del 73.5%, Está por encima del promedio de ejecución del presupuesto general de la Nación que es del 66 % de tal manera que tienen una ejecución presupuestal positiva que permite darles la tranquilidad de que estos recursos se van a usar y ejecutar oportunamente. El año pasado la ejecución presupuestal fue de casi el 97%.

6. Doctor Ariel Cortés, Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Saluda a la mesa directiva a los senadores de la comisión primera Constitucional permanente e inicia señalando que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público del orden nacional dotado de personería jurídica, patrimonio propio, de autonomía administrativa de conformidad a la Ley 938 de 2004. Sus principales funciones son desarrollar las actividades en el área de medicina legal y ciencias forenses, acompañar a los fiscales en la preparación de casos y asistencia de audiencias públicas, organizar y dirigir el sistema de medicina legal y de ciencias forenses, prestar los servicios médico legales y de ciencias forenses y participar activamente en la búsqueda de personas desaparecidas del país, por lo cual apoya como auxiliar de la justicia a toda jurisdicción ordinaria, la jurisdicción especial para la paz, la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción penal militar y policial e indudablemente al ministerio público.

Nosotros para el año 2025 nos fueron asignados $503 mil millones de pesos, de los cuales cerramos con una apropiación definitiva de $479 mil millones de pesos, que corresponden a una diferencia frente a los compromisos de 477 mil millones de pesos a una diferencia que es de previo concepto y que no fue liberado por parte del Ministerio de hacienda y crédito público, logrando una ejecución del 99,6%.

Con ese dinero en el año de 2025 realizaron 248.716 valoraciones y 38.510 necropsias, de las cuales 14.052 necropsias están referidas a muerte violenta por homicidio. En las valoraciones médico legales realizamos por violencia interpersonal 65.800, violencia de pareja 35.000 y lesiones de segunda vez aproximadamente 34.000. Para la ejecución del año 2026 tuvimos una apropiación de $548 mil millones de pesos que en este momento tenemos bloqueado por $12.000 millones de pesos, la semana pasada, nos levantaron $6.300 billones de pesos. Tenemos en este momento bloqueados por certificados de CDP la suma de $5.871 millones de pesos. En este momento hemos comprometido $330 mil millones que corresponden aproximadamente al 60.3% de la vigencia de 2026 y han realizado 159.427 valoraciones y 27.587 necropsias. Esperan cerrar el año 2026 con 35 mil necropsias y las 280 mil valoraciones.

Señala el director que ellos pidieron para el año 2027 $846 mil millones de pesos, de los cuales solamente les fueron adjudicados $571.900 millones de pesos con un déficit del 18.8%. Para el presupuesto del 2027 se desagregan en un 80% en gastos de funcionamiento por 450 mil millones de pesos y gastos de inversión de $121 mil millones de pesos en los cuales sólo aumentó el 4.3% del presupuesto frente al año 2026.

Menciona que ellos siempre han tenido anteproyectos de inversión que han solicitado superiores, por ejemplo, para el año 2022 solicitaron una inversión de 123 mil millones de pesos y solo les aprobaron 46 mil millones de pesos. En este momento pidieron 184 mil millones de pesos para el año 2027 y solamente les fueron dados 121 mil millones de pesos para los proyectos de inversión. ¿Qué cubre estos proyectos de inversión? Un programa inicial que se llama efectividad de la investigación penal y técnico científico de la cual son valor de 67.480 mil millones de pesos para mejoramiento de los derechos humanos, víctimas y patología por 22 mil millones, conocimiento forense 1.700 millones, mejora de la capacidad científica de laboratorios forenses por valor de 24 mil millones y sistema integral para la paz por 18.500 millones de pesos y el programa 2999 que es de fortalecimiento de la gestión y dirección del sector con la fiscalía en la cual para el mejoramiento de

la tecnología e implementación de la inteligencia artificial para la transformación digital por valor de 35 mil millones y solo les fueron adjudicados 24 mil millones de pesos, lo cual va a llevar a retraso en la renovación de equipos e infraestructura tecnológica, desfinanciación de mantenimiento y actualización de software, riesgos para la continuidad de los servicios de la nube y la conectividad institucional, mayor exposición a obsolescencia tecnológica y vulnerabilidades de seguridad.

El proyecto de construcción, dotación y adecuación de edificios y sedes solicitaron 71 mil millones de pesos y les fueron dados 21.800 eso los lleva a aplazar las obras y adecuaciones prioritarias, limitación para modernizar y ampliar la infraestructura institucional, dificultades para adecuar espacios técnicos administrativos y de atención al usuario y persistencia de riesgos operativos sanitarios y de seguridad.

Se solicitó para el año 2026 los recursos para la construcción y dotación de la sede Soacha por 11.700 millones, y les fue adjudicado una cuota de 8.200 millones, con gestiones que realizaron la semana anterior pueden cubrir la dotación y la construcción de esa sede, pero nos toca desfinanciar otros proyectos.

En el cuadro que se presenta está la cuota comunicada que fue por 121,000 millones de pesos para todos los proyectos de inversión, cuando solicitaron 184,000 millones de pesos. Sin embargo, dejan de financiar una serie de aspectos importantes dentro de medicina legal. Por ejemplo, el proyecto de la Ley estatutaria número 448 de 2024 de la Cámara y 138 del 2024 del Senado, el cual se aprobó el año pasado y que está en este momento en la Corte Constitucional en estudio de exequibilidad, el cual es la ley de perfiles genéticos criminalísticos, que no tienen cómo financiarlo el próximo año. No tenemos cómo financiar la reconstrucción de Cali. Cali es una sede de medicina legal que quedó por fuera de nuestra red de servicios. No podemos prestar en este momento las valoraciones en Cali, no podemos prestarle servicio de morgue en Cali. No tenemos cómo cubrir la prima de igualdad, no tienen cómo ampliar los cargos adicionales que pudieran tener al interior de la organización y que es necesario para la ampliación de medicina legal.

En pocas palabras, siempre lo he dicho y lo seguiré manifestando, medicina legal es la cenicienta de la justicia en el país y somos el soporte que hace que la justicia se vaya avanzando con todos los peritajes y las valoraciones que realizamos al interior de la organización.

7. **Doctora Paula Susana Ospina. Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio**

Da las gracias a la mesa directiva y a los Senadores y señala que está en la comisión, para presentar el proyecto de presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio, quiero comentarles en primera medida que los recursos de la Superintendencia son recursos propios, 100% propios, una fuente única, financiado 100% con recursos de la SIC. Nuestro presupuesto para 2027 son 357,998 millones de pesos, de los cuales 232,680 son gastos de funcionamiento, esto es el 65% y 125,318 son gastos de inversión, esto es el 35%.

Los gastos de personal representan un 49,3% del funcionamiento. Financian la planta de personal técnico y especializada necesaria para las labores de inspección vigilancia y control y administración de justicia que presta la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuestros gastos de personal

representan $114 millones de pesos, transferencias 59 millones de pesos, adquisiciones de bienes y servicios 57 millones de pesos para el total de funcionamiento ya anunciado anteriormente.

Nuestros gastos de inversión como metas la modernización y gestión digital para contar con 100% los expedientes digitales, atención y orientación a la ciudadanía, propiedad industrial de las regiones, fortalecimiento de la inspección, vigilancia, metrología legal, red nacional de protección al consumidor, modernización del direccionamiento estratégico, protección de la libre competencia económica, protección de los datos personales, derechos de los consumidores y Administración de Justicia, que son los jueces de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Frente a la pregunta de ajustes solicitado en las fuentes de financiación, nosotros no estamos pidiendo recursos adicionales, nosotros estamos pidiendo un cambio en la fuente de financiación y es que los excedentes financieros del proyecto del presupuesto general 2027, estaban en 104 mil millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio pide un ajuste de 77 mil millones de pesos, una disminución de los excedentes financieros, pero que la nación nos aporte esa diferencia de 27 mil millones de pesos que se pretenden destinar a la delegatura de datos personales.

Señala que ellos no están pidiendo más recursos, están pidiendo solamente el cambio de la fuente de financiación de excedentes financieros, por cuanto esos excedentes financieros representan intereses para la superintendencia, que les den un aporte de la nación. La plata que estamos pidiendo de menos serían 27,410 millones de pesos. Evaluación de la suficiencia presupuestal. Informa la entidad el proyecto para la vigencia 2027. Nuestros recursos frente a la pregunta de si son suficientes. La respuesta es que los recursos son suficientes.

De una meta de 311 mil millones de pesos, llevamos recaudados ejecutados 144 mil millones de pesos, esto es el 48% a la fecha. En 2026 llevamos de la meta o nuestro presupuesto que era de 311 mil millones de pesos, llevamos 150 mil millones de pesos, esto es 48% ejecutado hasta este momento. Para el 2027, reitero, 357 mil millones de pesos, 232 mil millones son para funcionamiento, 65% y 125 mil millones en inversión, 35%, sin necesitar recursos adicionales, pero sí nos vamos a gastar el presupuesto proyectado.

El Senador Fabio Amín hace una pregunta a la delegada de la superintendencia. Me causa sorpresa por el monto, la cantidad a la que hacía referencia como rendimientos financieros. ¿Es de algún acumulado de años atrás?, porque tener en rendimiento financieros más de 100 mil millones de pesos cuando el presupuesto anual son 300 mil millones, es un número que no cuadra normalmente. Pregunta, además, si esos rendimientos financieros eran generales, que además los rendimientos financieros son solo de la entidad, que además los producen ustedes porque es la plata que está guardada en cuentas.

La Doctora Ospina, responde los dos interrogantes planteados por el Senador Fabio Amín. Senador Amin son recursos propios. Hemos creado la CUN, donde se guardan todos nuestros excedentes financieros y en esa cuenta única nacional hay 645 mil millones de pesos. De los cuales pues por el ejercicio presupuestal que se hizo se previeron por parte del proyecto de presupuesto general de la nación 104 mil millones de pesos. El ajuste de la SIC que pide son 77,000 millones de pesos, pero sí son excedentes financieros guardados desde hace mucho tiempo que los que los tenemos ahí porque son recursos propios. Nosotros excepcionalmente somos una excepción en el gobierno nacional y

trabajamos con recursos propios. Por eso también, el llamado aquí es que cambiemos la fuente de estos excedentes financieros a una fuente de la nación por 27,000 millones de pesos.

Pregunta el Senador Deluque, Solo presupuesto proyectado vs ejecutado de este año. ¿Cómo les da eso? o lo que se proyecta a terminar el año versus el próximo año. Adiciona a la pregunta el presidente de la Comisión, sería bueno ver cómo ejecutó usted en el año 2025.

Responde la Doctora Ospina. Honorable Senador Deluque. En 2026, nosotros proyectamos 311 mil millones de pesos, de los cuales llevamos ejecutados 150 mil millones de pesos, esto es el 48% en este momento. Para 2026 el aumento es de 357 mil millones de pesos. Estos son alrededor de 50,000 millones de pesos, nuestro aumento para 2027.

El Senador Deluque pregunta nuevamente a la Doctora Ospina. En el llamado del gobierno de ser austeros y cortar el gasto público, ¿ustedes tienen alguna política de disminución?, estamos ya casi llegando al mes 10 y tienen el 48%. puede generarse de pronto un ahorro ahí que pueda permitir también al gobierno tomar esos recursos para otros propósitos?

La Secretaria de la SIC responde, Honorable Senador, desde que llegó la superintendente María Rocío Cortés, lo primero que se miró fue políticas de austeridad del gasto encaminadas a todo el tema de viáticos, tiquetes, salidas al extranjero de la Superintendencia de Industria y Comercio, políticas de ahorro en energía. Se reglamentó y se sacó la circular para que estemos atentos a ello, por ser recursos propios, señala que ellos mismos producen sus propios ingresos y fijan sus propias metas. Entonces, los recursos de los 350 mil millones de pesos sí los vamos a utilizar, los tenemos distribuidos, pero tengan la certeza que tanto la superintendente como mi rol de secretaria general vamos a generar la austeridad del gasto de vida conforme la política del señor presidente Abelardo De la Espriella.

Pregunta el Senador Nieto, para que, confirme que la fuente de todos los recursos de la Superintendencia son los propios. Responde la funcionaria de la Superintendente de Industria y Comercio. Le confirmo, señor senador, que el 100% de los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta el día de hoy han sido recursos propios. Por eso insisto en que estamos pidiendo solamente un cambio de fuente para generar ahorros de los excedentes financieros y cambiar esos aproximados 27 mil millones de pesos para que nos los entregue el Ministerio de Hacienda, como aporte de la nación y lo dejemos en excedentes financieros solo 77 mil millones de pesos.

Pregunta nuevamente el Senador Nieto ¿Por qué quieren ese cambio? Responde la Doctora Ospina, Porque los excedentes financieros son el ahorro que tenemos para cualquier imprevisto. En tanto nosotros trabajamos con recursos propios. Se puede generar que no recaudemos metas, que no recaudemos las tasas y las contribuciones debidas. Es por esto que pedimos la diferencia de cambio de fuente.

El Senador Nieto hace dos comentarios rápidos. Uno, no parece el momento en que ustedes le pidan al Ministerio de Hacienda recursos adicionales si tienen una fuente propia, no esté de crisis fiscal. Dos. Hay un riesgo y es que por cuenta de que ustedes tienen esos recursos propios, no apliquen las políticas de austeridad que uno esperaría en estas circunstancias. Ustedes no tienen restricción fiscal porque sus recursos, evidentemente doblan el gasto presupuestado anual. Eso es lo que usted nos

acaba de decir. Pero dicho esto, el riesgo está en que ustedes se relajen en estos tiempos porque no tienen necesidad de tener austeridad o restricción en el gasto, porque la plata la tienen. La pregunta es, ¿ustedes nos pueden comunicar con precisión dónde va a ser la política de austeridad y restricción del gasto?

Responde la Doctora Ospina. Señor Senador, me corresponde indicar que en el presupuesto general de la nación para el 2027, se había solicitado el ajuste de los $77 mil millones de pesos por la fuente, reemplazandola por los $27 mil millones de pesos. Me corresponde con claridad decirlo acá al honorable recinto. sí me aplica la política de austeridad del gasto, porque estoy comprometida a ella desde la Secretaría General, en mi rol de ordenadora del gasto. La Contraloría me audita, si bien son recursos propios, voy a aplicar las políticas de austeridad del gasto en viáticos y desplazamiento, en horas extras. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una política de cero papeles. y estamos migrando al expediente digital. Tenemos 10 vehículos y 10 conductores donde también aplicamos en horas extras esa política de austeridad del gasto. Estos son los enfoques principales, cero papel, viajes y comisiones y por supuesto horas extras a los conductores.

Pregunta nuevamente el Senador Nieto de ¿Cuál es el monto? La doctora Ospina responde que el monto que tienen para austeridad es aproximadamente de un 10% de lo que ya venimos manejando, porque como le digo, a nosotros nos aplica la ley de austeridad del gasto, nos audita la Contraloría y por lo tanto estamos proyectando, sin decir una cifra exacta, un ahorro del 10% para la vigencia del 2027.

Pregunta el Senador Nicolás Gómez, Doctora Paula, creo que sería muy importante para la trazabilidad entender y comprender de dónde es el origen de esos recursos, las tasas, las contribuciones, las multas que ustedes aplican, creo que constatar sin lugar a dudas lo que hoy aquí preocupa y es esa estabilidad entre los ingresos y el gasto. Y, dicho sea de paso, pues la austeridad también tendrá que verse reflejada en el siguiente proceso.

Responde la doctora Ospina. Honorable senador, comprendo su pregunta y por supuesto que sí. nuestros recursos, insisto, son propios y son generados de las tasas que cobramos en propiedad industrial por el registro de marcas, patentes, nuevas creaciones, el registro de las sanciones que se hacen en la delegatura de protección al consumidor, en la delegatura de competencia. Nosotros regulamos el mercado y hacemos el ejercicio de inspección, vigilancia y control. Allí recibimos nuestros recursos por las sanciones impuestas. La Superintendencia de Industria y Comercio desde que nació ha estado con recursos propios y por lo tanto las tasas salen de allí. Es importante su pregunta porque por eso insistimos en el cambio de fuente de los $21 mil millones de pesos porque estamos expuestos a no saber cómo va a ser el flujo del 2027.

8. Coronel Daniel Gutiérrez, Director del INPEC

El Director del INPEC hace un saludo a la mesa de Directiva y los integrantes de la Comisión y señala que el INPEC es el encargado de toda la administración penitenciaria y carcelaria del país y la es la encargada de todos los suministros logísticos, tanto en salud, alimentación e infraestructura. Por tal razón, los recursos que administra el INPEC son dedicados casi al 100% para el funcionamiento y un porcentaje mínimo para la inversión.

Señala las ejecuciones presupuestales de los últimos 3 años. Para el 2024 estará ejecutado el 98.7% en funcionamiento, 99.8% en inversión. Para el 2025 igual 99.25% en funcionamiento y el 100% de la inversión. Eso con respecto a los antecedentes. Para este año 2026 tuvimos una asignación de 2.2 billones de pesos para funcionamiento y $6.400 millones de pesos para inversión, de lo cual a la fecha llevamos una ejecución presupuestal a corte de 15 de septiembre en funcionamiento del 66.94%, que esto tiene que ver con todo: salarios, comisiones y demás. Y en inversión tenemos un avance del 89.82% correspondiente a 5 millones de pesos.

Manifiesta que para el 2027 se hizo una solicitud de 2.6 billones de pesos para funcionamiento y 27 mil millones para inversión. No obstante, el presupuesto asignado fue de 2.5 billones para funcionamiento y 10 mil para inversión. De esta manera quiero decir que hay una diferencia de 417 mil millones en lo solicitado y en lo que está asignado. Sin embargo, tenemos la capacidad de con el recurso que fue asignado actualmente de cumplir con todas las funciones institucionales y con todas las instrucciones del señor presidente de la República con respecto a que se eviten más delitos en las cárceles y también continuar con la resocialización de personas que están hoy privadas de libertad aplicando la custodia, la vigilancia y la atención penitenciaria a personas privadas de libertad.

El Senador Santiago Barreto hace una pregunta al Coronel Gutiérrez. Coronel, ¿nos puede dar el dato? Total, es que usted lo dio desagregado. Entonces, ¿cuál fue el solicitado? ¿Cuál fue el asignado? ¿Y cuál es el faltante, por favor? El solicitado fueron 2.6 billones para funcionamiento, en total fue de 2.9 sumando los tres elementos hablando de funcionamiento, deuda e inversión. Sin embargo, el asignado fue de 2.5, una diferencia de 417 mil millones.

La Senadora Isabel Zuleta hace una pregunta al Coronel. Esa reducción de los 400 mil millones ¿en qué afectaría la institución exactamente? Y le quiero preguntar esa inversión cuando se habla de los recursos de inversión, exactamente, porque es un aumento muy importante, tenemos una variación de más del 61%. ¿A qué se refiere ese aumento tan grande en gastos de inversión? Yo siempre he tenido, coronel, una preocupación por el entrenamiento de los hombres del INPEC, sobre todo porque considero que no puede ser solo un curso y que la formación de los hombres del INPEC, la formación ética, la formación y la disciplina deben ser permanentes. Yo no sé, coronel, si se ha podido incorporar algún rubro específico para temas de formación del cuerpo de custodia en nuestro país.

Responde el Coronel a la Senadora, Respecto a la diferencia de los $400 mil millones de pesos que no fueron asignados, hay que aclarar que se habían solicitado 270 mil millones para gastos de deuda, que es un rubro que normalmente se presupuesta en un caso hipotético para el tema de demandas y demás, quedó en cero, pero no afectaría directamente el funcionamiento de la entidad. No obstante, también la solicitud de $27 mil millones en inversión, autorizaron 10 mil pero en este caso ha sido una muy buena ejecución del presupuesto, lo que permite que pasemos del 2026 de tener 6,400 al 2027 tener 10 mil lo que permite respecto a la segunda pregunta, que esos gastos de inversión tengan que ver con el fortalecimiento de los procesos de resocialización, capacitación del personal, fortalecimiento de la industria penitenciaria y también la modernización integral de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Como decía, no estamos siendo afectados porque pasamos de 6,400 en 2026 a 10 mil en 2027 a pesar de la reducción que se hizo.

9. Doctora Myriam Martínez, Directora general de la Unidad de Restitución de Tierras

Saluda a los senadores de la Comisión y da los agradecimientos por haber sido invitada. La Unidad de restitución de tierras es la unidad especialmente creada para poder cumplir con todo lo que es el análisis e investigación de aquellos casos de las personas que fueron víctimas del conflicto armado, en casos de despojo o de desplazamiento. En este sentido, tenemos tres etapas fundamentales. La primera de la parte administrativa en donde la unidad hace todo el análisis para poder determinar cuáles son las víctimas, ya sea de oficio, petición de parte que fueron afectadas por la situación y establecer el acervo probatorio respectivo para poder determinar aquellos casos que deben ser llevados a la parte judicial y que los jueces decidan.

En este sentido, tenemos una misionalidad enfocada principalmente a la restitución de las tierras e igualmente a toda lo que es la filosofía de reparación para no repetición. Las inversiones principales de la unidad están enfocadas a lo que son el cumplimiento, toda la parte administrativa y fundamentalmente el cumplimiento de las órdenes judiciales que son expedidas por los jueces de restitución que hacen parte de lo que se denomina la justicia transicional. En este sentido, la política de restitución, que fue una de las preguntas que nos realizaron en los cuestionarios, podemos decir que actualmente cuenta con un universo de 11,566 sentencias que benefician a 52,921 personas pertenecientes a 13,353 familias.

Estas sentencias derivan de aproximadamente 64,988 órdenes judiciales. Dentro de una sentencia podemos encontrar diferentes o una o más órdenes judiciales. Como les comento, no es solamente la restitución de la tierra, sino todo un programa para la reparación y no repetición. De estas 64,988 órdenes judiciales, 46,431 han sido cumplidas, alcanzando aproximadamente un avance acumulado del 71%.

En este momento en la unidad hay aproximadamente 18,557 órdenes que se encuentran en proceso de cumplimiento. Para el tema de presupuesto, en el proyecto de presupuesto se solicitaron aproximadamente 723,728 millones de pesos para la vigencia del 2027. Y en el presupuesto otorgado, se nos asigna 514,471 millones. Los presupuestos que manejaban en 2025 fueron 535,264. El histórico de la unidad en términos de ejecución, como es un tema de cumplimiento de leyes, es una ejecución de aproximadamente 95.97% en cada uno de los años.

En el 2026 se le asignó a la a la unidad 475,890 millones de pesos. Esto significa que de los 514,471 aprobados implican un aumento del 9% del presupuesto que se asignó en el 2026. Revisando la forma de ejecución inicial de este presupuesto, nosotros encontramos la entidad con una ejecución que en este momento alcanza el 55%. Sin embargo, consideramos que para el próximo año la suma asignada puede ser adecuada, teniendo en cuenta que sí se plantea realizar un plan de descongestión a gran nivel que va a empezar también a evidenciar en un tema de reducción de costos también, porque necesitamos revisar diferentes formas en cómo fueron realizados en algunos contratos que encontramos al interior de la entidad.

En este momento, de estos 514,471 que se asignaron para el próximo año, tenemos en funcionamiento el 16% que son 86 mil millones y en inversión 427 mil millones. Como ustedes pueden observar, la mayor cantidad del presupuesto se va en temas en temas de inversión, que es lo que corresponde a la misionalidad de la entidad. Lo demás en funcionamiento son aquellas actividades operativas que son necesarias para poder dar cumplimiento a las órdenes.

En el próximo año nos enfocaremos en una reducción importante. Este año hubo una un manejo que, si me permiten decirlo, teniendo en cuenta la misionalidad de la entidad, nos encontramos que el 37% del presupuesto fue destinado a OPS. Este es un presupuesto bastante alto, ya que por fortuna esta entidad tiene una planta de personal bastante buena de 460 personas aproximadamente. En este sentido, para el próximo año, nosotros planteamos que haya una reducción considerable en términos de OPS para que estos recursos se puedan invertir en cumplimiento de órdenes judiciales. Esto sería, señor presidente. No sé si tienen más preguntas o alguna inquietud.

Pregunta el Senador Cadavid. Me llamó mucho la atención si usted pudiera enfatizar o repetirle a la comisión, por favor, el porcentaje de OPS que tenía dentro del presupuesto y cómo están ustedes proyectando una reducción. Y quiero contarle que desde el ejercicio que tuvimos ayer, hemos sido muy insistentes en que todas las entidades puedan hacer un ajuste. Naturalmente el gobierno nacional lo hará de reducción, de ahorro, de austeridad, pero bajo ese tema específico de OPS, ¿usted nos puede indicar, señalar qué fue lo que encontró, por favor?

Responde la Doctora Martínez, como les comento, la unidad tiene una gran ventaja. Yo he tenido oportunidad de manejar otro tipo de entidades en el Estado colombiano y a veces las entidades no tienen una planta tan robusta. Esta Unidad tiene una planta bastante robusta. Son 564 cargos de planta en diferentes niveles profesionales, hasta técnicos distribuidos en todos los grupos de trabajo. Con este tipo de planta, se puede hacer una muy buena gestión y contratar una proyección de OPS que corresponda aquello que se tiene que complementar. Me encuentro que el 37% del presupuesto de inversión, que es un presupuesto que está destinado principalmente a dar cumplimiento de órdenes judiciales, se destinó este año principalmente a la contratación de aproximadamente 2.900 OPS. Realmente encontramos personas que no tienen la preparación, que no están cumpliendo. Soy una persona respetuosa de los derechos de las personas y el tema de cumplimiento legal. Entonces estamos haciendo revisión de las evidencias de cada uno de los contratistas, que es lo más correcto, para determinar si las personas están aportando a los contratos de conformidad con las obligaciones adquiridas. o si no están aportando para poder organizar con ellos un plan de trabajo o iniciar acciones de incumplimiento en aquellos casos que lo consideramos necesario. Es exagerado, un 37%, son más o menos 179 mil millones de pesos que se está invirtiendo en OPS y como les comento, aproximadamente en la unidad más del 80% tiene que ser destinado a órdenes judiciales. Si bien no niego que uno puede contratar contratos de prestación de servicios, realmente este nivel es demasiado grande para también la planta con la cual contamos al interior de la unidad.

Pregunta la Senadora Esmeralda Hernández. A mí me parece muy relevante la disminución con respecto a lo que se solicitó. estaba aquí haciendo las cuentas y es alrededor del 30% de 723 mil a 514 mil y además de eso una reducción de más de 20 mil millones de pesos con respecto al presupuesto asignado en el año 2025 y acaba de mencionar usted que solamente en proceso hay 18 mil órdenes de cumplimiento. Me parece una reducción bastante significativa y bastante preocupante. Yo quisiera que usted nos cuente un poco cómo va a afectar justamente todo ese proceso para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que existen y eso también finalmente cómo afecta todo el proceso de formalización de tierras e inclusión productiva a pequeños productores y se han hecho recortes tan gigantes a la entidad y teniendo en cuenta, por supuesto, la relación íntima que existe entre conflicto y sobre todo entre formalización de cultivos lícitos, es decir, el tránsito de los cultivos ilícitos a cultivos lícitos, porque esto tiene absolutamente todo que ver y el recorte me

parece preocupante, sobre todo viendo que incluso se presenta una disminución sobre lo que se había asignado el año anterior.

Responde la Doctora Martínez, Yo creo que esto vale la pena analizarlo desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, hubo una reducción. Nosotros sabemos que el Estado está en una situación precaria desde el punto de vista fiscal. Y realmente cuando yo observo la asignación, incluso encuentro un aumento del 9% en comparación a lo que se asignó este año. Quiero dividir esto como en dos o tres partes para poderme explicar adecuadamente. Lo primero es cuando yo encuentro la unidad en este momento me encuentro que tiene 475 mil millones de pesos asignados y yo más o menos tengo el 55% de ejecución, pero increíblemente no se ha atendido sino como 1.500 órdenes judiciales y tengo una ejecución altísima. Como bien les explico, es un tema que está en verificación e investigación, pero la ejecución de las OPS, o sea, el monto de las OPS es demasiado excesivo y no se debía haber contratado tanto nivel de OPS, teniendo en cuenta que la misionalidad de la de la unidad es enfocada al cumplimiento de órdenes judiciales. Asimismo, me encuentro que hay elaboradas una gran cantidad de convenios y contratos en los cuales se pagaron unos dineros que no tienen nada que ver con el cumplimiento de órdenes judiciales. Todo esto, por supuesto, está en temas de investigación. Teniendo en cuenta esto, senadora, si bien es cierto que tenemos una atención importante de órdenes judiciales, para mí en este momento es muy acelerado decir, que por qué no me dieron el 30% más que se había pedido cuando lo que yo veo es una ineficiencia en el manejo presupuestal de lo que tenía la unidad.

Por experiencia y ustedes bien lo conocen, yo soy una persona muy juiciosa en el manejo del recurso público y yo tengo que llegar a hacer diferentes análisis de diferentes convenios que no se debieron haber realizado y que además no se debieron haber ejecutado en que la formen como se ejecutaron. En la medida en que yo logre una ejecución adecuada de este presupuesto que tengo, seguramente ya tendré una realidad más clara de verdad, ¿cuánta plata necesita la Unidad para poder atender las órdenes judiciales que tengo pendientes? Obviamente tengo clarísimo cuál es la carga y cuál es la responsabilidad de la unidad, pero también tengo claro que este año se hicieron manejos inadecuados en la ejecución del recurso público y estos manejos se ven reflejados en la poca o casi nada atención a órdenes judiciales, que es la misionalidad principal de la unidad. La parte de formalización y demás no la llevamos nosotros, senadora, porque la unidad se dedica principalmente lo que es restitución de tierras y reparación de víctimas, para todo lo que es la filosofía de reparación más no repetición.

Obviamente cuando restituimos una tierra nosotros entregamos el título o a través de las otras entidades que trabajan los temas de tierras hacemos todo lo que corresponde a la titulación de las tierras. En este caso, nosotros trabajamos muy de la mano también con la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada principal del tema de formalización de los títulos en algunas dependiendo de las órdenes también judiciales que emitan los diferentes jueces. Entonces, no sé si así está bien la respuesta o si usted quiere que la complemente.

Pregunta la senadora Hernández. Tiene usted un aproximado de las OPS sobre el valor total del presupuesto ejecutado.

Responde la Doctora Martínez Claro que sí. Como le comento, aproximadamente el 30% del valor del presupuesto está destinado OPS en más o menos 179 mil millones de pesos, que corresponde a

más de 2.900 OPS que encontré. Si ustedes me permiten nuevamente lo comento. Gracias a la estructura que se conformó la unidad tiene una buena planta de personal que son 464 cargos que son de planta y son personas de todos los niveles, tanto profesionales como como técnicos que obedecen a las necesidades propias de la entidad. Esto, ¿qué significa? que tenemos abogados, administradores, economistas, personas que manejan toda la parte de topografía para toda la parte de levantamiento catastral y así sucesivamente dependiendo de las necesidades.

Pregunta la Senadora Isabel Zuleta, Si bien es una de las misionalidades principales todo el tema de órdenes judiciales, también la unidad de restitución de tierras tiene que acompañar a las víctimas. Acompaña a las víctimas, busca, recopila pruebas, precisamente para eso los topógrafos, para eso todas las unidades de análisis. A nosotros nos ha preocupado mucho el funcionamiento de la unidad en términos del acompañamiento a las víctimas precisamente para que salgan las órdenes judiciales. Es decir, ¿cuántas órdenes judiciales, ¿cuántos procesos antes de que salga la orden judicial están en este momento en curso?, ¿cuál es la destinación del recurso para que se promueva el avance en esos juicios de tierras tan importantes para nuestro país y si eso se vería afectado con esta disminución del presupuesto?

Responde la Doctora Martínez, estimada senadora, mire, hay aproximadamente unas 55 mil solicitudes que se encuentran en curso en este momento. Estas solicitudes, como usted bien dice, son solicitudes que la unidad, igualmente, utilizando los recursos de la inversión, tiene que hacer todo este análisis probatorio para poder determinar no solamente la ubicación. Muchas veces las víctimas tienen un conocimiento cercano de dónde de dónde ellos vivían, pero obviamente toca ir hasta la zona y hacer todo un reconocimiento para poder identificar exactamente el predio. Todo esto tiene que hacerlo la unidad. Con respeto, yo le digo y se lo digo porque además quienes me conocen saben que uno debe trabajar para la ciudadanía. Me toca hacer una revisión exhaustiva de las solicitudes porque se han recibido solicitudes y se han radicado solicitudes ante los jueces sin esta labor tan importante que tiene que hacer la unidad del acompañamiento previo para poder hacer bien la identificación. En ese sentido, no le tengo en este momento el dato, pero seguramente más adelante nos veremos. Estoy haciendo una identificación de cuántas solicitudes se radicaron ante los jueces sin acervo probatorio. ¿Por qué es importante esto, senadora? Porque los jueces deben contar con toda la justificación y todos los elementos de juicio necesarios para poder hacer el tema de si restituyen o no restituyen. Igualmente establecer si las personas que se presentan como víctimas realmente son víctimas. En este caso es muy importante tener en cuenta que a veces la restitución ha sido utilizada de manera provechosa por algunas personas que de pronto no vivieron en algunas zonas o incluso las personas de pronto aprovecharon la situación para poder presentarse como víctimas. Hay que ser muy respetuosos porque realmente tenemos muchas personas necesitadas, senadora. Y esto es un tema que nosotros vamos a revisar de manera exhaustiva. Como le digo, espero en una siguiente oportunidad si los visitamos, poderle traer bien claras las estadísticas de todo.

Pregunta el Senador Nicolás Gómez. Debo manifestarle que de las personas que han pasado en estos dos días, usted tiene un análisis muy claro de su entidad y atiende sus asuntos públicos con el criterio que nosotros deseamos como colombianos que se atiendan los asuntos con un criterio ponderado, objetivo y con la intención de avanzar hacia adelante. Y me surge en esa intención de crear ese conocimiento verdaderamente claro, preguntarle dos cosas concretamente. La primera, si ese

comportamiento de esas 2.900 OPS más las 500 es lo usual de la entidad, es decir, o solo fue el año anterior o qué incremento hubo. Seguramente no sé si tiene esa respuesta acá y si no me agradaría mucho que la trajera y la pudiera recoger aquí en el ambiente del Senado de la República. Y la segunda, que también me llama la atención, es 2.900 OPS. ¿Qué tipología pueden tener?, ¿su principal tipología qué fueron, abogados o qué fue esa naturaleza, porque eso nos da cuenta también de qué tan acertado y qué tan juicioso fue la determinación para contratar estas personas y sobre todo lo que se va a necesitar de aquí en adelante, obviamente entendiendo el esfuerzo que usted aquí hoy nos manifiesta basado en las 500 personas que ya hacen parte de la planta de su entidad?

Respuesta de la doctora Martínez. Efectivamente yo hice la verificación previa de cuánto era un aproximado de OPS que manejaba la unidad, antes del gobierno anterior, la mayor cantidad de OPS que llegó a tener la unidad eran 1.600 personas. Entonces estaba manejando entre 1.200 y 1.600 personas aproximadamente en OPS. Es un tema que obviamente lo que yo encuentro es que se dobla la cantidad de OPS en comparación a lo que se necesitaba. Como les comento, la planta realmente es una muy buena planta. no es por repetirlo, por justificar. Cuando yo estuve directora de la Agencia Nacional de Tierras, la planta ya no superaba los ciento y algo de personas. Nosotros a través de un proceso pudimos ampliar la planta a 216 personas aproximadamente. Realmente esta unidad tiene una muy buena planta de personal. Entonces a mí me sorprende mucho, senador. Yo le digo, hay que revisar muy bien, hay gente de todo tipo, de todo nivel, desde el punto de vista profesional y especializado en la planta. Entonces, se puede hacer un muy buen aprovechamiento de la misma.

Las OPS tienen de todo, senador. Tengo médicos, tengo personas profesiones que de pronto no corresponden con estos temas. Obviamente hay que hacer unas interpretaciones bastante amplias para poder acogerlos, pero independientemente de esto, si se permitió de pronto que las personas no cumplieran con sus requisitos, es un tema que se está verificando. Y lo otro que sí es muy importante para mí es si una persona cuenta con un contrato de prestación de servicio, lo importante es que también cumpla con las obligaciones propias de su contrato.

Nos hemos encontrado gran cantidad de OPS que no tienen evidencias de ninguna relación de los trabajos, pero que sí hubo pagos mensualmente por las por labores no realizadas. Esto pues por supuesto está todo en verificación, investigación y las denuncias se presentarán porque ustedes comprenden que estos son recursos públicos y realmente la idea de poder ofrecer contratos de prestación de servicio es un apoyo externo para las entidades en general, pero esto no significa que se permita que haya personas que ganen recursos públicos y simplemente no realicen las labores para las cuales fueron contratados. Entonces, esto es un tema que estamos mirando. Como les comento, en este momento hemos devuelto 900 cuentas de cobro por faltas de evidencia y seguimos revisando.

Pregunta el Senador Iván Cepeda, directora, para mí es un poco curiosa su intervención porque me parece que más le preocupa a usted cómo reducir la entidad, cómo hacer menos ambiciosos los planes de la restitución de tierras, que realmente cumplir con este propósito que es tan importante para el Estado colombiano. Por supuesto que es comprensible la preocupación por la austeridad. porque los funcionarios de la entidad cumplan debidamente sus funciones. Eso está fuera de discusión. Pero toda la lógica de su discurso es ver cómo la entidad, más que avanzar, más que lograr cumplir una función tan importante como es la restitución de tierras en nuestra sociedad, es como tal vez actúa de una manera menos eficaz, menos ambiciosa. Entonces, mi pregunta es muy sencilla.

¿Cuál es el propósito suyo como directora de esta entidad? reducir sus impactos?, su capacidad de restituir o por el contrario avanzar en esto. Y si es la segunda opción, permítame entonces entender cómo lo hará. Si lo que hemos escuchado aquí durante toda su intervención es cómo se va a reducir la capacidad de incidencia sobre este asunto que, repito, es capital, porque claro, uno está acostumbrado a que en este tipo de asuntos del presupuesto los funcionarios vengan realmente a ver cómo su entidad avanza, pero realmente lo que estoy escuchando es otra cosa, una lógica totalmente distinta.

Pregunta la Senadora Isabel Zuleta. En el mismo sentido del senador Ivan Zuleta, directora, yo también quedó sorprendida y quisiera que por favor usted le aclare a este Senado y al país. Usted lo que responde a mi pregunta es que la entidad va a abandonar el acompañamiento a las víctimas, ¿va a dejar de presentar ante los jueces de restitución de tierras las miles de solicitudes pendientes? porque usted considera que primero hay que recabar el acervo probatorio y después presentarla ante jueces sabiendo los tiempos que tenemos hoy ante los jueces. Eso es lo que usted me quiso responder.

Responde la directora Martínez. Respetado senador, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que vamos a avanzar, pero la experiencia muestra que no necesariamente por contar con miles y cientos de personas que quizás no están preparadas para llevar una función no se va a lograr resultados más eficaces. Esta entidad necesita volverse costo eficiente. Esta unidad necesita que realmente se realice la misionalidad para la cual fue creada. Créame que hay una gran cantidad de actividades que se estaban realizando que no tienen nada que ver con la misionalidad y si nosotros enfocamos adecuadamente los recursos, efectivamente le vamos a cumplir a las víctimas. Lo que no puede llegar a pasar es enfocar los recursos en una gran cantidad de actividades o una gran cantidad de contratación de personal que no está aportando a la misionalidad de la entidad y que aparte de todo no tienen la preparación para poder aportar a la misionalidad de la entidad. En la medida en que uno tenga las personas adecuadas, con los recursos iniciales y se puedan ir acrecentando estos recursos, a medida que también se puedan dar resultados, créame que usted va a ver el cumplimiento y el avance. Yo le pongo de presente algo. Yo tengo muy claro cómo es el tema de estas entidades y tengo muy claro también que en la medida en que uno pueda hacer un manejo adecuado de los recursos, estos recursos realmente se ven beneficiados a la ciudadanía y uno tiene que ser muy responsable con esto. Pero hay convenios y actividades que se realizaron que no estaban enfocadas al cumplimiento de órdenes judiciales. Y estas son cosas que en el momento en que empecemos a enfocarlas al cumplimiento de órdenes, vamos a empezar a ver cómo la brecha que tenemos en este momento de 18 mil órdenes sin cumplir ustedes van a ir viendo en reducción. Pero para eso yo tengo que revisar muy bien por qué se pagaba tanto por unos proveedores, por qué no se cumplían ciertas órdenes de una determinada manera, por qué ciertos costos eran demasiado altos en comparación a otros costos de mercado. Todo este tipo de temas hay que analizar dentro de las entidades, senador, porque de lo contrario yo no podría cumplirle adecuadamente a las víctimas. Las víctimas confían en las instituciones para que uno cumpla de la mejor manera las necesidades que ellos tienen. Y si nosotros estamos desviando los recursos, perdón, si la entidad estaba desviando los recursos de una manera inadecuada, créame que este dinero a las víctimas no les llegó. Como yo le digo, todo esto será puesto de presente y ante la fiscalía, porque tenemos ya unos temas para denunciar penalmente, porque sí encontramos unos desvíos de recursos que no

eran adecuados. Si estos recursos se hubieran destinado al cumplimiento de órdenes judiciales, créame que estas órdenes serían mucho menos cumplidas y la brecha un poco menor.

Pregunta el Senador Cepeda. Gracias. No, eso sin duda, pero eso compete directora también a otros órganos del Estado. Su función no es ser ni procuradora ni contralora. Bien que usted si encuentra asuntos en la entidad que deban ser corregidos, los informe. Pero su función no es ejercer como un funcionario que disciplina o que realiza acción penal. Más bien su función es restituir tierras, cosa que no hemos escuchado aquí. No hemos escuchado cuáles son las metas en esa materia que se propone usted, habiendo una realidad tan grave en este país como que hace unos años fueron despojadas 6 millones de hectáreas de tierra. Lo que nos gustaría escuchar es qué se propone en esa materia. ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles son sus metas en esa materia? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con qué presupuesto lo va a lograr? No, ¿cómo va a eh pues ver cómo se reduce la planta, ¿cómo se ahorra o cómo, no, eso bien? ¿Y eso déjeselo a las personas de su equipo administrativo, pero lo que yo considero es esencial es que usted le explique a esta comisión cómo va a ser restitución de tierras desde una unidad que tiene un carácter estratégico para el país?

Responde la Doctora Martínez, yo creo que desde el principio he comentado que la misionalidad de la entidad es hacer una restitución igualmente con la con la visión de reparación y no repetición. Esa es la misionalidad de la entidad. Y yo sé que básicamente si yo le digo a usted tengo esta meta, tengo que cumplirla igualmente con el presupuesto asignado y posiblemente se pueda en un momento determinado poder solicitar más presupuesto. Pero cuando se maneja ineficientemente el presupuesto, no importa cuántas metas yo me fije si al final no voy a cumplir. Lo que estoy haciendo aquí explicando en materia de presupuesto, es que el presupuesto bien manejado y realmente enfocado a la misionalidad de la entidad le cumple a las víctimas. El senador Cepeda pregunta ¿Cuáles son las metas, en materia de restitución?.

La doctora Martínez responde a la doctora Zuleta, básicamente lo que es el acompañamiento, es hacer un acompañamiento serio y fundamentado. ¿Qué es importante, senadora? Mire, se presentaron solicitudes ante los jueces que solamente tenían un papel sin ningún tipo de fundamento. Entonces, llegaba la persona a la entidad, decía, "Mire, yo soy víctima, quiero esto" Y con eso se radicaba la demanda. ¿Qué pasa con este tipo de demandas radicadas sin acervo probatorio? que básicamente lo que se hace es que se congestiona toda la rama judicial y los jueces tienen que llegar a hacer aquello que le corresponde a la unidad, que es todo este levantamiento de la parte administrativa. Como yo le comento, la unidad está organizada para que en la parte administrativa pueda hacer todo este levantamiento probatorio, que además le ayude a la víctima a sustentar su posición, acompañándola en todo momento y garantizándole realmente su derecho. ¿Qué pasa cuando se presenta una demanda sin acervo probatorio? que el juez tiene que hacer la función que le corresponde a la unidad, pero posiblemente ni siquiera se consiga que realmente se le restituya a la persona el predio o su derecho, porque en las en la evidencia de pronto la persona no tenía o no cumplía con las diferentes condiciones o cumplía, pero va a ser mucho más demorada la respuesta del juez porque el juez tuvo que hacer toda esta parte administrativa que le correspondía a la unidad. Entonces, la unidad a la que yo me refiero es este acompañamiento es una de sus funciones y sus obligaciones y tiene que hacerla desde el principio, de manera seria y de manera documentada en la forma en como está establecida en la Ley y como adecuadamente se tienen que presentar todo el material probatorio para que el juez pueda decir de manera objetiva.

Para escuchar las inquietudes de los senadores con relación a las preguntas formuladas a la directora de la unidad de restitución de tierras se puede consultar en la transmisión institucional del canal de youtube de la comisión o en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=s5Ycmy-CGE0&t=295s septiembre 16 de 2026

10. Doctor Iván Cancino, Ministro de Justicia y del Derecho

El Ministro de Justicia presenta su saludo a la mesa directiva y a los senadores de la Comisión primera. Nosotros tenemos que hacer un balance de lo que corresponde, por supuesto, al Ministerio de Justicia y acá está presente cada una también de las entidades que están vinculadas al mismo. Aquí en este momento me acompaña la señora directora de la USPEC y el señor director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. También hemos tenido que atender con toda responsabilidad la citación que se nos hiciera en la Comisión primera de la Cámara. En vista del tiempo y de la dinámica que he observado, si me lo permite, haré unos comentarios frente al presupuesto y obviamente las remisiones que se hicieron dónde está desagregado lo que se puede desagregar y lo otro a la espera también de planteamientos de planeación nacional y del plan de desarrollo.

Lo primero que debo hacer es un contexto presupuestal y ahí debo ser muy claro que en el anteproyecto para 2027 el ministerio identificó algunas necesidades cercanas a los 315 mil millones, exactamente 315,273 mil millones de pesos. Posteriormente, después de algunos análisis, algunas mesas con el Ministerio de Hacienda y otras entidades, el techo comunicado fue de 202,669 mil millones y finalmente el proyecto de ley con la enmienda que se radicó a finales de agosto fue de 179,765 mil millones de pesos, donde 124 mil millones fueron de funcionamiento y 55,707 millones de inversión. Esto equivale aproximadamente al 57% de lo solicitado inicialmente y este es el marco presupuestal. Sobre el cual el Ministerio está reorganizando y priorizando necesidades para el 2027.

Tenemos algunos principios genéricos que no voy a profundizar por el tiempo, pero que es necesario dejarlos como ejes, como principios rectores de la actividad que va a tener este ministerio. El concepto de responsabilidad fiscal, de priorizar antes que reclamar, de protección de la misionalidad. Obviamente tener claro que la austeridad no es gastar más o tener más dinero, sino gastar mejor, gastar donde es, gastar de acuerdo a las necesidades. Y por eso hay una política de reestructuración y de austeridad muy clara, obviamente de ser eficiente sin afectar eh la operación, una priorización de la inversión, un cumplimiento de metas, un seguimiento permanente y obviamente el mensaje de responsabilidad fiscal y responsabilidad misional al mismo tiempo.

Reconocemos, obviamente, que hay restricciones fiscales y acompañamos los esfuerzos de autoridad del gobierno y dentro de ese marco estamos tomando todas las decisiones para que cada peso disponible en el Ministerio de Justicia y sus entidades adscritas pues se concentre y se gaste donde tenga mayor impacto y resulte indispensable para cumplir las obligaciones del ministerio y prestar los servicios de justicia. cada uno de los apartes, como les venía diciendo, es absolutamente claro que los gastos de funcionamiento presentados en la ley de presupuesto son globales. Su desagregación por rubro se conoce definitivamente en la aprobación de muchos documentos administrativos, decreto de liquidación, lo que contenga el plan de desarrollo y para el caso de inversión, teniendo en cuenta que previamente fue asignada una cuota por el Departamento de Planeación, se puede hacer alguna desagregación que está, por supuesto, en el anexo que se

presentó, donde habla del presupuesto a las respuestas de la honorable comisión, tanto de Cámara como Senado.

¿Qué es importante decir para tener claro frente a los rubros? ¿Hay alguna confusión donde se piensa que este gobierno solo va a gastar en castigo, solo va a gastar en cárceles? y que no va a presentar ningunos proyectos o profundidades de inversión social. Yo quiero mandar ese mensaje de tranquilidad, porque como lo explicará también muy bien la señora directora de la USPEC, a la par de la construcción de cárceles y terminación de cinco proyectos que ya están adelantados, cinco que se tienen que hacer, pues obviamente que están las cárceles productivas, está eh todo el tema de meter a la empresa privada para poder generar productos y mantenimiento de las personas privadas de la libertad en las cárceles. Está todo el tema de apoyo a la ley de utilidad pública, fortalecer las comisarías de familia, fortalecer las casas de justicia. Ya hay algunos ejemplos y compromisos claros adquiridos que esperamos desarrollar también en el 2027, como son las casas de justicia fluviales, marítimas e itinerantes. Obviamente, también una inquietud que aquí le escuchaba ahorita al Senador Héctor Olimpo, pues un componente grande también de tecnología. Muchas de las falencias que se presentan en el Ministerio de Justicia como tal, pueden estar concentradas específicamente en mejoras de tecnología, de inteligencia artificial, de fortalecimiento de comunicación en las regiones.

Una de las partes más importantes es entender que la política criminal del Estado se le ha prestado siempre la atención de vida eso objeto de esta comisión. Seguramente nos veremos muchísimas veces para debatir de fondo eso, pero también tenemos que fortalecer el otro viceministerio y ahí es donde le daremos también el equilibrio a la balanza entre sistema penitenciario, penas, leyes de acogimiento y todos los proyectos que estamos pendientes de realizar y de acoger. Vuelvo y reitero, como las casas de justicia, comisarías de familia, capacitaciones, el tema de justicia étnica, enfoque de género, también será una prioridad que estaremos haciendo en el desarrollo del presupuesto.

La pregunta que muchos se pueden hacer es si el presupuesto para mí es suficiente. Pues yo creo que todo el mundo va a decir que no. El presupuesto jamás va a ser suficiente para subsanar muchas de las falencias del Estado que ha tenido históricamente y otras de los últimos años que están ahí presentes. Lo que les puedo decir es que confío plenamente en el estudio que hicimos con el Ministerio de Hacienda con planeación. Se hizo un estudio serio frente a las necesidades actuales y el dinero que se está pidiendo en el presupuesto para el Ministerio de Justicia, cumple con la misionalidad. No se va a afectar ninguna meta, no se va a afectar ninguna inversión importante. Podremos tener algún debate hoy en el futuro sobre si lo que nosotros priorizamos o nuestra priorizamos está de acuerdo, pero está de acuerdo con la política del presidente y con la política del Ministerio de Justicia.

Ustedes ahí en el informe tienen claramente los montos. Y adelantándome también a una pregunta que de pronto les puede hacer, hay una gran reestructuración que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia hay muchos gastos de personas, por ejemplo, que tienen contratos de prestación de servicio que están cumpliendo funciones misionales y eso hay que hacer una reestructuración para poder manejar eso mejor a futuro y que puede tener algún impacto fiscal. Y por eso es que ustedes también ven una diferencia entre el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión que también puede ser corregido con el paso del tiempo.

Otra inquietud que yo veía también en el cuestionario que me citaron y que yo considero eh bastante eh importante decir es que claro que hay medidas de racionalización y optimización del gasto. Dentro de esas medidas, obviamente, es reducir los contratos de prestación de servicios, la inquietud que tenía algún honorable senador o senadora que no puedo identificar ahora el nombre, se me fue frente al tema de la carrera al interior del ministerio. también privilegiar esa permanencia para que el ministerio sea una política de estado y no un paso de gobierno frente a su estructura de funcionamiento y misional y obviamente ser lo más efectivo en el gasto y en el recurso.

También nos preguntan, obviamente, que el tema de adquisición de bienes y de servicios y transferencias, pues es muy importante entender que en ese rubro el ministerio tiene unos compromisos. ¿Los compromisos que por Ley, constitución o jurisprudencia tenga el Estado colombiano en cabeza del Ministerio de Justicia en relación con los acuerdos de paz se van a cumplir? No es posible, ni está en mi cabeza incumplir algo que es una obligación legal y constitucional. Eso también se ha especulado mucho. Ahí está. Y también quiero mandar el mensaje de que en el Ministerio de Justicia todas las obligaciones que estén de carácter legal constitucional o por decisiones de la de tutela o de pronunciamientos de las Cortes también estarán dentro del presupuesto y obviamente en algunos temas de inversión y otros temas de funcionamiento. No se va a quitarle importancia a la Dirección de Justicia Formal o la Dirección de Justicia Transicional.

Es más, yo quiero que el legado de este Ministerio sea el fortalecimiento precisamente de mecanismos de solución de conflictos, casas de justicia, comisarías de familia, acceso y también no me corresponde a mí el gasto, pero creo que es importante también manifestar que en articulación con el Ministerio de Agricultura tenemos también previsto todo el desarrollo de la jurisdicción agraria dentro de lo que es el marco legal y obviamente la política pública. del nuevo gobierno. Yo con eso hago un planteamiento. Las respuestas están prestas en el cuestionario, está desagregado absolutamente todo. Y obviamente quedo muy atento, señor presidente y señores congresistas, a tratar de resolver las dudas o las observaciones que puedan tener frente a esta exposición, dejando claro que tema USPEC está la directora, tema Agencia del Estado está el director, el señor director del INPEC.

Interviene el Senador Héctor Olimpo Espinosa, Sorprende cuando uno analiza la situación de seguridad y convivencia del país, las demandas que tenemos en esta materia por parte de los ciudadanos y encuentra los niveles de impunidad que hay en Colombia como una de las causas más eficientes de nuestros problemas de seguridad y convivencia sin ser la única, sorprende ver cómo es tan exiguo el presupuesto del Ministerio de Justicia. El ministro, digamos, como muy aplicado y muy consecuente, habla de su plan de austeridad y habla del plan de hacer mucho más eficiente el ministerio y de acercar mucho más la justicia a la gente. Pero yo tengo una pregunta que trasciende las fronteras de su oficina. Ministro, ¿cómo evalúa usted, más que su oficina del ministerio, el sector justicia y si hay suficientes recursos para la demanda que tenemos en justicia, en el sistema penitenciario y en todos y en todas aquellas entidades, instituciones que hacen parte de su sector? Porque usted aquí en este debate está acompañado de sus entidades y está hablando de su entidad, pero usted es el responsable del sector en general. Hay unas demandas enormes en el sector penitenciario, hay unas demandas enormes en el sector de la agencia judicial y en los demás sectores que le competen a su cartera. Yo tengo esa preocupación. Si este país tiene el deber en el corto plazo

de reducir sus niveles de impunidad, mejorar la eficiencia y la eficacia de la justicia, que es uno de los problemas estructurales de Colombia, ¿el presupuesto del sector es suficiente para ello?

Responde el Ministro de Justicia. Gracias, Senador. Como le dije, yo creo que usted va a escuchar de cada uno de los miembros de las entidades establecer que el presupuesto no es suficiente. Siempre quisiera uno más, quisiera uno tener más para abarcar y alcanzar todas las metas, pero aquí nosotros tenemos que confiar en el análisis que hizo el sector Hacienda, tanto el ministro como planeación, como presupuesto. Y analizándolo, nosotros no fuimos permisivos, Nosotros no pusimos en riesgo la misionalidad de las instituciones. Luego le puedo responder tajantemente que, por supuesto que siempre se necesitaría más dinero, pero con lo que hay no se afecta la misionalidad en ninguna de las entidades del Estado. Jamás se pondría en riesgo por una afectación presupuestal o por un tema fiscal el funcionamiento del Estado y las metas claves del sector justicia. Usted lo va a escuchar en cada una de las personas, pero yo como responsable del sector le puedo garantizar que la misionalidad de ninguna de las entidades se ve afectado por este presupuesto que está cubierto. Obvio que quisiéramos más dinero, pero tenemos que ser responsables, escuchar y ajustarnos sin poner en riesgo ninguna parte misional de las entidades y del ministerio.

Interviene la Senadora Isabel Zuleta. Ministro, el día de ayer estuvimos escuchando con atención a la señora Fiscal, estuvimos escuchando con atención a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y yo le quiero decir, que quedé muy preocupada. Evidentemente hay una reducción en el presupuesto a la justicia, no necesariamente al Ministerio de Justicia, sino a todo el sector, que es nuestra preocupación. Y le quiero pedir también sus buenos oficios con el sector Hacienda, porque el sector justicia lo necesita. Aquí pudimos ver el desbalance que se está presentando. Yo quedé preocupada, señor Ministro, con la dificultad de que llegué la fiscalía a sectores en el Chocó que nunca han tenido presencia de la fiscalía. El déficit en investigadores judiciales realmente es una preocupación que quiero transmitirle de manera especial. Pero además, ministro, nosotros hemos venido aquí en el periodo pasado, se aprobó una ley para fortalecer a las buscadoras, al acompañamiento de buscadores y buscadoras, porque el tema de desaparición forzada, señor ministro, que le compete también a usted eh en la protección, se ha aumentado el riesgo para las mujeres buscadoras porque tenemos una situación crítica, señor Ministro, y no veo desagregado el sector del presupuesto, el rubro para el acompañamiento a las organizaciones buscadoras en el cumplimiento de una ley de la República que precisamente promueve eh a las organizaciones que buscan a personas dadas por desaparecidas. Yo estoy sumamente preocupada, señor Ministro, con los últimos datos en el municipio de jóvenes que han venido desapareciendo sobre todo entre los 15 y 25 años.

Resulta que el fenómeno de la desaparición forzada lo teníamos de manera general, pero no en el tema de jóvenes. Aquí en Bogotá hay más de 400 desaparecidos jóvenes de sectores populares y en Cartago ya llevamos más de 47 casos, por lo menos nueve de ellos menores de edad. Yo le quisiera preguntar, dentro de esas metas que usted tiene, ¿cómo se va a evidenciar el presupuesto en el apoyo y en el cumplimiento de esa ley de la República en materia de desaparición forzada? y pedirle también, señor Ministro, nos dé los datos en temas de política de drogas, específicamente. En el gobierno pasado se empezó una política de drogas al interior de los centros carcelarios porque se comprobó, señor Ministro, que la reincidencia tiene una alta relación.

Responde el Ministro de Justicia. Nosotros en este momento frente al presupuesto que usted ve, no hay desagregado, no lo va a encontrar, pero le quiero decir una cosa para que esté tranquilo y lo puedo decir en voz alta, porque es un compromiso. Estamos articulando eso en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí va a estar y ahí es donde nosotros lo estamos defendiendo como parte, digamos, de los gastos del Ministerio en el Plan nacional de desarrollo. Hay una política que se está desarrollando, que se está socializando y que con mucho gusto se la haré conocer para que usted también pueda tenerla de frente y de cara al país.

El otro tema que usted me estaba diciendo, obviamente que, frente al tema del dinero, de la rama, yo me he puesto esa camiseta. Yo creo que el ministro de Justicia y del derecho tiene que ser un articulador respetando la autonomía de los poderes. Yo me he sentado con el equipo del señor Ministro de Hacienda, he tratado de generar reuniones y se van a seguir generando reuniones tanto con los presidentes de las Cortes como la señora presidenta de la comisión de la rama ejecutiva, la directora nueva. Y por supuesto que yo he mandado el mensaje, créame, que el fortalecimiento de una política tiene que ser fortalecer a la justicia. Hay datos que no le puedo dar acá, pero yo sí he sido articulador, por ejemplo, de necesidades de igualar los investigadores de la fiscalía con los que presta, por ejemplo, la policía. Eso se trata de igualar, por ejemplo, sumas para ir verificando. Y hay unos postulados de inversión no desagregados en temas de tecnología, como no hay recursos de personal y eso es un diálogo que tendremos que tener aquí seguramente y que ayer se lo debieron poner de presente la señora fiscal que incluso ha presentado un plan muy serio, muy concreto, que yo lo recibí y lo transmití de la necesidad urgente para un plan rápido de acción para descongestionar la justicia de alrededor, puedo equivocarme por algunos, pero alrededor de 7 mil funcionarios donde ella lo explica perfectamente y que está ya socializándose con el Ministerio de Hacienda para entender las necesidades también del territorio, donde la justicia más tiene que entrar es en territorio. Hoy la administración de justicia entre rama judicial y fiscalía y ministerio cubre un porcentaje cada vez más alto, pero todavía no es suficiente. No tenemos acceso real completo en sitio a más del 65% de los municipios. toca irlo aumentando. Pero eso va a poder ver y se lo podré explicar detalladamente, también el interés con los municipios y departamentos de articular tecnología para las audiencias, pero también jueces itinerantes, jueces virtuales, casas de justicia itinerantes, porque una de las labores creo que de la política criminal del Estado también debe ser prevenir. ¿Y cómo se previene? El derecho penal sanciona y ya para qué si ya está el problema, yo necesito prevenir que no haya violencia de género, violencia intrafamiliar y eso es fortalecer casas de justicia, inspecciones de policía.

Frente al tema de droga, yo le puedo decir lo que es de parte del ministerio. La inversión de guerra contra las drogas depende, yo creo que sobre todo del Ministerio de Defensa. Pero nosotros en la dirección de política de drogas del viceministerio de política criminal, usted va a poder encontrar qué necesitamos o qué se tiene que hacer. Volver a activar convenios con entidades internacionales que también nos pueden dar los recursos. Por eso también hay que entender que yo tengo que salir a buscar recursos que no tengo en el presupuesto y para eso están la CAF, el BID, por ejemplo, para que la ONU vuelva a hacer la medición de cultivos ilícitos. Y a mí me corresponden dos temas importantes. Los temas importantes son tema cannabis licencias y el tema de sustancias controladas. Eso va a estar perfectamente atendido. Ahí está desagregado. Se tiene absolutamente claro también un desarrollo en el plan y nosotros no vamos a trabar nada de eso.

Hay también mucha duda. Lo que esté frente al manejo de las licencias de cannabis, yo encontré un sistema hackeado ahí en cannabis y en sustancias controladas que de quién es la responsabilidad. No es un debate que tengamos que dar, pero ya se solucionó, que es lo importante. Y ahí está también un compromiso. Hoy nos hemos sentado con varias empresas multinacionales, otras más, para ver cómo mejoramos en tecnología y ahí sí tratar de buscar también apoyo de bancas multilaterales o de entidades privadas que nos ayuden con transparencia a ver cómo se mejora el tema de tecnología. Si usted me pregunta, por ejemplo, por el Consejo de Política de Estupefacientes, ahí no hay gasto. Ahí lo que hay es una reunión de unos componentes que están por ley para mirar unas políticas y presentarlas. Y en el Consejo de Política Criminal, que ya pudo empezar a funcionar, porque ya eligieron ustedes sus representantes, ahí también se tiene que analizar ciertos proyectos con costo fiscal. Por eso usted tampoco va a encontrar dentro del desagregado pues el costo de los proyectos de ley, porque eso también corresponde un poco al Ministerio de Justicia, pero por supuesto que los temas que usted me plantea están en el tapete.

Pregunta el Senador Fabio Amín. Ministro, solo para consultarle. cuál era el valor del presupuesto de la vigencia 2026, cuánto crece a la vigencia 2027 proyectado y esa diferencia que nos hablaba de una primera proyección de 300 mil que luego se pudo trabajar alrededor de los 220, y que terminó cerca de los 170 y tantos miles de pesos ¿En qué se hubiera podido invertir ese dinero que hoy no está, pero que ha dejado usted completamente claro que con lo que le fue asignado le es suficiente para el cumplimiento misional y no pone en riesgo ninguna de las actividades de la responsabilidad del sector de justicia?

Responde el Ministro. En el 2026 se asignó por decreto 231,374,561.683 pesos entre funcionamiento e inversión. Como le decía, para el 2027 en el anteproyecto se hizo una petición de 315,273,162.422 pesos y llegó hasta los 135 mil millones aproximadamente. Aquí, obviamente, hay unos cuadros que también se le anexaron y que me remito a ellos, donde se describe tanto la afectación al total del presupuesto, cuánto se disminuye a cada uno, pero es absolutamente que casi todos los sectores tuvieron un recorte en la participación o modificación o en el alcance.

Hay un presupuesto de funcionamiento, hay un servicio a la deuda, hay un presupuesto de inversión 2027, un presupuesto para promoción, acceso a la justicia, para promoción de los métodos de resolución de conflictos, una justicia transicional, fortalecimiento de la política criminal, fortalecimiento y apoyo de la gestión institucional. Y usted va a encontrar en cada cuadro, digamos, la reducción que se hizo. Y tratamos de hacer, la reducción no donde menos interés tengamos, sino donde podemos solucionarlo de otra manera. Aquí no se refleja en el presupuesto, pero aprovecho mucho la pregunta. Hay muchos temas de capacitación que se tienen que hacer a las comunidades, al territorio, de hacerle conocer, por ejemplo, cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, qué hacen las comisarías de familia, etcétera. Eso se puede hacer utilizando, por ejemplo, las redes del Ministerio. Hoy las redes dan un alcance, entonces ahí puede haber una modificación que no va a afectar el servicio, la capacitación, pero ahí están esas circunstancias. Nosotros tuvimos un grave bajón, por ejemplo, en fortalecimiento de la gestión tecnológica con enfoque de investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel nacional, más o menos de 12 mil millones a 6,000. Pero no porque no sea interesante, sino porque podemos buscar aliados, porque dentro de la reestructuración del Estado hemos visto que hay personas que hacemos o instituciones que hacemos lo mismo dos veces. Entonces, le pongo un ejemplo. Estamos

articulando con la Fiscalía los CAF. Los CAF y las casas de justicia muchas veces pueden hacer lo mismo. Vamos a tratar de fusionar y de hacer más efectivos y tener más alcance y quién es el que puede distribuir sus recursos con algún tipo de alianza. Entonces, vuelvo y le repito, senador, no se afecta la institucionalidad ni la misionalidad.

Para escuchar las inquietudes de los senadores con relación a las preguntas formuladas al Ministro de Justicia se puede consultar en la transmisión institucional del canal de YouTube de la comisión o en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=s5Ycmy-CGE0&t=295s septiembre 16 de 2026

11. Doctor Arturo Adolfo Dajud, Viceministro de Asuntos Agropecuarios

El Viceministro de Asuntos Agropecuarios saludo al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior, así como a los integrantes de la Comisión y agradece el espacio brindado. El gobierno nacional, dada la crisis y la situación que encontró en el país, determinó un ajuste en el presupuesto general de la nación que fue presentado y en el caso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural nos sentimos conformes en cuanto al valor del presupuesto que nos fue asignado y en ese sentido nosotros para poder cumplir la misionalidad asignada hemos hecho un ejercicio de asignación y priorización de los recursos, sino con ello se ponga en riesgo la misionalidad de este ministerio tan importante para la producción de alimentos en el territorio nacional.

El presupuesto asignado por el Ministerio de Agricultura para la vigencia 2027 asciende a 831 mil millones de pesos, de los cuales 347 mil corresponden a inversión y a funcionamiento 483 mil millones. Dicho de esta manera, 483 mil daría la sensación que es mayor que el de inversión, pero nosotros por mandato de la ley debemos transferir 216 mil millones a Agrosavia. Agrosavia es el centro de investigación y de transferencia de tecnología que cuenta el sector agropecuario, que destina estos recursos para investigación a través de los centros que tiene dispersos en toda la geografía nacional. De igual manera tenemos asignados 162 mil millones de pesos para cultivos ilícitos, que básicamente es un programa que destina recursos en las zonas de complejidad de orden público para ayudar a los productores a cambiar sus sistemas productivos por cultivos obviamente lícitos. En ese sentido, 57 mil millones, es exactamente el gasto de funcionamiento que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene para atender sus necesidades de funcionamiento.

En el presupuesto de inversión, la mayor cantidad de recursos que nosotros destinamos lo pensamos para el sistema de financiamiento y riesgos agropecuarios. ¿Por qué el sistema de financiamiento y riesgos agropecuarios? Porque nuestra misionalidad dentro del sistema nacional de crédito público, recordemos que el sector agropecuario tiene su propio sistema, tiene una comisión nacional de crédito agropecuario, tiene un banco de segundo piso, tiene el sistema financiero que lo acompaña, siendo nuestra capacidad táctica más importante, el Banco Agrario de Colombia, cuyo foco es el pequeño productor. Nosotros acompañamos con recursos para subsidiar la tasa de interés. Recordemos que el sistema nacional de crédito público impone una

obligación al sistema financiero de hacer unas inversiones trimestrales a través lo que se llama los títulos de desarrollo agropecuario que generan unos créditos en unas condiciones muy favorables para el sistema. Tiene tres vehículos que se utilizan los recursos propios de los bancos, utiliza el redescuento y la cartera sustitutiva. Entonces, lo que se hace con este recurso que se dispone para financiamiento es financiar unos puntos adicionales de la tasa de interés de esos créditos que toman los productores y a través de otros recursos también ayudamos a subsidiar lo que se conoce como el ISA, que es el incentivo al seguro agropecuario. Y también hay otro vehículo que se conoce como el incentivo a la capitalización rural, en donde se disponen unos recursos y en donde el mayor grado de subsidio o de acompañamiento con recursos lo tiene el pequeño productor.

Entonces, nuestro recurso de inversión concentra dentro del recorte la mayor proporción de recursos destinados al sistema de financiamiento y dentro del sistema de financiamiento pues al pequeño productor. En cuanto al presupuesto de la de la vigencia 2026, señor presidente, llevamos una ejecución asignada de un 54% en lo que tiene que ver con los recursos destinados a inversión y un porcentaje del 93% en gastos de funcionamiento. Evidentemente dentro del recorte hay una disminución del recurso, pero nosotros propendemos es por optimizar el recurso que tenemos. En cuanto a las metas, que ha sido un tema tocado acá para el sector agropecuario, nosotros dependemos el cumplimiento de la visión de este gobierno atado al Plan Nacional Desarrollo porque las metas plurianuales que nosotros necesitamos ajustar un cúmulo de normas que nos permitan dentro del sistema de financiamiento poder optimizar los recursos, siendo el financiamiento, el CORE, el ejercicio fuerte de esta administración. Nos preguntaremos, señor presidente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento que se llama el Fondo Agropecuario de Garantías. Fondo Agropecuario de Garantías es un instrumento creado para amparar las operaciones de crédito, reconociendo que hay una brecha de mercado en donde la informalidad y la dificultad que se tiene con los títulos de propiedad, eso genera una limitación hacia el acceso al financiamiento agropecuario. Hace 40 años se creó el FAC, pero el FAC solamente ampara obligaciones dentro del sistema financiero. A contrario sensu, usted tiene el Fondo Nacional de Garantías que permite amparar obligaciones dentro del sistema financiero y por fuera del sistema financiero. Entonces, si nosotros queremos impactar poderosamente todos los sectores y esa Colombia que está profunda, necesitamos que el FAC ayude a que otras organizaciones que pueden estar vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o por la Superintendencia de Sociedades, dado esa nueva modalidad de financiamiento, también puedan tener el FAC como un instrumento que ampare ese tipo de obligaciones.

Nosotros también queremos, por ejemplo, que los recursos que se giran a través o por intermedio de Finagro no tengan que devolverse necesariamente a 31 de diciembre. Necesitamos un vehículo y eso es una discusión pues que tenemos al interior del ministerio. Cómo podemos hacer para que durante esa vigencia los saldos no ejecutados de los recursos o el rendimiento del portafolio permita que se siga destinando esos recursos al sistema de financiamiento y no haya un corte de los recursos a 31 de diciembre para tener que eh funcionar hacia adelante. Entonces, para

nosotros el Plan Nacional de Desarrollo nos fija el norte de todo eso lo que queremos hacer en materia de financiamiento porque nos da el marco, el horizonte para poder llegar por diferentes rutas, sobre todo a los pequeños productores en las regiones más apartadas del país, no solamente a través del Banco Agrario, la banca tradicional, las cooperativas, sino aquellos mecanismos novedosos que hoy todos los conocemos, pero que tenemos una dificultad para poder llegar de manera eficiente. Finalmente, nosotros también como los demás sectores estamos hemos reevaluado el número de contratistas que teníamos. Vamos a contar lo que con lo que históricamente este sector ha contado y se prescindirá pues a 31 de diciembre de un porcentaje de ellos. La mayoría de estos contratistas estaban por el rubro de inversión con cargo a funcionamiento. Teníamos 59 contratistas que equivalen en el 2026 a 5.700 millones de pesos. Y en cuanto a inversión tenemos actualmente 689 contratistas que equivalen a un presupuesto de 67,240 millones de pesos.

Pregunta el Senador Carlos Alberto Benavides. Nuevamente, escuchamos algo que para decirlo coloquialmente nos causa cierta impresión porque no sé si el adjetivo desordenado y demás que se utiliza tiene que ver con que en Colombia durante los últimos 4 años disminuyó la pobreza rural, directamente la vida de los campesinos y campesinas. Le voy a dar un dato, el de Nariño, por ejemplo, es histórico, nunca había disminuido después de que hace 30 años se le quitó la capacidad productiva a los campesinos de Nariño en siembra de trigo, de maíz, de frijol y prácticamente se potrerizó el mundo agrícola. Hoy el departamento volvió a ver cultivos diversos y eso pasó en el Huila. Se puede viajar, se puede contrastar las fotos y demás entre un año y otro. Se activó la vida campesina en el país, disminuyó la pobreza, disminuyó el desempleo, se entregaron 800 mil hectáreas, se generó una mayor capacidad de área sembrada. Los parafiscales, de los cuales poco se habla, porque como solo se habla de crédito, también tuvieron incentivos distintos, incluyendo lo que ocurrió con la Federación de Cafeteros y convirtiendo justamente al mundo de los cafés especiales en Colombia, que son producidos por pequeños y medianos productores sobre todo del Huila, Cauca y Nariño en una de las potencias económicas.

Pero no solo eso, el crecimiento de la agricultura en general en el producto interno bruto después de 30 años de neoliberalismo y tratados de libre comercio que acabaron o disminuyeron o erosionaron la vida campesina. Yo tengo varias preguntas en contraste a ello. La primera, obviamente, es ustedes cómo han pensado ser consecuentes con el artículo 64 de la Constitución, que reconoce como sujeto especial de derechos a los campesinos y campesinas en Colombia, no solo como productores, porque productor puede ser alguien que vive en Chapinero y por allá manda un poquito de su cuenta alguna finca para que le produzcan algo, solo son productores. Los campesinos habitan un territorio, crean cultura, tienen procesos organizativos. Esa integralidad es la que está reconocida en la Constitución, no sólo su relación productora, porque no habría agua, apreciado amigo, no habría paisajes, pero tampoco habría circulación de mercados sin ello. La segunda, entonces, ¿qué va a ocurrir con las territorialidades campesinas? las territorialidades campesinas que tienen que ver no solo con las zonas de reserva, sino con todas las territorialidades alrededor de lo agrícola, incluyendo las territorialidades

agroalimentarias acuáticas, que son muy importantes para las vidas pescadoras. ¿Qué pasa con el presupuesto allí? Otra que nos parece muy importante también, las asociatividades campesinas que por fin empezaron a tener una relación directa, no como subsidios, porque aquí lo que ocurría es que se le daba muchas crédito y capacidad de crédito a los grandes, grandes, grandes y a los otros, a los campesinos por ahí, porque además se los miraba mal. Por eso dicen que la palabra campesino no corresponde a subsidios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos millones de familias, 16 millones de personas, 6 millones de familias por lo menos tengan hoy capacidad, la capacidad productiva que se merecen y por lo tanto también se mantenga la entrega de tierras que esos campesinos despojados tienen el derecho de tenerla?

Responde el viceministro. Senador, mire, para nosotros todo el que está en el campo produce, sea pequeño, mediano o grande. Si usted produce papa, es un productor agrícola. Si usted produce yuca, es un productor,dijéramos que produce yuca y uno lo puede englobar en los conceptos desde el punto de vista técnico. La Constitución perfectamente está clarísima, pero para nosotros cuando interpretamos al campesino lo miramos en términos de pequeño productor. La principal política nuestra es financiamiento del campo colombiano y como bien le dije ahora, es una mezcla de instrumentos que tenemos que lograr desde sobre todo desde mi viceministerio, que es el Ministerio de la Producción, en donde nosotros articulamos cómo logramos que ese pequeño productor o si usted gusta campesino que está disperso por toda la geografía nacional puede tener acceso al recurso de crédito que él necesita, no solamente para su actividad productiva, sino no para sacar adelante a su familia y a su entorno. Segundo, le mencioné el Fondo Agropecuario de Garantías que prácticamente está pensado casi que exclusivamente, pero que tiene una amplitud para el pequeño productor. Hoy tenemos algún tipo de limitaciones. Nosotros estamos pensando que no solamente la banca tradicional es la que debe llegar. El sistema cooperativo que en departamentos como Nariño, como Cauca es muy fuerte, es muy poderoso y tenemos que buscar la manera de irrigar muchos recursos a través de ellos. En estos 4 años el sistema cooperativo a través del sistema de crédito no fue una prioridad. Nosotros sí queremos que sea una prioridad y que llegue, el campesino como denominación sociocultural y constitucional dijéramos en torno a él se congrega todo el estado en lo que responde en lo que corresponde al Ministerio de Agricultura, recursos para asociatividad y acordémonos que el Ministerio finalmente lo que hace es política pública. Los brazos ejecutores que nosotros tenemos en la alusión que usted hizo en materia de tierras es la Agencia Nacional de Tierra para procesos de formalización, para procesos de reforma agraria y todos los procesos asociados, dijéramos, a todos los bienes de la nación que tienen que ser recuperados en su momento y en toda y en toda la debida diligencia que se tiene que tener en materia, dijéramos de propiedad de la tierra en Colombia. Aquí está la directora de la Agencia Nacional de Tierra. Yo le voy a pedir a ella que, de manera mucho más profunda, estimado Senador, haga ese trabajo. El departamento de Nariño es un departamento que siembra papa, es un departamento muy importante de pequeña agricultura. Entonces, lo que nosotros queremos, por eso he focalizado mi intervención en

financiamiento agropecuario, porque entre otras cosas es la forma más eficiente, transparente de asignar un recurso del gobierno.

No hay un sistema más transparente que ese, porque además el gobierno utiliza toda la capacidad del sistema financiero sin pagar un peso para poder llegarle a esa población. Así haya muchos productores de estos 50 millones de colombianos que quizás yo no conozco, hay una preocupación permanente del gobierno nacional encabezado por el presidente de la República, del ministro y en mi caso como responsable de la política de crédito y riesgos agropecuarios. También hablé del seguro agropecuario, ¿por qué es fundamental? Porque ante la eventualidad que tenemos del cambio climático, que no es otra cosa que una acentuación de los periodos de lluvia o sequía que tenemos nosotros, es una salvaguarda que tenemos que llegar, que se llegue a todos los cultivos. ¿Qué estamos pensando nosotros? trabajar con las asociaciones, trabajar con los gremios para poder amparar zonas homogéneas con seguros para que cualquier eventualidad que sabemos que va a pasar, el productor nuestro, en este caso el pequeño, el más débil, el más indefenso, el que tiene más dificultades, tenga desde el gobierno nacional esa forma de llegar. Y simplemente para decirle que en estos 4 años que antecedieron, no fue el pequeño productor el más beneficiado por el sistema nacional de crédito. No es una crítica. Lo que queremos es construir y aprender de la tradición en materia de financiamiento y cómo hacia adelante nosotros podemos ayudar y llegar a esas poblaciones que están hoy por fuera del sistema, que son más de 2,500,000 personas que están por fuera del sistema de acuerdo a los datos que se tienen en el ministerio. Y el sistema nacional de Crédito es una herramienta eficiente, sin desconocer la política pública en formalidad, en reforma agraria, en bienes públicos rurales, en política de mujer rural, que está a cargo del señor viceministro José Leonida Tobón, pero que hoy dado la convocatoria que tenemos puntualmente para un tema de presupuesto atado a un temas de los que se han logrado tocar acá, pues queremos llegar a esa población que sabemos, que sensible que en el gobierno anterior fue una preocupación, pero que nosotros queremos ir mucho más allá de una manera más asertiva, siendo el financiamiento en el caso del Ministerio De Agricultura, donde vamos a concentrar los recursos que tenemos disponibles para esta vigencia o para el cuatrienio del doctor Abelardo de la Espriella.

Interviene la Senadora Zuleta. Señor Viceministro, yo quiero preguntarle por una preocupación que me ha asistido es la destinación de recursos a las auditorías. La función que tiene el Ministerio de Agricultura es hacer auditorías a los fondos de fomento, de donde sale un recurso muy importante para el sector agrícola. los distintos fondos. A mí me ha preocupado es porque si bien aquí analizamos el presupuesto de manera general, hay otros presupuestos derivados de ese recaudo que realizan los fondos, pero ese presupuesto casi nunca aparece contemplado aquí porque no se le hace un seguimiento directo. Senadores, lo que hace el ministerio es o lo que debería hacer son auditorías al funcionamiento de esos fondos. Y le quiero preguntar específicamente, si ustedes tienen contemplado en un estado eficiente, lo que debe suceder es que se hagan esas auditorías y si hay contempladas esa posibilidad de que por fin sepamos cuánto es el recaudo de cada uno de los fondos en este país, cómo se administran, cómo se les entregan

a los agricultores, cómo se le entrega a nuestra población campesina. Lo otro, Viceministro, es que en el pasado gobierno se aprobó después de un proceso muy largo en este país, la política pública de agroecología de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Apenas se alcanzó a aprobar la política pública y le tocaría a este gobierno, porque debemos ser estado y no gobiernos, que cada uno defina esas situaciones. Para que no se pierda ese esfuerzo, le tocaría a este nuevo gobierno aplicar esa política pública. Y quiero preguntarle de manera específica si hay un rubro para la aplicabilidad de esa política pública y cómo se va a adelantar. Lo otro que fue un éxito en el campo, señor Viceministro, fue la compra de excedentes de producción, porque hay que proteger a los campesinos. Esa compra de excedentes de producción que después se le entregó a población empobrecida a través del DPS en las ciudades del país. Quiero saber si ustedes van a continuar con esa política. Esa compra de excedentes de producción fue muy exitosa, sobre todo de papa, de leche, de huevos para sostener ese precio que necesitan los productores agrarios y creo que fue una política muy bien valorada en el campo colombiano. Finalmente, señor Viceministro, el tema de la adecuación de tierras. Nosotros estamos enfrentando procesos de certificación de suelos, de urbanización de suelos productivos. No ha habido, el Estado colombiano no ha tenido una política clara para enfrentar esos fenómenos, pero más allá de eso, se perdió la posibilidad de adecuación de tierras, de llevar distritos de riego a esas tierras que se están quedando sin aguas en el país para la producción agrícola. Y quiero preguntarle de manera específica porque eso es un volumen de recursos muy alto para poder hacer adecuación de tierra si específicamente tiene ese rubro en el presupuesto.

Responde el Viceministro. Los fondos parafiscales para los colombianos que nos escuchan son recursos son recursos del sector o de ciertos sectores de la economía y el sector agrario, en donde se cobra un porcentaje y ese recurso se reinvierte en ese mismo sector. En concreto, ese recurso no ingresa al presupuesto general de la nación. Hace parte, dijéramos, del esquema. Actualmente tenemos 12 fondos de fomento y cuatro fondos de estabilización de precios en el área agrícola y tenemos tres en el área pecuaria y uno de estabilización que es básicamente el de leche y tenemos el de palma y tenemos el de café. El Ministerio ejerce el control y la supervisión, pero en particular el señor Ministro Indalecio Dangón, estamos en el proceso de generar una auditoría especial en todos los fondos. Queremos saber exactamente cómo se han venido ejecutando los recursos a lo largo de los últimos 10 años aproximadamente, porque tenemos que tener claridad si se ha logrado el efecto para los que fueron creados, para los tópicos y por a veces entran y desaparecen, por ejemplo, campañas al consumo que en ciertos sectores son muy exitosas cuando las tenemos. Por ejemplo, panela, un sector de pequeña agricultura, pero que cada vez que sacamos esas campañas de fomento se reactiva el consumo, así pasa en leche y así pasa en arroz.

Entonces, hay una seria preocupación, no porque desconfiemos, sino porque necesitamos tener muy claro cómo están transitando, por un lado, los fondos de fomento y por otro lado, los fondos de estabilización y simplemente para hacer alusión, por ejemplo, el Fondo Nacional del ganado

cuyo destino principal de recursos es la campaña contra la fiebre aftosa. Hoy sabemos que Colombia es libre de vacunación gracias al esfuerzo de los recursos primero de política pública, de inspección, vigilancia y control del ICA y a la campaña que viene haciendo Fedegan a través de los años que permite tener un acto libre de aftosa y que eso nos habilita para poder exportar ganado en pie o en cortes. Y en ese sentido pues es lo que nos permite hoy que la ganadería colombiana dijéramos esté en el nivel que se encuentra. Entonces, primero consideración, estamos en eso. También recordar, senadora, que llevamos 30 días, 35 días y entre terremoto, incendios en el Tolima, inundación en el Casanare, inundaciones que tenemos en el Meta y Fenómeno del Niño, dijéramos ha sido un inicio difícil, pero estamos en el proceso de organizar la casa y estamos también como gobierno en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo donde se están dando los primeros pasos.

Usted tocó el tema adecuación de tierra. Eso en estricto sentido es competencia de la Agencia de Desarrollo Rural. Nosotros no ejecutamos política en materia de adecuación de tierra, que realmente es un concepto amplio porque incluye mejoramiento de suelos, incluye distrito de riego e incluye obras de drenaje donde se requiere. Pero en el caso de distritos de riego tenemos una dificultad que se ha encontrado el presidente y es el estado de deterioro que tenemos en los distritos de riego que ya se tienen en Colombia. Entonces, la prioridad dentro del presupuesto que ha sido asignado del presidente la de la Agencia de Desarrollo Rural es rehabilitar esos distritos de riego en donde ya están para que esas áreas que hoy a pesar de estar el distrito no se irrigan de manera homogénea. Pero eso en estricto sentido y si quiere grado de detalle, honorable senadora, la ADR puede absorber de manera muy profunda su inquietud. En cuanto a las compras y de los excedentes de producción agropecuaria, nosotros somos más amigos de hacer un trabajo con los compradores a nivel nacional para tratar de absorber los excedentes de producción. El Ministro está desarrollando una estrategia con todas las cadenas de grandes superficies, los compradores para hacer un esfuerzo, por un lado, y por otro lado tratar de organizar la producción nacional. Y le cito un caso que nos agobia a todos los gobiernos sin excepción alguna. Un Ministerio de Agricultura, un Ministro de Agricultura tiene dos paros casi garantizados al año, senador, en el mes de abril y mayo, porque venimos de un periodo de sequía, aumentan las lluvias, emergen los pastos y aumenta la producción láctea y tenemos una un aumento desbordado de la oferta y la demanda la tenemos a un nivel de contracción porque viene con unos inventarios altos. Y en el mes de agosto y septiembre, que es la gran cosecha nacional, que es Casanare, Meta y el Tolima, que aglutina más del 70% la producción, es un volumen tal de producción que genera un estrés en los precios. Entonces, lo que ha planteado el señor ministro de agricultura es cómo logramos entre compradores y productores estimar las áreas que deberíamos sembrar para evitar ese choque de precios por un lado y que esa producción pueda ser absorbida por en este caso la industria del arroz, pero así no podríamos trasladar a otros sectores.

Otro de los aspectos que estamos tratando en este proceso de 35 días es cómo logramos que, en los distritos de riego, en donde habitualmente se siembra arroz, arroz, arroz, que no contribuye con la productividad, que aumenta los costos de producción, podemos rotar con otro cultivo.

Cuando uno tiene agua y uno tiene buena tierra, lo que uno debería es rotarla por varios efectos. Primero, rompe el ciclo de plagas, usted hace arroz y después maíz. El maíz es uno de los productos más emblemáticos que tenemos en nuestro país. Usted rompe el ciclo, rompe el ciclo de plagas, disminuye los costos de producción porque tiene que aplicar menos defensivos al cultivo. Somos menos contaminantes y hay efectos probados que cuando usted rota con otro cultivo, puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser soya, puede ser algodón, puede ser sorgo, hay un aumento de productividad. Entonces, si nosotros logramos balancear las áreas, es un proceso difícil, por supuesto, no le voy a decir que esto es fácil. Pero tenemos que lograr ese equilibrio que nos permita trabajar porque no hay presupuesto, senadora, no hay presupuesto que alcance. Yo entiendo que el cuatrienio anterior se hizo un esfuerzo importante, eso es cierto, pero no alcanza el presupuesto para tratar de absorber todo lo que nuestros productores. Y ¿por qué le digo lo del Casanare? Porque cuando se siente que los precios van a estar buenos, porque hay una curva natural que cuando tenemos este estrés de precios, hay unos productores que salen y automáticamente el que está aumenta el área. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el sector arrocero? entrando en un diálogo con ellos, porque si no vamos a poder ayudar. Y tenemos hoy una crisis sistémica en todo el sistema. No hay un sector, presidente, que esté pasando un buen momento. Nadie podría estimar que un dólar podría estar en 3,000 pesos. Entonces tenemos sectores muy golpeados por el tipo de cambio, juiciosos, exportadores de todos los tipos de productores, pero hoy tenemos serias dificultades y por eso tenemos que optimizar el recurso. dentro de lo que nosotros recibimos, estamos evaluando las políticas que están sin sesgo, sin apasionamiento. Pero claramente este gobierno respetada senadora, tiene una nueva visión del campo en la que básicamente se amplía el espectro en donde hay política pública para el pequeño y mediano, para el pequeño y grande y hay una concentración de esfuerzo, de política y de recursos en el pequeño productor, visto desde el punto de vista técnico. No quiero ser peyorativo. Entiendo la definición constitucional, entiendo la dimensión sociocultural, pero dentro de mi función tengo que verlo en términos técnicos. No quiero que piense que es una expresión que trata con desdén, no, por el contrario, esa es la base productora que este país necesita y tenemos que seguir apoyando.

Pregunta el Senador Iván Cepeda. Viceministro, tenemos, según lo indican los análisis, un paso de una inversión de 4 billones en 2026 a 2.8 billones para 2027 en el sector, y eso corresponde a un recorte en todas las entidades fundamentales del sector, en la Agencia Nacional de Tierras, en la Agencia de Desarrollo Rural, ICA, etcétera. Yo quisiera que usted nos diera una visión sobre el impacto que tendrá esa reducción, en una economía que venía presentando, sin lugar a dudas, resultados muy importantes. Primer asunto. Y segundo, ya que usted menciona una nueva visión sobre el campo, bueno, en la que nosotros tenemos sobre el país, el concepto de reforma agraria o reforma rural integral ocupa un lugar central. Yo quisiera saber, porque esto obviamente le da forma a toda la política del sector, si esa es la concepción que ustedes van a seguir desarrollando o de no ser así, ¿cuál es la visión sobre, digamos, la reforma agraria que se ha intentado hacer por años en Colombia?

Responde el Viceministro Disculpe. Senador, usted sabe que actualmente el país tiene un grave déficit fiscal. Podemos discutir que no sería el caso del Ministerio de Agricultura. El Ministro de Hacienda y Crédito Público ha tenido las intervenciones que en el marco del primer escenario de la discusión del monto del presupuesto, creo que está patente. Lo que nos corresponde es asignar eficientemente el recurso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Maximizar el recurso, lograr eficiencias y trazarnos la meta. Todo el sector experimentó un recorte. todo el gobierno y usted lo sabe mejor que nadie. Pero cuando usted ve el presupuesto del Ministerio de Agricultura, si compara el cuatrienio anterior y este cuatrienio, el financiamiento es el que lleva la mayor proporción del presupuesto.

Puede revisarlo. Es decir, comparativamente se invierte un poco menos, pero es la prioridad. El gobierno anterior priorizó recursos en el Ministerio de Agricultura. en inversión en financiamiento. Nosotros vamos a priorizar recursos de inversión en financiamiento, que equivale al 50% del total de recursos de inversión que tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2027. ¿Y qué tenemos que hacer? asignar los recursos de manera eficiente y tratar de impactar el mayor número de productores que nosotros podamos dentro de la política en donde el pequeño productor sigue siendo la sigue siendo la preocupación, pero dentro de nuestra visión todos los productores tienen acceso al sistema, todas las cadenas productivas tienen acceso al sistema. Política pública para mediano y grande, política pública y recursos para el pequeño productor. Y en cuanto a la reforma agraria, es claro que el presidente de la República ha dicho, "Colombia es un país de propietarios y uno de los vehículos es la reforma agraria, que usted sabe que se refunde más allá de 1936 y que ha venido teniendo altas y bajas. Podemos denominar esas altas y bajas, estimado senador, como todo aquel que quiera analizarlo lo pueda ver.

Pero la reforma agraria, la formalización de la propiedad y sobre todo se va a hacer un esfuerzo muy grande en formalización de la propiedad, muy grande, porque muchos de nuestros productores tienen la tradición en una hojita, muchos de nuestros productores no tienen el recurso para hacer el trámite y muchos lo que nosotros queremos hacer es avanzar aceleradamente, que quizás es un proceso mucho más rápido y expedito para tener un país de propietarios. El señor presidente de la República lo ha dicho y nosotros vamos a honrar ese pensamiento del señor presidente y esa es la política desde el punto de vista del Ministerio. Aquí eso va a tener una prioridad, pero usted sabrá que nosotros llegamos en un momento. La Agencia Nacional de Tierra ha presentado observaciones. El ministro de Agricultura lo ha dicho en la forma cómo se hizo la reforma, si se entregaron los recursos, si no se entregaron el recurso, eso ya es una está por todos los medios de comunicación, no me voy a detener ahí, pero en términos prácticos Colombia es un país de propietarios rurales y eso lo vamos a hacer.

Pregunta el Senador Héctor Olimpo Espinosa. Viceministro, gracias por las explicaciones que nos ha dado hasta ahora, me parece que sus respuestas han sido muy solventes. Tengo dos inquietudes estructurales que tienen que ver con lo presupuestal y tengo una inquietud coyuntural que quiero manifestarle. Arranquemos con lo estructural.

Yo siempre he tenido inquietudes con las ejecuciones presupuestales en el sector agricultura porque el principio de anualidad presupuestal no se compadece con la estacionalidad del sector. Entonces, por ejemplo, hay que adecuar las tierras. Abre presupuesto en enero, mientras hacen los decretos. Se contrata la adecuación de tierra. Ya ha pasado el verano, se metieron las lluvias. Entonces, no se puso a hacer la adecuación de tierras. Digamos, el principio de anualidad presupuestal genera una inflexibilidad que genera unos traumatismos para la ejecución del presupuesto de agricultura en casi todos los niveles. No sé si se si se ha pensado en algo novedoso, en alguna excepción, en alguna reforma, en algún artículo que se pueda incluir en el presupuesto, en plan de desarrollo o una reforma del Estatuto Orgánico de Presupuesto que nos permita desde el sector agricultura tener unas flexibilidades para que las el principio de anualidad presupuestal haga que la política y la inversión sea mucho más eficaz, eficiente y oportuna, porque muchas veces llegan los proyectos cuando el clima no es el adecuado, entonces se pasa la vigencia, los proyectos quedan sin ejecutarse o lo peor, se ejecuta todo al final como corriendo para no tener que regresar plata al fisco y entonces los programas no tienen el nivel de maduración que requieren ni en su preparación ni en su ejecución. Entonces, primera pregunta. Segunda, hay unos fondos que hacen parte que hacen parte del sector que están por fuera de presupuesto por una ficción jurídica. Y yo creo que eso afecta la transparencia no solamente del sector agricultura, sino en varios de los sectores del presupuesto, porque no entiendo qué tiene que ver la presupuestación con la forma de ejecución y de recaudo. Al final son recursos de inversión del sector. Se termina presentando un sub registro presupuestal aparentando una precariedad muchas veces lo que se persigue es que esos fondos extra presupuestales no se rijan por ley 80. Entonces, ¿es un tecnicismo o es opacidad? Hago esta reflexión para el sector agricultura, pero también para los otros sectores del presupuesto. ¿Por qué los fondos no se presupuestan? 50 billones de fondos por fuera de presupuesto, incluidos los fondos de agricultura, por una ficción jurídica, por un tecnicismo o por una costumbre del sector de hacienda pública en Colombia. Creo que eso afecta el control, afecta la transparencia y nos pone a pensar que tenemos más precariedad de inversión en el sector que realmente tenemos. Y el efecto psicológico, digamos, tiene un impacto en todo, en las decisiones, en las formas como nos evalúan. Para terminar, quiero decirle, señor Viceministro, el fenómeno del niño ya arrancó hace dos meses. Los tres meses más duros vienen ahora, octubre, noviembre y diciembre. Las consecuencias en el sector productivo, principalmente en región Caribe, Pacífico y Andina, serán demoledoras en el costo de los alimentos, en el abastecimiento, en el agua, en la salud pública y distinto a los temblores o a los terremotos, este riesgo sí se puede predecir y nos podemos anticipar a sus efectos, no para eliminarlos, pero sí para mitigarlos. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que se materialice el problema para salir a atender este sector? Es una urgencia. Yo quisiera escuchar un poco más, señor Viceministro, sobre lo que ustedes tienen ustedes pensado para el presupuesto 2027 en esta materia y si bien no es objeto de esta discusión, si nos interesa saber qué tienen pensado en este último trimestre para el tema de fenómeno del niño.

Responde el Viceministro, Senador Olimpo, Senador, en concreto, se lo voy a poner desde el tema del financiamiento, que es un poco más crítico. Usted sabe que, en el Caribe colombiano, pero en casi todas las zonas, nosotros tenemos lo que se denomina los cultivos cercanos. Los cultivos secanos no es otra cosa que nuestros productores siembran con el ciclo de lluvias y eso más o menos históricamente es después de Semana Santa, finales de marzo, finales de abril. Si yo soy un productor, yo tengo que tener la semilla, el fertilizante, los defensivos. Póngalo usted 30 días antes. Para yo tenerlo 30 días antes, estamos hablando del mes de febrero, debería presentar mi proyecto de crédito al banco por lo menos 2 meses y medios antes o tres meses antes, es decir, en diciembre.

Ya en diciembre, por lo general, el sistema funciona todo el año, pero los recursos de incentivo, que son los más favorables, sobre todo al pequeño productor, en el mes de diciembre se agotan. ¿Cuándo se abre nuevamente el sistema? por todos estos temas presupuestales a partir, si nos va bien, febrero, pero ya en febrero voy tarde. El Ministro lo ha dicho en una infinidad de veces, el sistema de financiamiento no se compadece con el ciclo productivo y estamos hablando de cultivos de ciclo corto, cultivos de 4 meses, entiéndase maíz, soya, en fin, todos nuestros cultivos que se dan en todas las papas, los que se dan en todos nuestros pisos térmicos. Por eso es que Ministro estamos repensando dentro del sistema qué tenemos que hacer para lo que usted dice, cómo logramos soslayar la anualidad dentro de un marco de articulación del presupuesto general de la nación. Porque lo que no puede pasar es que el recurso, aun teniéndolo, hay que devolverlo al Ministerio de Hacienda, como usted lo recuerda, porque hay que liquidar el presupuesto. En el sistema en el sistema siempre queda algo de recurso, o por el rendimiento del portafolio o por los saldos que quedan de los créditos, siempre queda algo, pero ese algo nos permitiría que el productor pudiera con tranquilidad acceder a esos recursos de bajo costo. Acordémonos que el sistema naturalmente está aquí, financiero normal, el sistema agropecuario está aquí, pero el incentivo lo que hace es que sean mucho más favorables recursos. Esa preocupación la tenemos, senador. Esa preocupación la tenemos y le planteo uno de los escenarios más críticos. Yo me llevo esta preocupación para transmitirla al ministro a ver si dentro de ese diálogo de ministros esto puede ser atendido dentro de las dificultades que tenemos hoy, del recaudo que tenemos y del presupuesto hacia delante. Fenómeno del niño. Estoy de acuerdo con usted. Casi que el fenómeno del niño es el mejor momento si uno lo mirara para producir alimentos. ¿Por qué? Porque uno para producir alimentos requiere dos cosas, senador. Agua y luz solar. Esa es la mezcla que le permite a uno maximizar hacia delante la producción agrícola. Pero, ¿qué nos pasa? Que nosotros no nos preparamos para estos periodos acentuados.

Entonces, en la ganadería del departamento de Sucre, ¿qué se hace? Se produce el concepto que usted conoce muy bien de la trashumancia. Es mover los ganados de las zonas secas dijéramos y se mueve a las zonas bajas del departamento que genera pérdidas ganaderas, menor producción de leche, menor producción de carga. Pero perfectamente lo que se quiere aquí es cómo nosotros logramos que el productor tenga y pueda producir alimento en el caso de la ganadería. Y ahí surgen dos cosas. Un tema de fondo que el ministro lo dice recurrentemente es lo que se llama el

combo del agua para que cada productor ganadero y para eso se disponen recursos pueda hacer su pozo profundo con la bomba sumergible, el panel solar y que pueda tener una hectárea o media hectárea o una parte del área con alimento para que pueda funcionar los 12 meses del año. Esa es una estrategia que se está articulando con los secretarios de agricultura y con las asociaciones de ganaderos en este caso particular, pero en el caso del pequeño productor, funciona también. Recordemos que la mayoría de nuestros pequeños productores son de una hectárea o de menos de una hectárea. Ellos también pueden acceder a ese recurso que estamos pensando con vocación de estos 4 años. Ahora, en cuanto a la contingencia del fenómeno del niño, hay tres estrategias, senador. La primera es Agrosavia tiene en todo el país fincas con riego y en donde se puede producir pasto. Ya lo estamos haciendo. Ya se iniciaron con tres centros de Agrosavia. Motilonia en el municipio de Codazzi Cesar, Turipaná municipio de Cereté, Córdoba y el predio Caribian en el departamento del Magdalena y también tenemos Tanaima en el departamento del Tolima. ¿Qué es lo que se busca? Dispusimos unos recursos para generar durante los próximos meses alimento de manera permanente para que le llegue acceso o tengan acceso los pequeños productores. Segundo, los distritos de riego. Los distritos de riego que están dispersos en muchos de nuestros departamentos. Ayer sostuvimos una reunión con fe de riego y el planteamiento del ministro es, ustedes nos tienen que ayudar a rotar y ayúdenos a producir alimento en olaje, pacto de corte para poder hacer todo lo que generemos nosotros, pero de manera permanente durante todo el año. Y tercero, venimos también haciendo una estrategia con la Secretaría de Agricultura de varios departamentos, entre ellos les cito dos.

Departamento de Sucre, un predio que fue entregado en San Marcos, en donde tienen riego, en donde tienen pasto y nosotros vamos a disponer unos recursos para que esos pequeños productores que están ahí produzcan y se les pueda comprar ese pasto y se le pueda llevar a otros productores del departamento de Sucre. Esto fue propuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento y lo estamos trabajando con la señora gobernadora Lucy García. También estamos haciendo este ejercicio con el departamento del Atlántico, con la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde están los distritos de riegos en el sur. Ellos tienen unos predios y nosotros vamos a aportar un recurso para que produzcan con las capacidades de ellos durante todos los meses alimento. En concreto, hay tres estrategias de coyuntura, pero que miran hacia delante y hay una en donde vamos a colocar unos recursos de ICR para que el pequeño productor tenga un reconocimiento de un 30% sobre el valor de proyecto para que pueda acceder a ese mecanismo. Ya cada quien lo va a determinar, senador como quiera, porque puede que solamente requiere la bomba sumergible o puede que requiera todo el complemento y también vamos a incluir a los medianos productores.

12. Ministro del Interior, Doctor Rodrigo Lara Restrepo

Saluda al presidente de la Comisión, la mesa directiva, a los senadores, al presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Juan Felipe Lemus, al Dr. Calderón España, director de la Agencia de

Defensa Jurídica de la Nación, al señor viceministro Gechem aquí presente y a todos los funcionarios y asistentes a esta importantísima sesión de información y de presentación del presupuesto de diferentes entidades. Miren, yo primero quiero expresarles mi inmensa satisfacción de estar aquí reunido con ustedes. Yo le tengo un aprecio muy especial a esta célula de la cual fui miembro en el pasado y considero que esta presentación de hoy no es un rito, no es una formalidad, sino un acto de profundo calado y de gran significado democrático. Esta es la sesión. a la que asisten los ministros de Estado en ejercicio del control político que le corresponde al Congreso de la República, los funcionarios de las principales entidades para presentarles el presupuesto del año entrante, lo que pretendemos hacer en ejercicio de la misión que no ha sido encomendada y naturalmente el espacio en donde nosotros informamos para luego recibir la aprobación o la improbación por parte del Congreso de la República lo que va a hacer ese presupuesto.

Es un acto hoy de profundo significado democrático y al mismo tiempo creo que son de esos eventos en donde la discusión debe ser profunda y debe intentar congregar a todos los sectores políticos. Yo ayer tuve, por ejemplo, en la Comisión de Paz un debate álgido sobre la política de paz total. Hoy vengo aquí a presentar un proyecto de presupuesto, no sin básicamente expresarles también muchos elementos de tipo político, pero expresarles básicamente lo que es una realidad de lo que se quiere hacer y lo que vamos a hacer el año entrante.

Básicamente, pues nosotros estamos presentando un presupuesto que, como les mencionaba y ya saben, lo primero que se necesita para poder solucionar el profundo problema fiscal que tiene Colombia, pues es la verdad, es la claridad en las cuentas, es asumir sin contabilidades ocultas, sin vigencias futuras. sin contabilizar que el peso de la deuda este año es de 150 billones de pesos y que necesitamos prácticamente lo mismo para poder financiar un presupuesto de 634 billones de pesos. Es una realidad fiscal que nosotros tenemos que asumir, aceptar y como nación, independientemente nuestras diferencias ideológicas, que yo siempre celebro en el debate democrático, pues tenemos que solucionar como nación porque es la flotabilidad del barco en el que estamos lo que está lo que está en juego. Como ustedes saben, nosotros venimos arrastrando un problema de déficit que se ha venido agudizando desde 2015 en adelante.

Colombia tuvo una etapa de crecimiento extraordinario entre 2002 y 2015, producto básicamente de un super ciclo de materias primas. En la historia, en los últimos 150 años, hemos tenido cuatro super ciclos de materias primas. el de la transición entre la primera y la segunda revolución industrial, el que siguió la primera guerra mundial en la reconstrucción y el que, y el que siguió luego a la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción particularmente de Europa y del sur y de Asia. Y el cuarto super ciclo de materias primas, porque ustedes saben que hay ciclos, los ciclos pueden durar dos o tres años, un super ciclo dura más de 10 años, pues tuvo lugar entre 2002 y 2015. Abarcó a los gobiernos de Álvaro Uribe y el primer gobierno de Juan Manuel Santos, que fue producto básicamente del maravilloso crecimiento que tuvo la China en esa etapa, el despegar la reapertura de la economía china. Y Colombia creció a tasas o con tasas del 7%, 8% incluso en los

mejores años de ese super ciclo en materias primas, lo cual llevó a que naturalmente creciera el gasto público. En esos años, Colombia pasó y creció exponencialmente su gasto público a partir de la década de 2000 y partir también a partir de la Constitución de 1991, pero particularmente a partir de 2000, cuando se dio ese super ciclo de materias primas, a más ingresos, más gasto, más política social y más proyectos y más políticas de todo tipo en el territorio. ¿Qué pasó en 2015? Pues que se acabó el super ciclo de materias primas. Y finalizado el superciclo de materias primas, pasamos de tener tasas de crecimiento extraordinarias a tasas de crecimiento mucho más modestas, senadora María Clara, del 2 del 3%.

Esa ha sido la constante desde 2015 en adelante, lo cual ha llevado a que este país haya sustituido esas tasas de crecimiento por gasto público, a compensar esa falta de crecimiento con gasto público, gasto público financiado con deuda y con reformas tributarias. Si no estoy mal, ya desde 2015, 2016 ya llevamos más o menos 11 reformas tributarias. Recordarán ustedes el momento en el gobierno Santos, siendo Mauricio Cárdenas ministro, cuando se desploma básicamente el peso, pasamos de 1.900 a 3.600, se caen los precios del petróleo porque se estalla la burbuja del super ciclo en materias primas e inmediatamente presenta una reforma tributaria, la primera de una seguidilla de 11 reformas tributarias. Llegó el punto en donde nosotros ya no podemos hacer más reformas tributarias. y en donde el peso de la deuda se está volviendo totalmente agobiante para este estado y para esta economía y en donde tenemos que ya sentarnos todos como nación y como país a entender el problema que enfrentamos, es decir, el toro por los cuernos, aceptar la realidad fiscal y encontrar soluciones como nación a un problema que en sí es una amenaza contra la estabilidad misma de la nación.

Nadie quiere, independientemente de la orilla ideológica en la que nos encontremos, que el país entre en una espiral de deuda, porque todos entendemos lo que eso significa, lo que significa una verdadera depresión que aquí en Colombia nunca se ha sentido realmente, como lo han sentido países del cono sur, como lo ha sentido Perú, como lo ha sentido Venezuela, donde se destruyó el 70% del PIB. Y ese es el significado del sinceramiento de las cuentas que está haciendo el señor ministro de Hacienda. Vamos a decirnos la verdad y vamos a actuar en consecuencia y de manera responsable. Este presupuesto que les presento hoy del Ministerio del Interior es consecuente con esa realidad. Hacemos una radiografía exacta de los rubros de lo que se está gastando este año y hacemos una propuesta también de recorte.

El señor Ministro de Hacienda ha señalado que él va a presentar un plan de recorte en el mes de noviembre, doloroso, sin duda, pero responsable y absolutamente necesario. Este presupuesto del Ministerio del Interior, si ustedes me permiten, aquí y observan las diapositivas. Bueno, miren, observen ustedes. Yo igual les voy a dejar esta diapositiva para que ustedes lo vean con claridad. Bueno, el presupuesto de 2026, es decir, el actual, el que estoy ejecutando este año, que fue elaborado por el gobierno Petro, estableció el presupuesto de Min Interior en 1,428 billones de pesos, 1 billón y medio de pesos. El proyecto presentado por el gobierno Petro saliendo básicamente elevó el presupuesto del Ministerio del Interior a 1 coma 855 billones de pesos. Luego

el presupuesto presentado por el Ministro Miguel Gómez baja el presupuesto a 1 coma 282 billones de pesos, es decir, una diferencia de 573 mil millones de pesos, es decir, una variación del 30% menos.

Nosotros hemos hecho una revisión muy juiciosa, precisa de ese presupuesto y queremos presentarle a ustedes, honorables senadores, una propuesta intermedia, una propuesta alterna entre estos dos montos, el presupuesto presentado por el gobierno Petro, el presentado inicialmente por el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y básicamente consiste en mantener prácticamente el mismo presupuesto en el año 2027, que el que estamos ejecutando ahorita en 2026, es decir, una variación de unos pocos millones, pero la idea o la propuesta es mantener exactamente el mismo presupuesto del año 2026. Y esto básicamente se hace logrando un ajuste de prácticamente 398 mil millones de pesos menos, es decir 400 mil millones menos que lo que propuso el gobierno Petro en el presupuesto que radicó aquí en el Congreso de la República.

Es decir, una variación o un ahorro del 21% con respecto a lo que había presupuestado el gobierno de Gustavo Petro y 174 mil millones de pesos más de lo que había planteado inicialmente el señor ministro de Hacienda. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Pues porque básicamente el presupuesto presentado inicialmente que digamos no había no había sido objeto de una revisión concienzuda de los diferentes programas que tiene el Ministerio del Interior, pues nos dejaba desfinanciados 80 mil millones de pesos en programas misionales, 61 mil millones de pesos en Fonsecon, 42 mil millones de servicio de deuda, 27 mil de bienes y servicios, 25 mil en formalización del empleo y 1,2 millones de dólares del pueblo UWA, que es una sentencia, en buena medida y eso es importante que lo conozcan honorables senadores, el presupuesto de los ministerios tiene cumplimiento o tiene un componente importante de cumplimiento de fallos judiciales. Por eso, ven ustedes ahí, pueblo UWA. Luego hago, y ustedes podrán observarlo, hago básicamente una presentación muy sucinta, pero también muy precisa de los presupuestos viceministerio por viceministerio. Entonces, aquí está, por ejemplo, el presupuesto del Viceministro Carlos Eduardo Gechen. Allí, por ejemplo, les presento el presupuesto, el 26. Al lado les pongo básicamente un cuadro donde está el solicitado en el anteproyecto del 27 y la propuesta de ajuste nuestra, básicamente con los porcentajes de variación con respecto a ese presupuesto. Siguiente, por favor. Más adelante el viceministerio general también les presento lo que es el rubro de inversión y allí básicamente, dirección por dirección ustedes podrán básicamente encontrar desmenuzado y muy precisado el presupuesto 2026-2027 con la propuesta de ajuste que estamos haciendo nosotros.

Luego en esa presentación, siguiente paso al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos y hacemos exactamente el mismo ejercicio, inversión y funcionamiento en la siguiente en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. También encontrarán ustedes básicamente el despacho del ministro y la Secretaría General con sus presupuestos y los ajustes, básicamente las reducciones que estamos haciendo en el gasto con respecto al presupuesto antes presentado. Por último, está Fonsecon, que me quiero alargar un poquito acá también está el

presupuesto consulta previa, está el presupuesto bomberos, pero está el presupuesto básicamente de Fonsecon. Como ustedes saben, Fonsecon es un fondo del Ministerio del Interior que se financia con el 5% de los contratos de obra y con el 2,5% lo producido por una concesión. Ese es un presupuesto que ustedes ven ahí muy grande. dicen, "No, pues eso es un presupuesto de 768 mil millones de pesos, pero en realidad no es tan grande porque el grueso, más de 618 mil millones se va en un rubro de funcionamiento, es decir, se va pagando desembolsos de obras o de proyectos que fueron contratados en el pasado, quedando algo así, no más de 150 mil millones de pesos para inversiones nuevas el año entrante.

Y yo quiero aquí señalar varias cosas. Ese es un fondo muy importante si se emplea correctamente. Nosotros ya empezamos a hacer un ejercicio de coordinación con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas del país, para sincronizar la inversión con las principales necesidades de seguridad que tiene el país. Aquí nos vamos a concentrar en estaciones de policía, en sistemas de cámaras para hacer reconocimiento biométrico y detectar a los criminales y en sistemas anti drones, dado que los drones se convirtieron en la principal arma del narcoterrorismo en el país y esto requiere una reacción inmediata y perfectamente asertiva por parte del Estado colombiano.

Ahorita estuvimos, respetados senadores, con la cúpula militar y con el ministro de Defensa en el sur del Cesar y en Ocaña. En el sur del César, para que ustedes hagan una idea, hay 111 km del poliducto que trae gasolina entre Barranca y Santa Marta, de donde se han robado atérrense este año 1.090.000 barriles de gasolina, que en su gran mayoría toma dos carreteras. toma la carretera que es la Mata - Ayacucho – Guamalito - Convención -Teorema para llegar al Catatumbo, su tierra, respetado senador, o la vía Ocaña también para llegar al Catatumbo. 1.090.000 barriles de gasolina del Estado colombiano que termina en los cultivos de coca, en los laboratorios del Catatumbo, alimentando los cultivos de las 50,000 hectáreas de cultivos del Catatumbo. Es allí en donde naturalmente los narcoterroristas del ELN dinamitan con drones las estaciones del sur del César, de Guamalito, perdón, de Curumaní, de Pailitas, de La Gloria.

Es allí en donde también destruyen las estaciones de norte de Santander, de Guamalito, de Teorema, de Convención, porque esa es la ruta que ellos tienen que controlar, porque ese es el eje del cartel de la gasolina conectado con el narcotráfico del Catatumbo y al mismo tiempo Aguachica conectada con la ruta del oro, básicamente del sur de Bolívar y de la serranía. ¿Qué tiene que hacer aquí Fonsecon? Fonsecon tiene que sentarse con la policía, con los alcaldes del sur del César, como lo hicimos el viernes, con los alcaldes del Catatumbo y mirar prioridad, por prioridad dónde destruyeron la estación de policías. Tres estaciones que vamos a priorizar inmediatamente. ¿En dónde hay que construir una estación de policía? En la Mata, que es el cruce de la carretera. Inmediatamente procedemos a construir con los 150 mil millones de pesos que estamos liberando desembolsos futuros de Fonsecon. ¿Cuáles son las principales estaciones de policía que necesitan sistemas anti drones? Se priorizan inmediatamente. ¿Qué necesitan los alcaldes de el del Catatumbo? Los 12 alcaldes. Sistemas anti drones se priorizan inmediatamente. ¿Qué necesita Ocaña? en donde acaban de asesinar a tres soldados con un ataque de drones,

sistemas de cámaras inteligentes, las vías de acceso Ocaña, que es por donde entran los terroristas del ELN, sistemas anti drones para el batallón, que es donde votan y tiran las bombas con los drones estos delincuentes, sistemas de cámaras inteligentes para que el delincuente cuando vaya a abastecerse a Ocaña o baje a Aguachica, también abastecerse, sepa y entienda que en cualquier momento su carita, su rostro va a quedar grabado con un sistema de cámaras biométricos y que en el momento menos pensado, gracias a sistemas de cámaras inteligentes, puede llegar la fuerza pública a capturarlo. que el delincuente sepa, que el miembro de las organizaciones narcoterroristas sepa que no tiene un lugar seguro ni en Aguachica ni en Ocaña, porque le vamos a detectar su cara y le vamos a llegar a capturarlo, para eso debe servir Fonsecon. Y este mismo ejercicio es el que vamos a realizar con la cúpula militar y con el señor ministro de la defensa en las principales zonas de orden público del país, porque es allí donde debe ir el gasto. Yo no voy a construir los polideportivos, los sacúdetes de gobiernos anteriores, no lo voy a hacer. Antidrones es proteger a la población, salvar vidas, estaciones de policía, por ejemplo, en las zonas del terremoto se cayeron muchas y, por supuesto, sistemas de cámaras inteligentes. ¿Cómo? Sincronizados con la fuerza pública. Iremos al norte de Antioquia, al Bajo Cauca, a la Serranía, a Santa Rosa, al sur de Bolívar. También vamos a estar en el Caquetá haciendo exactamente el mismo ejercicio allá en el sur del Tolima. Por supuestísimo que estaremos muy pronto allá en donde los delincuentes del cartel del oro y de las disidencias van y además y provocan incendios porque está detectado que hay patrones criminales en los incendios para distraer la acción de la fuerza pública.

Estaremos en el Huila, en el suroccidente del país. Vamos a priorizar naturalmente Nariño, Cauca, departamento del Valle, el litoral pacífico, porque lo que necesita la población es que los protejan. La única manera de evitar y de proteger los derechos humanos es que quienes, mediante las armas, los narcoterroristas que necesitan controlar a la población, pues no asesinen a sus líderes, porque la única manera como un narcoterrorista, las disidencias de las FARC narcoterroristas, el ELN narcoterroristas puede controlar a la población es mediante el terror. Es matando de manera sórdida, es matando de manera despiadada para provocar tal nivel de miedo en una población que no se atrevan a hablar, que solo acaten la ley del silencio. Por eso es que matan a los líderes sociales en este país, para garantizar un control de la población, trazar fronteras invisibles y afianzar rentas criminales. No lo hacen por nada más.

Esa es la verdadera protección de los derechos humanos y la protección de los líderes sociales. Eso no se protege con camionetas, se protege garantizando la presencia del Estado en todo el territorio y garantizando las leyes de la República en todo el territorio nacional. Y eso es lo que vamos a hacer con Fonsecon. Ahora yo no vengo a pedirles plata para Fonsecon. Yo voy a pedir plata para otra cosa, no para Fonsecon. Fonsecon, como les digo, se financia con el 5% de los contratos y el 2,5% de las concesiones. Lo que pasa es que en el Ministerio del Interior, extrañamente, pues nunca se ha cobrado esa plata, nunca se ha desarrollado una capacidad de cobro. Nosotros estamos revisando esquemas con lo que llaman hoy legaltech, que son básicamente empresas de tecnología y jurídicas que tienen capacidad para rastrear, detectar, encontrar a los morosos,

municipios o contratistas y ejercer capacidad de cobro. Y tenemos unas metas ambiciosas. Yo pues esperamos, por ejemplo, estar en capacidad de recaudar un billón de pesos de plata que le deben al Fonsecon y lo vamos a hacer porque además pues las entidades públicas tienen que pedir, pero tienen también que ir proactivamente a buscar lo que les deben. Entonces pues vamos a desarrollar esa estrategia para poder llenar a este país las ciudades más importantes de cámaras de vigilancia, de sistemas anti drones y estaciones de Policía.

Por último, está el presupuesto de la consulta previa. Siga, por favor. Presupuesto de la consulta previa se mantiene. Más adelante podremos hablar aquí de la consulta previa. No es cierto que el Ministerio quiere eliminar la consulta previa. Yo creo en la consulta previa. Los proyectos son mejores y se hacen mejor si están debidamente concertados con la comunidad. Lo que pasa es que pues todo procedimiento administrativo tiene que ser reglado con términos y con reglas absolutamente claras. Los procedimientos administrativos no son discrecionales ni subjetivos del funcionario que está en ejercicio del mismo, porque eso se presta para corrupción y tiene que haber unos términos debidamente acotados porque no puede aparecer una comunidad cada 8 días cada una con una pretensión más alta, porque ustedes saben qué significa eso. La protección de la consulta previa y de los pueblos necesita reglas claras y eso es lo que vamos a garantizar allí. Por último, pues eso es en donde sí voy a pedir recursos es para bomberos, porque pues a ver, ustedes ya están viendo lo que está pasando en sus departamentos.

Estamos enfrentando un fenómeno del niño supremamente agresivo. Lo de los incendios en el Tolima fue aterrador, aterrador. Yo estuve allá varios días. La dirección de bomberos es adscrita al Ministerio del Interior, como es la UNP, pero pues eso es un mundo aparte. La UNP tiene un presupuesto más grande que todo esto, eso sí quiero que lo hablen directamente con el con el doctor Didier, la imprenta y Nasa Kiwe, la dirección de bomberos yo me traje a una persona que no conocía, pero pues fue el autor de la ley de bomberos en su momento, Capitán Miranda, una persona muy reconocida en el mundo de los bomberos y en con gran experiencia internacional también, senadora María Clara. Fue director del primer director de bomberos con Germán Vargas. yo no lo conocía, me ha parecido una persona extraordinaria. Estamos revisando el presupuesto, revisando prioridades y aquí sí les voy a pedir que me acompañen porque pues lo que se viene es supremamente complejo y al mismo tiempo yo creo que este país debe dar una revisión y un debate sobre la situación de los cuerpos de bomberos. Son voluntarios y son héroes. Mire, ahorita atendiendo el terremoto, yo vi el desplazamiento, la llegada de los cuerpos de bomberos de Antioquia, de Bogotá, del Huila, de Santander, voluntarios, personas movidas que se movilizaban por la simple mística y por el amor de dar y ayudar a los demás en situaciones difíciles y extraordinariamente bien formados. Nosotros tenemos unos grupos de rescatistas, en su mayoría bomberos, perfectamente formados y reconocidos internacionalmente y son héroes en la forma como enfrentan el fuego, como enfrentan las catástrofes y deben de tener todo el reconocimiento por parte del gobierno nacional. Esa ha sido una prioridad también que ha sido señalada por parte del Presidente de la República.

Entonces, ese es el presupuesto. Esa presentación se las haremos llegar. Ahí tenemos a la tenemos a nivel de detalle de subdirecciones. Es lo que vamos a ahorrar, lo que necesitamos un poquito más de lo que nos dejó el ministro Miguel. Un poquito muy severo el corte del ministro, pero es un poquito no más. Es el mismo presupuesto 2026 que recorte recorté capacitaciones. Ya donde veo capacitaciones yo voy tijereteando porque es que de verdad el Ministerio del Interior no es el SENA. Nosotros, ¿qué hacemos capacitando? Yo no tengo por qué estar eso lo hace el Sena, lo hace una entidad especializada. Esos contratos de capacitaciones, pues para qué entro en detalles. Ustedes saben lo que lo que hay detrás de muchos de esa habladuría de Pajarilla. En todo caso, eso todo eso se está recortando, se mantiene el empleo del que va a trabajar y fíjense que no es un presupuesto muy grande, el grueso se va en funcionamiento en desembolsos de Fonsecon. Eso es. Muchas gracias, queridos y respetados senadores de la Comisión Primera.

Interviene la Senadora Zuleta. Gracias señor Ministro. Uno no sabe por dónde empezar. Tal pareciera, señor Ministro, que lo que usted nos quiere decir ahora es que a los líderes sociales lo único que nos debe interesar es que se pongan drones y que se ponga la identificación para encontrar nosotros mismos o que se encuentre a quien nos está persiguiendo. Yo me quedo impresionada, señor Ministro, con la reducción del presupuesto en la Dirección de Derechos Humanos. La reducción es del 66%. Y no, Ministro, lo que necesita un líder social es que lo escuchen, que lo acompañen en sus denuncias, que no lo persigan por el hecho de hacer sus denuncias. El líder social necesita reconocimiento y acompañamiento, eso lo hace la Dirección de Derechos Humanos que está a su cargo y que necesita presupuesto. No es trasladar la persecución judicial para decir entonces, por supuesto, que hay que superar la impunidad, señor ministro, sobre los ataques a los líderes sociales. Pero no es lo único. La dirección de derechos humanos de la que usted está a cargo ha sido fundamental para las organizaciones sociales y esas capacitaciones que tanto desprecia, señor ministro, son el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de las juntas de acción comunal, que también usted tiene a su cargo. Por supuesto que puede haber corrupción, pero eso no significa que las juntas de acción comunal en este país y las demás organizaciones no tengan derecho a ser fortalecidas y sean el sustento de nuestra democracia también. Y señor ministro, la consulta previa es previa. Claro que la están atacando. Por supuesto que la están atacando, porque si no es previa no es consulta. El principio de la consulta previa es que sea antes del desarrollo de los megaproyectos, no durante como se ha propuesto, ¿no? Y menos después, como nos tocó a nosotros vivirlo en Hidruituango.

Imagínense ustedes una consulta previa posterior a que la obra se termine. Senadora, concluye, por favor. Como para qué una consulta después de, para que no le hagan caso a la población, para que no pueda exigir, para que no pueda establecer los parámetros y las garantías para el respeto a sus comunidades y a los ecosistemas. Yo quedo impresionada porque entonces ya no va a ser previa. Sí es un ataque, pero además la reducción del presupuesto en menos el 52% para las víctimas. Entonces, tenemos el aumento del presupuesto en gastos operativos, en funcionamiento

y nos dijeron que iba a ser eficiencia lo de este gobierno, pero si aumenta el funcionamiento más el 13% en seguridad, más gastos operativos un 14%. Pero a las víctimas y a los derechos humanos no les demos presupuesto y acabemos con la consulta previa.

Interviene el Senador Juan Carlos García, Señor presidente, saludo especial al Ministro del Interior, Viceministro, el doctor Carlos Gechen igualmente que nos acompaña, presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Juan Felipe Lemus. Empezar por resaltar a dos grandes exparlamentarios, colegas, compañeros que hoy nuevamente el destino nos une en esta comisión. Tuve la oportunidad de ser colega y compañero de Dr. Rodrigo Lara en Cámara y Senado. De igual manera con Juan Felipe Lemos, dos excelentes congresistas impecables, argumentados trabajadores de lo mejor que ha pasado por el Congreso de la República y hoy los tenemos en dos escenarios distintos. Muy merecido esa designación como presidente del Consejo Nacional Electoral, una persona de su trayectoria. De igual manera, un gran acierto al gobierno nacional al frente del Dr. Rodrigo Lara por la responsabilidad, por el carácter, por su talante siempre político concertado, que va a ser una gran garantía para la oposición. Siempre lo tuvimos acá en esas discusiones tan fuertes. Compromiso desde la semana pasada, señor ministro, que tuvimos la oportunidad de hablar el día miércoles de situaciones complejas como el departamento de la frontera colombiana, el tema del Catatumbo, el cual usted me hizo una invitación y tenía acá con la comisión pues un compromiso anterior, pero escasamente en menos de un mes ya se presencia usted en una región necesitada y fuerte. Ministro Fonsecon, se nos acaba el 9 de noviembre, es una ley que es la ley 418 orden público, ya finaliza su vigencia el 4 de noviembre. Yo creo que ustedes tienen esos temas. Yo pude mirar una noticia en donde ya el Ministerio y el Ministro de Justicia están implementando la erradicación de esta prórroga. Es la columna vertebral de ese derecho constitucional y obligación constitucional que tienen los presidentes de Colombia para la búsqueda de la paz. Por eso yo me alegro y este mensaje es muy importante al país porque el presidente Abelardo la Espriella en esta ley en la cual está Fonsecon hace y va a ser va a tener la herramienta, la oportunidad, no, para una ley de sometimiento, que era lo que siempre se ha venido tramitando al Congreso de la República, sino una ley de acogimiento.

Es un mensaje para que la institucionalidad colombiana en el fortalecimiento de la defensa de los ciudadanos en la Constitución y en la ley contra los violentos tengan la posibilidad de dejar las armas y acogerse a los beneficios que le da un Estado colombiano, como se ha hecho a través de muchos presidentes, de todos los presidentes. Y esto, señor ministro, pues tenemos que estudiarlo. ¿Cuál va a ser la política? Han tenido varias a través de los presidentes, de hecho, las grandes desmovilizaciones del país.

Las grandes desmovilizaciones históricas del país han nacido en el marco en el seno de la Ley 418 de orden público, lo cual es una oportunidad para que luego de que se recupere la confianza, que ha sido lo que yo he entendido, señor ministro, la confianza ciudadana en sus instituciones, en la fuerza pública, en su tránsito, en su convivencia, en circunstancias, en zonas como el Catatumbo que dicen cuerdas cortadas por el temor, por la zozobra, por los drones, por la controversia, por

la lucha. entre grupos armados, entre ellos. Luego de que el Estado eso vendrá pues la fortaleza de inversiones y desarrollo, que es la única solución. Nosotros desde el partido conservador en mi caso siempre he dirigido mi discurso en eso, en el diálogo, en agotar el diálogo, en poder tener esa consideración siempre y cuando con el respeto de la de la Constitución, de la Ley, que sea con esa intención saludable. Fonsecon, recoge 350 mil millones, ministro. Yo creo que es la oportunidad que usted revise muy bien este fondo, ver cómo podemos nosotros también mirar algunas fuentes de financiación, ya que viene la Ley 419. Por eso le quería decir, el gobierno pasado lo alcanzó a subir a 600 mil millones, pero al final lo que recauda lo que se pueden gastar porque es un fondo directamente acertado el tema de la ley de bomberos. Hay que volver a hacer. Me acuerdo en esa oportunidad que yo fui también ponente de la ley de bomberos, teníamos un amigo paisano suyo del Huila un grato recuerdo del director, del capitán Miranda, acertado lo de Miranda, un conocedor, una persona querida en toda la institución y me acuerdo de Vargas Lleras en su jocosa siempre inteligencia, un hombre estadista como usted quedan pocos estadistas en este país, le puso a nuestro gran amigo Carlos Augusto Rojas, alias Llamarada en honor de haber sido el ponente de la Ley de bomberos que hoy necesitamos modernizarla porque Ya el terremoto que ha sucumbido lamentablemente a nuestro país necesita del voluntariado y del profesionalismo de los bomberos como lo hacen todos los países civilizados que tienen sus prioridades. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.

Interviene el Senador Hernán Dario Cadavid. Presidente, muchas gracias, ministro. Bienvenido a su comisión. Además, aquí en el Congreso de la República, quiero aprovechar el tiempo al máximo saludando también a cada uno de los funcionarios del gobierno nacional que están presentes, al Dr. Juan Felipe Lemus, presidente del Consejo Nacional Electoral. Quiero hacer mención o referencia a dos temas, ministro. Todo el país ha entendido el tamaño del problema fiscal en el cual estamos. Pero cuando uno está aquí sentado en la comisión, escucha intervenciones casi justicieras, señalantes, diciendo, "Pero, ¿y cómo que ustedes están reduciendo? ¿Pero cómo que le redujeron a tal o cual concepto? como si no supiéramos de dónde es que estamos viniendo, como si no pudiéramos tener en referencia el desastre presupuestal fiscal que le están dejando al nuevo gobierno. Entonces yo quiero hacerle una invitación, señor ministro, con todo cariño a usted y se la extiendo a todos los funcionarios del gobierno. Empiecen por contarnos qué fue lo que encontraron en el exceso de contratación de OPS. de desgreño administrativo, de lo que encontraron en exceso de contratistas en oficinas de comunicación hasta con 50 y 60 personas.

Hace unas horas nos expresó acá la doctora Miriam Martínez de la Unidad de Restitución de Tierras que encontró 2900 OPS, 170 mil millones de pesos. Y entonces ahora no podemos hacer como si esto fuera un borrón y cuenta nueva, si bien hay que mirar adelante y empezar o permitir que ajusticien a los funcionarios del gobierno nacional que recién ingresan y que se encuentran un enorme problema presupuestal porque toda la plata se la gastaron en contratos y desgreño y politiquería. Entonces, ministro, en ese sentido, esa recomendación a usted y a todos los funcionarios, muéstrele a este congreso qué fue lo que encontraron, qué es lo que hay que corregir y, por supuesto, que buscaremos las alternativas para esas nuevas fuentes de financiación

de programas específicos. La ley, la prórroga de la ley de orden público no puede quedar aquí simplemente para lo que funcionó los últimos años. vocerías, gestorías de paz, que a propósito todos se volaron. No hay un solo informe de la gestión de esos gestores de paz. Valdría la pena, además, decir qué fue lo que hicieron esos más de 80 designaciones, no como se movieron en el país. Pero vendrá otra discusión. Allí tendremos que utilizar esos instrumentos de prórroga para encontrar nuevos mecanismos que le permitan, por supuesto, al gobierno nacional, al Ministerio de Interior, cumplir con esos fines. Gracias, Ministro.

Las demás intervenciones de los senadores las pueden consultar en la página de YouTube. Para escuchar las inquietudes de los senadores con relación a las preguntas formuladas al Ministro del Interior puede consultar en la transmisión institucional del canal de YouTube de la comisión o en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=s5Ycmy-CGE0&t=295s septiembre 16 de 2026.

13. Doctora Jenny Lindo, Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República

De parte de cada uno de los funcionarios de la Contraloría General y, por supuesto, de nuestro contralor, el doctor Jorge Laverde, y nuestro vicecontralor, quienes hoy cumplen 16 días de su administración y razón por la cual esta delegada de Economía y Finanzas Públicas está asumiendo la vocería en estos momentos por delegación del doctor Laverde, con el objetivo de darles a conocer a ustedes y poner a su consideración algunos puntos de vista relacionados con el presupuesto, en este caso, del presupuesto específicamente de la entidad de la Contraloría General de la República.

Y sea lo primero precisar, senadores, que la Contraloría General ha hecho varios llamados y los seguirá haciendo en la medida de que el recurso público tiene que ser usado de la mejor forma posible, en el sentido de la eficiencia y de la eficacia de los presupuestos. Por supuesto que hemos hecho los llamados desde ajustes presupuestales y que precisamente cada decisión de cada peso, que es el recaudo de los colombianos fundamentalmente, puedan ser invertidos de la mejor forma.

Es así como en este caso queremos plantear un punto del presupuesto de la Contraloría General. Quiero llevarlos a eso. Son tres puntos centrales. El primero, quiero llevarlos a esta presentación en el rubro de inversión que les estamos indicando en amarillo. Fundamentalmente, este es el rubro que está siendo afectado y que puede poner en riesgo algunas de las operaciones y del plan de vigilancia y control del 2027. Justamente, inversión es ese valor agregado que le permite a la Contraloría General extender su trabajo más allá de la operación y de la dinámica propia rutinaria de la Contraloría General.

Es la inversión la que nos permite dar esos beneficios adicionales a cada uno de los ciudadanos. Habíamos solicitado 394 mil millones de pesos, como pueden ver ustedes en la presentación, y en el primer proyecto presentado del presupuesto en el mes de agosto de este año, se redujo a 140 mil millones de pesos. Pero el llamado aquí es que ahora, en el nuevo proyecto presentado hace pocas semanas, esta reducción se ve reflejada aún más.

Se ve incluso a 82 mil millones de pesos. Pasamos de 394 mil a 82 mil. Incluso, hacer una claridad, honorables senadores, que este número de 394 mil es el mismo conforme a la vigencia anterior. La Contraloría no está pidiendo recursos de más, solamente mantener el recurso básico que se necesita en esta materia en el punto de vista de inversión. Entendemos las necesidades de las reducciones, pero les agradecemos incluso, senadores, tener a consideración este tipo de reducción de 394 a 82 mil millones de pesos.

Y quiero resaltar que estos recursos de inversión, los 394 mil, que están ahora en un poco más de 80 mil, son realmente para proyectos de inversión. Aquí nosotros no estamos solicitando incrementar el rubro de funcionamiento ni el de la deuda de la entidad, sino tener en cuenta que esta reducción de inversión no sea en los niveles en los cuales ya este proyecto está siendo presentado. Y quiero resaltar cuatro grandes proyectos.

En total son ocho los proyectos de inversión que se verían afectados para el 2027, pero queremos resaltar aquí cuatro. El primero, la modernización tecnológica. Y en este sentido, senadores, aquí el desafío es grande. Las auditorías, nuestro trabajo de vigilancia y control, todavía las seguimos manteniendo de una forma ordinaria o con poca digitalización. Ustedes entenderán que las nuevas dinámicas, también de la corrupción en el país, le obliga a este organismo de control tener que estar a la vanguardia en materia tecnológica.

Y lo que nosotros hemos sostenido en la Contraloría General, senadores, es que la corrupción no puede subir en ascensor, pero la Contraloría en escalera. Necesitamos actualizar todos nuestros sistemas tecnológicos y que cada uno de nuestros procesos puedan contar con un sistema de seguimiento, incluso, por ejemplo, en el tema del recaudo tributario. Cada uno de los colombianos, que son los ingresos del país, tributan de diferentes formas.

Necesitamos nosotros garantizar el seguimiento de cada uno de los pesos desde el punto en que el ciudadano tributa el recurso hasta el último punto del resultado obtenido en el proyecto por la entidad respectiva. Y esa cadena presupuestal, para hacerle vigilancia a toda la cadena presupuestal, sin duda necesitamos de este proyecto de tecnología. El segundo gran asunto en inversión: la recuperación y mantenimiento de la infraestructura.

Nosotros no solamente necesitamos ajustar nuestra infraestructura de acuerdo a las normas y las instrucciones que nos ha dado recientemente el sistema de riesgos naturales, sino que también varias sedes de la Contraloría desafortunadamente se vieron afectadas también como consecuencia del terremoto. Tercer punto, el control preventivo y concomitante. Esto, por ahora, fundamentalmente a través de la DIARI, que es el equipo que nos permite realizar monitoreo casi que en tiempo real de asuntos estratégicos, como por ejemplo, hoy en día, el monitoreo en los páramos del país.

Eso solamente lo estamos pudiendo hacer gracias a la DIARI. La DIARI nos suministra a todas las delegadas de la Contraloría General la información de la ejecución contractual a la sábana de los contratistas, los patrones societarios que nosotros tratamos de identificar en la DIARI, a través también de sus equipos de sistemas que se han logrado desarrollar. Y además, la DIARI es la única dependencia de la Contraloría General, por ahora, que cuenta con el equipo de policía judicial.

Y finalmente, les quiero resaltar el proyecto de fortalecimiento del control social. Para nosotros y el doctor Laverde, es uno de los más importantes, justamente, y es hacer vigilancia y control con los ciudadanos. El llamado de nuestro contralor general es: hay que tratar de descentralizar en la medida en que más se pueda la tarea que hacemos nosotros como Contraloría General aquí en Bogotá, en la 26. Tratar de llevar a la mayor cantidad de regiones y para eso necesitamos fortalecer nuestras gerencias territoriales.

La Contraloría, por ahora, tiene una presencia casi que nacional en los 32 departamentos, pero es insuficiente. Necesitamos trabajar y cada una de estas delegadas va a trabajar con los ciudadanos, no solamente con los documentos y con los informes que llegan a nuestros escritorios. Y para eso, este proyecto del fortalecimiento de la incidencia del control social es el que precisamente nos va a habilitar poder llegar a los 32 departamentos y a los municipios en la medida en que más se pueda.

Estos son cuatro grandes proyectos, senadores, que para nosotros como Contraloría General son realmente prioritarios, son del corazón, de este valor agregado que la Contraloría General aspira poder cumplir a los ciudadanos con el respaldo de ustedes. Y les quiero mostrar un tercer y último punto.

En el primer cuadro de la línea azul ustedes pueden ver el crecimiento que ha tenido el presupuesto general de la nación en total, y la línea roja es el presupuesto de este organismo de control, de esta Contraloría General. Es visible cómo el presupuesto general de la nación ha tenido un crecimiento. Vemos en el 2024 del 23 %, en el 2027 del 4 %, y en el 2027 del 16 %. A contrario sensu, la Contraloría General va en disminución año tras año en su presupuesto.

Ya con base a este nuevo presupuesto tendremos una reducción del 36 %, razón por la cual queremos ponerles a consideración estos puntos de vista, señores y señoras senadoras, y estamos atentos, señor presidente, a responder preguntas o comentarios que los miembros de la comisión consideren. Muchísimas gracias.

Le dan la palabra al Senador Héctor Olimpo Espinosa. Son dos preguntas. Una me lleva a la otra. Es llamativo el hecho de que esa reducción presupuestal en materia de inversión sea tan abrupta y que no haya una explicación. No sé si la Contraloría tiene diálogo interno con el Ministerio de Hacienda sobre este punto específico, porque me parece que es muy abrupta la reducción presupuestal y muy extraño que se haga esto por parte del Ministerio de Hacienda con un órgano de control, sin que haya habido un diálogo previo o retroalimentación.

Quisiera conocer si han avanzado o si conocen los antecedentes de esta reducción. Es indiscutible que la Contraloría requiere sus capacidades plenas para poder desarrollar sus proyectos de participación, de tecnología, de infraestructura, poder generar más capacidades y ejercer ese control concomitante que ayuda mucho porque llega antes, que se produzca el daño fiscal o que termine de pronunciarse.

Van a tener especial trabajo con todas las denuncias que se están produciendo con el cambio de gobierno y que tienen el deber de atender. Todos sabemos que hay una lluvia de denuncias por parte del gobierno entrante en contra del gobierno anterior. Casi todas van a terminar en manos de la

Contraloría y tendrá que pronunciarse sobre estas. Creo que en esta transición de gobierno la demanda de trabajo es mucho más alta para simplemente hablar sobre las denuncias que hay.

Yo lo que digo es que me parece incoherente que se le exija más a la Contraloría y que se le recorte el presupuesto, y que esto se haga sin una concertación previa con el órgano de control. Quiero conocer un poco cuál es la conversación, si se puede saber, que han tenido con el Ministerio de Hacienda al respecto, la conversación previa que tuvieron antes de la presentación del proyecto de presupuesto.

Al final, quiero llamar la atención aquí sobre este tema en general a los colegas. Nosotros emitimos las opiniones, cualquier cosa que se haga, cualquier traslado que se haga o cualquier cambio de número que se haga requiere aval del Ministerio de Hacienda, porque al final, como Colombia opera la dictadura fiscal, el Congreso es solo un notario presupuestal. Es uno de los temas que me gustaría que revisáramos y debatiéramos en esta comisión: cómo acabamos con la dictadura fiscal en Colombia, de manera que el Congreso no sea simplemente un notario en materia presupuestal.

Obviamente, siendo coherentes con la realidad macroeconómica y con la realidad fiscal del país, pero que nosotros tengamos algunos niveles de autonomía y decisión en materia presupuestal, donde el Estado no clasifique el funcionamiento o cosas que son de inversión simplemente por el interés de poder trasladarlos a su antojo y que no se clasifiquen como inversión cosas que son de funcionamiento, por ejemplo.

Hoy en día, lo que dice el estatuto orgánico de presupuesto es que funcionamiento es lo que diga el gobierno, inversión lo que diga el gobierno. Creo que en casos como este tenemos enormes desafíos nosotros como célula legislativa. No me quiero extender. Aprovecho para hacer esas reflexiones. Señora contralora, muchas gracias.

La Dra. Jenny Lindo, delegada de la Contraloría le responde al Senador. Senador, usted ha tocado dos puntos importantes. El primero, efectivamente, nosotros hemos presentado en el Ministerio de Hacienda el impacto de esta reducción y las consecuencias que con esto vendrían para la vigilancia y el control en el país. Por lo pronto, no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Hacienda. Esperamos en los próximos días hacer estas consideraciones. Ellos y ustedes también puedan compartir algunas de nuestras apreciaciones como organismo de control.

Por supuesto, entendemos que el tiempo es hasta antes del 20 de octubre, incluso, razón por la cual esperamos que el Ministerio de Hacienda pueda darnos una respuesta al respecto sobre esta reducción tan sustancial que le han hecho a la inversión de la Contraloría General. Y en cuanto al segundo punto, efectivamente tenemos una carga adicional de trabajo, no solamente por las coyunturas propias del país, sino también, senador, porque teníamos una planta, un grupo de trabajo para investigar los recursos de las regalías.

Esta planta desafortunadamente quedó desfinanciada, no está operando hoy en día y la planta ordinaria entonces está asumiendo más de 400 procesos que hemos recibido en materia de regalías. Entonces, no es solamente la operación normal, sino la operación adicional, en este caso de regalías, Senador.

Le dan el uso de la palabra la Senadora María Clara Posada. Un saludo a la doctora de la Contraloría. Yo quisiera plantear un par de interrogantes partiendo también de un contexto. El año pasado, el funcionamiento de la Contraloría fue de 1.3 billones de pesos y 130 mil millones se destinaron a inversión. Este año se busca 1.4 billones y solo 80 mil millones de pesos se van a inversión. Entonces, estamos viendo que crece el costo de funcionamiento, el gasto de funcionamiento, y disminuye el gasto de inversión, que es desde donde se deberían derivar precisamente las mejoras en cuanto a eficiencia, eficacia y gestión.

Habiendo dicho eso, yo le quiero plantear dos preguntas puntuales. Si se hace una inversión en tecnología adicional, ¿cómo puede reducir eso los costos de funcionamiento? Porque es necesario que el funcionamiento deje de gastarse y de comerse todo el presupuesto. Y lo segundo es: ¿cuántos recursos ha recuperado la Contraloría en los últimos cuatro años? ¿Cuántas investigaciones fiscales adelanta y en qué etapa se encuentran?

La Doctora Lindo, proceder a atender los cuestionamientos de la doctora Posada. Doctora Posada, Senadora, muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a funcionamiento, en el anteproyecto se presentó por 1,4 billones y nos mantienen los 1,4 billones de pesos para el 2027. Ahí no estamos solicitando una adición, sino con respecto al año anterior. El incremento es equivalente, según lo que nos han informado, al incremento del salario mínimo de 23 %.

Ante esto la doctora Posada le responde ¿Pero por qué se reduce tanto el porcentaje de inversiones que el año pasado era de 130 mil millones con un presupuesto de 1,3 billones y este año solicitan un incremento de 100 mil millones para llegar a 1,4, pero reducen la inversión a 82 mil millones? Entonces, lo que uno ve es que estamos creciendo en funcionamiento, en planta, en nómina, y poco se le está destinando de recursos a la inversión, que es desde donde se puede derivar deficiencia.

La respuesta de la Delegada a la última intervención de la doctora Posada. Coincidimos con usted en la necesidad de tener en cuenta esta reducción que se está haciendo en el rubro de inversión, que es donde nosotros podemos hacer nuestro mayor potencial. El funcionamiento, por supuesto, es muy importante, claro está. Solo que la inversión es la que nos genera estos grandes cuatro proyectos que traté de explicar, que lo conecto además con el proyecto de transformación digital.

Actualmente, nuestros equipos auditores realizan casi que presencialmente cada auditoría. Implica tiempos: un proceso auditor se está llevando aproximadamente de cuatro a seis meses la primera fase. Si nosotros logramos digitalizar, hacer la transformación digital de la entidad, que es a lo que le está apostando justamente el doctor Laverde y todo el equipo, nos va a permitir incluso reducir estos tiempos casi a más de la mitad de lo que hemos podido hasta ahora identificar.

Pero además ser mucho más preventivos, en el sentido de que podemos acelerar la vigilancia de la cadena presupuestal. Es decir, desde el mismo momento en que ingresa el recurso al presupuesto general de la Nación, hasta el resultado que tiene que dar este recurso en cada uno de los proyectos. Esto nos va a permitir la transformación digital, ser mucho más contundentes, más rápidos de lo que ahora tratamos de hacer.

Confiamos realmente en que este proyecto es una necesidad y está justamente en uno de los proyectos de inversión previstos para el 2027. Razón por la cual queremos hacer énfasis en que

entendemos, por supuesto, que hay unas condiciones económicas y financieras en el país, que incluso nosotros mismos hemos tratado de advertir y de revisar, pero también entendemos que esta reducción en el caso de inversión es mucho más allá del 50 % incluso de inversión.

Entendemos, por supuesto, y obviamente estamos comprometidos como Contraloría de hacer honor a los llamados que hacemos, a invertir los recursos con la mejor eficiencia y resultado posible, en los mejores tiempos, con la mejor planeación posible. Razón por la cual este es uno de los llamados que esperamos que ustedes puedan considerar al momento de sus votaciones en la estructuración de la versión final del presupuesto de la siguiente vigencia.

No se presentaron más intervenciones por parte de algún Senador en esta sesión. A continuación, el link de la sesión realizada el día 22 de septiembre del presente año, https://www.youtube.com/watch?v=4C-vmT5pppw&t=3s07 Septiembre 22 de 2026

VI. INFORMACIÓN DEJADA POR LAS ENTIDADES QUE NO PUDIERON HABLAR EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

No pudieron intervenir en la sesión de la comisión del 16 de septiembre los siguientes funcionarios, pero dejaron las respuestas al cuestionario enviado.

1. Directora Agencia Nacional de Tierras, Doctora Lina María Garrido
2. Directora Encargada Instituto Geográfico Agustin Codazzi, Doctora Camila Andrea Baquero
3. Subdirector General de la Unidad de Protección, Doctor Edgar Picón
4. Delegada de la Registraduría del Estado Civil, Doctora Sabrina Cajiao Cabrera
5. Presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus
6. Directora General Unidad de Víctimas, Doctora Jensy Johana Osorio Porras
7. Directora Agencia para la Renovación del Territorio, Doctora Valerie Lafaurie Garcia
8. Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Doctor Germán Calderón España
9. Directora General Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Doctora Isadora Fernández Posada.

VII. COMENTARIOS DE LOS SENADORES

- **Honorable Senador Carlos Alberto Benavides Mora - Pacto Histórico:**

Si bien la mayoría de las entidades de competencia de la Comisión Primera expresaron conformidad y viabilidad operativa con respecto a las apropiaciones proyectadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2027, del análisis técnico-financiero adelantado se evidenció un desfase presupuestal crítico y desproporcionado en tres dependencias estratégicas del Estado:

- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): donde la restricción de recursos asignados frente a

la solicitud inicial compromete la capacidad operativa del componente de justicia, el despliegue territorial para la instrucción de los macrocasos y la implementación del régimen de sanciones propias. Limita 35.962 asistencias psicosociales, 6.700 representaciones judiciales a víctimas y 1.320 audiencias públicas; afecta 10.799 atenciones a víctimas y 10.077 apalancamientos investigativos.

- La Unidad de Búsqueda para personas dadas por desaparecidas: en la cual la brecha presupuestal proyectada afecta directamente la sostenibilidad financiera del pago de indemnizaciones (individuales y colectivas), las medidas de asistencia humanitaria y la ejecución de la política pública de víctimas. Paraliza más de 600 investigaciones interdisciplinarias.
- La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN): cuya reducción en la asignación pone en riesgo la continuidad de los proyectos productivos, los apoyos económicos directos y el acompañamiento técnico indispensable para el proceso de reincorporación de los excombatientes. Pone en riesgo el acceso y permanencia en la oferta institucional, la asistencia técnica, educación informal en derechos humanos y gestión del riesgo, apoyo financiero a iniciativas locales y acciones afirmativas.

Esta desfinanciación, a mi juicio, no configura un ajuste ordinario bajo criterios de austeridad fiscal, sino una contingencia estructural que vulnera mandatos constitucionales, legales (Ley 1448 de 2011 y Ley 1957 de 2019) y compromisos de Estado asumidos en el Acuerdo Final de Paz.

Por consiguiente, este acápite de comentarios focaliza su alcance y recomendaciones exclusivamente en la sustanciación de las falencias presupuestales de la JEP, la Unidad para las Víctimas y la ARN, con el propósito de elevar ante las Comisiones Económicas Conjuntas las alertas técnicas pertinentes y la justificación para la modificación de las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación 2027:

RECOMENDACIONES

La reducción propuesta en el Proyecto de Ley 152 de 2026 para las entidades en mención, representa un retroceso presupuestal en términos reales y nominales. Someter a estas entidades a recortes de inversión que oscilan entre el 43% y el 100% de los proyectos misionales, genera un costo de oportunidad altísimo: la parálisis de la justicia transicional, el estancamiento de la reincorporación (lo que aumenta el riesgo de reincidencia) y el colapso del despliegue territorial de la búsqueda de desaparecidos.

Por lo anterior, presento la siguiente recomendación estructural con el propósito de que sean tenidas en cuenta en las Comisiones Económicas Conjuntas:

Criterio de Indexación Mínima como garantía de no regresividad fiscal nuestra propuesta central, fundamentada en el principio de no regresividad de los derechos fundamentales y en la responsabilidad fiscal del Estado frente al Acuerdo Final de Paz, es que bajo ninguna circunstancia la

apropiación presupuestal para la vigencia 2027 de la ARN, la JEP y la UBPD puede ser inferior a la asignación definitiva de la vigencia 2026 ajustada por la inflación.

Es decir, se solicita a las Comisiones Económicas y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mantener la base presupuestal (funcionamiento e inversión) del año 2026 e indexarle el porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), de la siguiente forma:

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión
ARN	$376.000.000.000	$2.000.000.000
UBPD	$131.000.000.000	$80.000.000.000
JEP	$647.684.000.000	$199.660.690.575

- **Comentarios Honorable Senador Manuel Virguez Piraquive, Partido Mira**

Se reconoce como un avance técnico legítimo que el proyecto reformulado corrija el desbalance estructural de $30,21 billones entre los Artículos 1° y 2° que presentaba el proyecto original, una de las tres alertas de mayor gravedad identificadas en el análisis técnico-jurídico del articulado original, e iguale exactamente ingresos y apropiaciones. La transparencia en el reconocimiento de pasivos previamente no presupuestados (pensiones, salud, nómina) constituye una mejora en la calidad de la información fiscal que se somete al Congreso.

No obstante, debe señalarse que dicha corrección se logra trasladando el costo fiscal hacia el mediano plazo mediante mayor endeudamiento, y no mediante una estrategia explícita y verificable de ajuste del gasto. Esta lectura coincide con el diagnóstico técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advirtió que financiar el presupuesto con más deuda llevaría el endeudamiento del 61% al 67% del PIB, un nivel que calificó de insostenible; con el Banco de la República, que trasladó al Congreso el riesgo de que el ajuste fiscal requerido (3,7 puntos del PIB) supere ampliamente el contemplado en el proyecto (1,4 puntos); y con centros técnicos independientes como ANIF, Fedesarrollo/*Lumen Economic Intelligence* y *Fitch Ratings*, ninguno de los cuales calificó la trayectoria de deuda resultante como sostenible sin un plan de ajuste plurianual creíble.

Debe advertirse, en todo caso, una tensión relevante entre el discurso de austeridad fiscal y la ejecución presupuestal propuesta: el programa de gobierno del presidente De la Espriella se construyó sobre la promesa explícita de reducción del tamaño del Estado; sin embargo, el proyecto que su propio Gobierno radica ante el Congreso incrementa el gasto en $59,25 billones, el segundo mayor salto presupuestal desde 2019, según análisis independientes, en una proporción donde el 87% del incremento se dirige a funcionamiento administrativo y servicio de la deuda, no a inversión productiva ni a los ejes de seguridad y competitividad que el propio Gobierno ha declarado como prioritarios.

Consideraciones sobre el proyecto en su conjunto

- Se valora positivamente la corrección del desbalance estructural entre ingresos y apropiaciones y el ejercicio de transparencia fiscal frente a pasivos previamente ocultos.
- Se expresa preocupación por la ausencia de una hoja de ruta explícita, con metas anuales verificables, para la reducción del déficit fiscal en el mediano plazo, en línea con la observación del CARF.
- Se advierte que la composición del gasto adicional, concentrado en deuda y funcionamiento, debe alinearse con las prioridades de seguridad, competitividad y empleo que el propio Gobierno ha declarado como el eje de su gestión.

VIII. CONCLUSIONES

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634,95 billones el 14 de septiembre de 2026. En consecuencia, cuando este informe llegue a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas, la discusión ya no se basará sobre el tamaño del presupuesto sino sobre su distribución. Las recomendaciones que aquí se formulan se dirigen, por tanto, al articulado y al anexo del proyecto, que aún permite modificaciones.

El proyecto crece 14,2% frente a la apropiación de 2026, pero ese crecimiento lo explica el servicio de la deuda pública, que pasa de $100,45 billones a $155,43 billones, un aumento de 54,7% en una sola vigencia. Descontada la deuda, el presupuesto pasa de $455,37 billones a $479,52 billones: crece 5,3% en términos nominales y, con el supuesto de inflación de 4,4% que el propio Gobierno incorporó en el Mensaje Presidencial, apenas 0,9% en términos reales. Ese, y no el 14,2%, es el referente contra el cual debe medirse el trato que recibe cada entidad.

El conjunto de entidades de competencia de la Comisión

Sumadas las entidades citadas e invitadas por esta Comisión, el proyecto no las incrementa: pasan de $49,42 billones en 2026 a $49,02 billones en 2027, con una reducción de 0,8% en términos nominales y de 5,0% en términos reales. Medido como participación en el presupuesto (descontando el servicio de la deuda), el bloque pasa del 10,9% al 10,2%.

El comportamiento no es uniforme. Crecen el sector Justicia y del Derecho y víctimas; sin embargo, se reducen los órganos de control y la organización electoral, y cae con fuerza el bloque de interior, tierras y territorio. Cabe mencionar que el lunes 21 de septiembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo una reducción en el presupuesto con las proposiciones modificatorias, quedando con una reducción del 12,7%.

La Rama Judicial

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura expuso ante esta Comisión que la Rama solicitó $17,5 billones y le fueron asignados $11,4 billones, con una diferencia de $6,1 billones. En gastos de

funcionamiento la solicitud fue de $14,6 billones frente a $9,9 billones asignados, y en gastos de personal de $11,4 billones frente a $9,2 billones, para una planta de 40.362 servidores judiciales, de los cuales 38.730 son permanentes.

Conviene distinguir dos brechas que suelen confundirse. Una es la diferencia frente a lo solicitado, que asciende a $6,1 billones. La otra es la diferencia frente al mandato legal: el artículo 192C de la Ley 2430 de 2024, estatutaria de administración de justicia, dispone que a la Rama Judicial se destine el 3% del Presupuesto General de la Nación, con carácter gradual e incremental según lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia C-134 de 2023. Los $11,43 billones asignados equivalen al 1,80% del presupuesto de 2027; el 3% ascendería a $19,05 billones, de modo que la brecha frente a la norma es de $7,62 billones. A ello se suma que la misma ley establece que la apropiación de cada vigencia no puede ser inferior en términos reales a la del año anterior, y el incremento de 4,6% que trae el proyecto es inferior a la inflación proyectada.

El 23 de septiembre de 2026 el Ministerio de Hacienda avaló una incorporación de $100 mil millones para la Rama Judicial, destinada a gastos de personal y a la bonificación judicial. Es una señal que esta Comisión valora, pero conviene dimensionarla: equivale al 1,6% del déficit expuesto por la Judicatura y al 11,6% de los $865 mil millones que ordena la ley.

Es importante hacer énfasis en el costo de esa insuficiencia y en el crecimiento de la rama judicial. La demanda de justicia creció 23% desde 2022; las acciones de tutela pasaron de representar el 30% de esa demanda en 2022 al 42% en 2026, con 1.218.887 tutelas recibidas en 2025 y 5.771 diarias a agosto de 2026; y el tiempo promedio de resolución pasó de 24,9 meses en 2022 a 28,2 meses en 2026.

La Corte Suprema de Justicia y las altas cortes

Como se advierte, el presupuesto de las entidades que integran la Rama Judicial no se detalla de manera individual para la vigencia 2027, porque se encuentra englobado en una sola sección presupuestal. Esa sección comprende a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a la totalidad de los tribunales y juzgados del país.

La consecuencia es que ni el proyecto de ley ni su anexo permiten conocer cuánto se apropia para la Corte Suprema de Justicia, tribunal de casación y máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. Esa desagregación por unidad ejecutora solo se conoce cuando el Gobierno expide el decreto de liquidación, esto es, cuando el Congreso ya votó. El Legislativo aprueba así, año tras año, una apropiación global sobre cuya distribución interna no tiene información al momento de decidir.

A esa limitación se suma una de orden práctico. En la audiencia pública del 15 y 16 de septiembre de 2026 la Rama Judicial fue representada por el Consejo Superior de la Judicatura, que es su órgano de administración. Ninguna de las altas cortes expuso sus necesidades presupuestales ante esta Comisión, de modo que el informe no recoge cifra alguna atribuible de manera directa a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional.

Esta Comisión no puede afirmar hoy, con la información disponible en el proyecto, si la Corte Suprema de Justicia queda o no adecuadamente financiada para 2027 con los $11,4 billones.

VIII. Recomendaciones Finales del Informe

1. Solicitar al Gobierno nacional que, antes del primer debate, remita al Congreso la desagregación por unidad ejecutora de la sección de Rama Judicial, de modo que se conozca la apropiación prevista para la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y los despachos judiciales.
2. Recomendar que el decreto de liquidación del presupuesto de 2027 conserve esa desagregación y que, en adelante, el anexo del proyecto de ley la incorpore, para que el Congreso pueda verificar al momento de votar y no después.
3. Recomendar que en el trámite de las vigencias siguientes esta Comisión invite a rendir concepto presupuestal a los presidentes de las altas cortes, además del Consejo Superior de la Judicatura, dada la magnitud de la apropiación que se decide y la autonomía que la Constitución les reconoce.
4. Solicitar a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas que evalúen una incorporación adicional para la Rama Judicial, atendiendo a que la apropiación propuesta equivale al 1,80% del Presupuesto General de la Nación frente al 3% que ordena la ley estatutaria, y a que la incorporación de $100 mil millones avalada el 23 de septiembre cubre el 11,6% de lo que cuesta únicamente la bonificación judicial.
5. Solicitar al Ministerio de Hacienda que precise con qué partida se atenderá el pago de sentencias judiciales a cargo de la Fiscalía General de la Nación, estimado en $547 mil millones, y que informe si la apropiación de funcionamiento de esa entidad alcanza para la totalidad de la vigencia.
6. Solicitar al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi una explicación conjunta sobre el traslado de recursos del catastro multipropósito entre las dos entidades, con indicación de cuál ejecutará esa política en 2027 y bajo qué reparto de competencias.
7. Solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Hacienda que precisen qué monto corresponde al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral en 2027 y cuál es el costo estimado de las elecciones territoriales de octubre de ese año.
8. Recomendar que las incorporaciones que se aprueben para el sector justicia se condicionen a la presentación de planes de mejoramiento de la ejecución, en particular en la inversión de la Rama Judicial y en el programa de catastro de la Superintendencia de Notariado y Registro.
9. Hacer seguimiento a la ejecución del incremento presupuestal de la Rama Judicial, verificando su destinación efectiva a la descongestión judicial
10. Acoger la propuesta formulada en la audiencia de conformar mesas de trabajo interinstitucionales entre las tres ramas del poder público para identificar las causas de la

congestión judicial, revisar los procedimientos y establecer indicadores de productividad de la Rama Judicial.

11. Exigir al Gobierno Nacional un informe sobre el estado de ejecución del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y el destino de sus programas sociales.
12. Solicitar al Ministerio de Hacienda explicación formal sobre la reducción real (nominal insuficiente frente a inflación) en Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, en un año de crecimiento generalizado del gasto público.
13. Se hace un llamado a que, en ejercicio de la función de control político, se exija al Gobierno Nacional una hoja de ruta de sostenibilidad fiscal a mediano plazo, más allá de la vigencia 2027, como condición para el respaldo institucional al proyecto.
14. Se recomienda a las entidades del Gobierno nacional fortalecer los mecanismos de articulación y cofinanciación con departamentos y municipios en la ejecución de programas y proyectos que concurran sobre el territorio, particularmente en materia de seguridad y convivencia, bomberos, restitución de tierras y demás políticas que requieran capacidades territoriales, con el propósito de evitar duplicidades, mejorar la eficiencia de los recursos y fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales.
15. Se les pide a las entidades objeto del presente informe identificar e implementar oportunidades de transformación tecnológica, inteligencia artificial y conectividad que permitan reducir tiempos y costos, simplificar procedimientos y mejorar la eficiencia del gasto público, particularmente en procesos como las consultas previas, la restitución de tierras y las funciones de vigilancia y control fiscal.
16. Se recomienda la posibilidad de que con el Ministerio de Hacienda estas entidades evalúen las rigideces presupuestales identificadas durante las audiencias, particularmente la incidencia del principio de anualidad sobre la ejecución de recursos del sector agropecuario; revisar la adecuada clasificación de recursos entre funcionamiento e inversión, especialmente en Fonsecon; y presentar información sobre los recursos administrados mediante fondos extrapresupuestales, con el propósito de fortalecer su transparencia, trazabilidad y control.
17. Se recomienda la revisión sobre la programación y ejecución presupuestal para que incorpore un enfoque preventivo frente a riesgos previsibles que puedan generar mayores costos fiscales, económicos y sociales, particularmente los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sector agropecuario y la conflictividad territorial asociada al incremento de la actividad minero-energética.

Esta Comisión reitera que la austeridad fiscal es compatible con la financiación adecuada de la administración de justicia y de los organismos de control. Los recursos apropiados a estas entidades no son gasto discrecional: sostienen funciones que la Constitución ordena prestar y cuya interrupción o demora se traduce, como se expuso en la audiencia, en morosidad, y la morosidad en impunidad.

SANTIAGO BARRETO TRIANA
Senador de la República **(Coordinador)**

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Senador de la República **(coordinador)**

CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA
Senador de la República

ALFREDO RAFAEL DELUQUE
Senador de la República

HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA
Senador de la República

JOSE NICOLAS GOMEZ
Senador de la República

RAFAEL NIETO LOAIZA
Senador de la República

MANUEL VIRGUEZ PIRAQUIVE
Senador de la República

JONATHAN FERNEY PULIDO
Senador de la República

Comisión Cuarta <comision.cuarta@camara.gov.co>

Remisión Informe de la Comisión Accidental de Presupuesto de la Comisión Primera del Senado

1 mensaje

Comision Primera <comision.primera@senado.gov.co> 1 de octubre de 2026 a las 5:51 p.m.
Para: Comision Tercera <comision.tercera@senado.gov.co>, Comisión Tercera <comision.tercera@camara.gov.co>, nestor.imbett@camara.gov.co, Rafael Bernardo Oyola Ordosgoitia <rafael.oyola@senado.gov.co>, Comisión Cuarta Senado <comision.cuarta@senado.gov.co>, Alfredo Enrique Rocha Rojas <alfredo.rocha@senado.gov.co>, Comisión Cuarta <comision.cuarta@camara.gov.co>, "raul.rodriguez@camara.gov.co" <raul.rodriguez@camara.gov.co>
CC: "H.S. BARRETO TRIANA SANTIAGO" <santiago.barreto@senado.gov.co>, Maribel Guatavita Osorio <maribel.guatavita@senado.gov.co>, Antonio Emiliano Rivera Bravo <emiliano.rivera@senado.gov.co>

Buenas tardes, respetados señores Secretarios.

Adjunto en 81 folios el Informe allegado por la Comisión Accidental designada para presentar las observaciones y recomendaciones al Proyecto de Ley No. 152 de 2026 Cámara, 111 de 2026 Senado, "Por la cual se decreta el presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027", en lo relacionado a los temas de competencia de la Comisión Primera del Senado, para los fines pertinentes.

Cordial saludo:

Emiliano Rivera Bravo
Secretario General
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

2 archivos adjuntos

Remisión informe Comisión Accidental de Presupuesto 2026.pdf
101K

Informe Comisión de presupuesto (1).pdf
2492K